

Tesis**Registro digital:** 160116**Instancia:** Primera Sala**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** 1a./J. 136/2011 (9a.)**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA.

El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.

Contradicción de tesis 92/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, en apoyo del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito; el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 30 de septiembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez.

Tesis de jurisprudencia 136/2011 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintiséis de octubre de dos mil once.



Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 112/2003 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93.

Tesis

Registro digital: 160195

Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito

Décima Época

Materia(s): Común

Tesis: VI.Io.C.36 K (9a.)

Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.

Tipo: Aislada

QUEJA. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DETERMINA QUE LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR UNA DE LAS PARTES, EN RELACIÓN CON LA VISTA QUE LE DIO CON UN INFORME JUSTIFICADO, SERÁN TOMADAS EN CONSIDERACIÓN EN EL MOMENTO PROCESAL OPORTUNO O AL DICTAR LA SENTENCIA DE FONDO.

Conforme al artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, el recurso de queja procede contra: a) Las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, o el superior del tribunal, al que se impute el acto reclamado, en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley de Amparo, siempre que la resolución sea dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión; no admita expresamente el recurso de revisión; y que por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; y, b) Las determinaciones dictadas después de finalizada la primera instancia y que no sean reparables por las mismas autoridades que las dictaron o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, contra el acuerdo en que el Juez de Distrito determina que las manifestaciones vertidas por una de las partes, en relación con la vista que le dio con un informe justificado, serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno o al dictar la sentencia de fondo, para los efectos legales correspondientes, es improcedente el recurso de queja, ya que no puede considerarse un acto trascendental y grave, dada su naturaleza, aun cuando sea dictado durante la tramitación del juicio y no admita expresamente el recurso de revisión; en virtud de que la espera para que sea tomado en cuenta lo manifestado no repercute en la esfera personal y jurídica del recurrente, ni le ocasiona un perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, al no limitar su derecho a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados, ni vincular al Juez de Distrito a resolver la litis en determinado sentido, pues aquél debe atender a lo expuesto en la demanda de garantías, los actos reclamados y el informe rendido por la autoridad responsable.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

Queja 32/2011. Mirna Martha Cortés Benavente. 2 de junio de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Zayas Roldán. Secretaria: Mariana Zárate Sanabia.

Tesis**Registro digital:** 160363**Instancia:** Primera Sala**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** 1a./J. 111/2011 (9a.)**Fuente:** Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.

El auto dictado en el juicio de amparo indirecto que tiene por no rendido el informe justificado, no produce a la autoridad responsable una afectación trascendental y grave que pudiera ocasionarle un daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, ya que sus consecuencias no se traducen en actos irreparables. Esto es así, pues la imposición de la multa prevista en el artículo 149 de la Ley de Amparo por omitir rendir el informe, se decretaría hasta la sentencia del juez de distrito, la cual puede combatirse mediante el recurso de revisión. Asimismo, la presunción de certeza del acto por la falta de informe justificado, tampoco daría lugar a una afectación trascendental, e incluso, en el supuesto de que la autoridad negara el acto en su informe justificado y no se tomara en cuenta, no tendría efectos trascendentales, ya que el juicio de garantías no concluiría por tal circunstancia, pudiendo la autoridad inconformarse en el recurso de revisión, que de considerarse fundado conllevaría al sobreseimiento en el juicio por inexistencia de actos. Además, no priva del estudio oficioso de las causas de improcedencia ni restringe las facultades de la autoridad de ofrecer las pruebas con posterioridad, o bien, de la obligación de recabar las necesarias al juez de distrito. Así, la litis del amparo no se vería modificada, ya que la rendición del informe justificado por las autoridades responsables no es determinante para fijar la controversia, sin perjuicio de que su contenido pueda dar pauta al quejoso de ampliar su demanda de garantías, o al ofrecimiento de pruebas supervenientes, resultado de argumentos o elementos novedosos aportados por la autoridad en el informe. Por tanto, el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, es improcedente cuando lo interpone la autoridad responsable contra el auto que tiene por no rendido su informe justificado, pues se trata de actuaciones inciertas, que dependen exclusivamente de la voluntad de las demás partes, principalmente del quejoso, y en tal caso, quienes podrían alegar contra dicha negativa serían éstas, pero no la autoridad responsable que lo interpuso.

Contradicción de tesis 73/2011. Entre las sustentadas por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 17 de agosto de 2011. Mayoría de tres votos. Disidentes: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Alejandro Castañón Ramírez.

Tesis de jurisprudencia 111/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha cinco de octubre de dos mil once.

Tesis**Registro digital:** 160680**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Décima Época****Materia(s):** Común, Laboral**Tesis:** III.3o.(III Región) 25 L (9a.)**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

INTERÉS JURÍDICO. CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DICTADO DEL LAUDO RESPECTIVO Y SE TIENE POR CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y ANTE LA AUSENCIA DE PRUEBAS DE SI EL AGRAVIADO ES PARTE DEL JUICIO LABORAL, ES IMPROCEDENTE SOBRESEER CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN V Y 74, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, PUES A ELLO DEBE ATENDERSE PARA DETERMINAR SI SE NIEGA O CONCEDE EL AMPARO.

En la hipótesis de reclamar la omisión de resolver un juicio atribuido a un órgano de justicia laboral, sin que exista constancia fehaciente de que el promovente sea parte en aquél (como ocurre en el supuesto de falta de informe justificado de la responsable y que haya operado la presunción de certeza del acto atribuido en términos del artículo 149, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que obre copia certificada del juicio natural ni el agraviado hubiere aportado prueba fehaciente al respecto), no es acertado sobreseer en el amparo por falta de interés jurídico con apoyo en los preceptos 73, fracción V y 74, fracción III, de la referida legislación. Lo anterior por las siguientes razones: 1) el quejoso debe demostrar fehacientemente que es parte en el juicio de origen y, por ende, la titularidad del derecho fundamental que aduce infringido, como es el de acceso a una justicia pronta (artículo 17 constitucional), constituye una cuestión relacionada directamente con el fondo del asunto, es decir, con la carga de la prueba que al efecto le asiste para evidenciar la violación de garantías, lo que es propio del estudio de constitucionalidad del acto reclamado, por lo que ante esa conexión con la litis constitucional, correspondería desestimarla como aspecto de improcedencia del amparo, 2) conforme a la jurisprudencia 2a./J. 44/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. PROCEDE CONTRA LAS OMISIONES Y DILACIONES EN EL TRÁMITE DE UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, AUN TRATÁNDOSE DE LAS SUBSECUENTES A LAS RECLAMADAS.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 373, frente a esa clase de conductas omisivas no se materializa, entre otras causales de improcedencia, la relativa a la falta de interés jurídico prevista en el numeral 73, fracción V, porque el promovente conserva dicho interés para solicitar la tramitación expedita del juicio laboral, cuya demora afecta directamente su esfera de derechos, mientras no se agote cabalmente en sus términos y plazos, ni se emita laudo dentro de ellos, es decir, conserva su derecho a pretender una tramitación y resolución pronta del asunto; y, 3) tratándose de la protección de los derechos fundamentales -los cuales forman parte del núcleo básico de las finalidades del Estado-, mediante la tramitación del juicio de amparo, no debe ser desproporcionadamente formalista o rigorista, pues al servicio de tal protección deben ponerse los instrumentos necesarios para que se resuelva con eficacia cualquier vulneración de éstos, quedando, por tanto, limitados en la medida de lo posible, aquellos supuestos extraordinarios en que el Juez constitucional no pueda ejercer su atribución frente al planteamiento del gobernado. En ese contexto, no resulta compatible y proporcionalmente justificado con el señalado acceso sencillo y efectivo al amparo, lo relativo a decidir como aspecto de improcedencia lo que es propio del fondo. En efecto, si lo que pretende

defenderse como derecho fundamental violado es la propia garantía de tutela judicial efectiva, en lo relativo a su prontitud, reclamando una omisión indebida de dictar laudo en el juicio laboral del que el quejoso refiere ser parte, entonces debe ser el pronunciamiento del Juez de Distrito en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto el que dirima ese aspecto, en razón de lo que correspondía a la carga de la prueba al impetrante de garantías para evidenciar la violación atribuida. Por tanto, no es acertado que cuando se hubiere tenido por cierto el acto reclamado por falta de informe justificado de la responsable, ante la falta de pruebas sobre si el agraviado es parte del juicio laboral, corresponda sobreseerlo por la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, sino que tal situación debe atenderse para determinar si corresponde negar o conceder la protección constitucional solicitada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

Amparo en revisión 589/2011. 25 de agosto de 2011. Mayoría de votos. Disidente: Juan José Rosales Sánchez. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretario: Karlos Alberto Soto García.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 153/2012, de la que derivó la tesis jurisprudencial P./J. 23/2014 (10a.) de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUEL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO."

Tesis**Registro digital:** 161014**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común, Penal**Tesis:** I.6o.P.134 P**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA EL AUTO DEL JUEZ DE DISTRITO QUE NIEGA AL INculpADO LA SOLICITUD DE COPIAS FOTOSTÁTICAS DEL INFORME JUSTIFICADO Y DE SUS ANEXOS, CONSISTENTES EN CONSTANCIAS DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA RELATIVA A UNA ORDEN DE ARRAIGO.

La fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo contiene requisitos de procedibilidad del recurso de queja que atienden a la intención de garantizar que el trámite y la resolución del juicio de garantías sean expeditos dada su naturaleza de juicio concentrado y sumario; de ahí que condicione la procedencia de dicho recurso a las resoluciones: (i) emitidas por los Jueces de Distrito o el superior del tribunal a quien se impute la violación; (ii) dictadas durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión, o las que se dicten después de fallado el juicio en primera instancia, cuando no sean reparables por las mismas autoridades o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación con arreglo a la ley; y (iii) que no admitan expresamente el recurso de revisión y que, por su naturaleza trascendental y grave, puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia definitiva; este último requisito será valorado por el Tribunal Colegiado de Circuito en cada caso particular, de acuerdo a las peculiaridades propias del asunto, según lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 74/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, junio de 2001, página 6, de rubro: "PRUEBAS OFRECIDAS O ANUNCIADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL AUTO DE LOS JUECES DE DISTRITO POR EL QUE ORDENAN SU PREPARACIÓN Y DESAHOGO, EXCEPCIONALMENTE ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL RECURSO DE QUEJA, SIEMPRE Y CUANDO PUEDAN CAUSAR UN DAÑO O PERJUICIO TRASCENDENTE, GRAVE Y DE IMPOSIBLE REPARACIÓN EN LA SENTENCIA DEFINITIVA; LO QUE EN CADA CASO DEBERÁ DETERMINAR EL TRIBUNAL COLEGIADO COMPETENTE.". De lo anterior se colige que es improcedente el recurso de queja promovido contra el auto del Juez de Distrito que niega al quejoso la solicitud de copias fotostáticas del informe justificado y de sus anexos, consistentes en constancias de una averiguación previa cuando el acto reclamado se trate de una orden de arraigo; lo anterior es así, porque dicho auto no es una resolución trascendental que pueda causarle daño al quejoso, no reparable en la sentencia, pues sus efectos pueden ser desvanecidos o "reparados" en sentencia definitiva para el caso que el Juez de Distrito conceda el amparo solicitado y, en el supuesto de que el quejoso alegue falta de tiempo para conocer en su integridad el informe justificado y sus anexos, tal circunstancia puede hacerla valer en vía de agravio en el recurso de revisión, en donde el Tribunal Colegiado de Circuito, si lo estima fundado, pueda ordenar la reposición del procedimiento del juicio de amparo; además, no puede estimarse que el auto impugnado sea grave, ya que el quejoso puede consultar las constancias del informe justificado no sólo ante la autoridad ministerial que instruye la averiguación previa, sea personalmente o a través de las personas que lo asistan en su defensa, sino también en el mismo local del Juzgado de Distrito, igualmente, no debe soslayarse que opera a su favor la

suplencia de la queja, y aun ante la ausencia de conceptos de violación o su ampliación, con motivo del conocimiento de las razones y los fundamentos del acto reclamado, existirá por parte del juzgado de amparo un estudio integral del acto reclamado; por otra parte, el quejoso tiene derecho a ofrecer ante la autoridad ministerial responsable los medios de prueba que considere necesarios para su defensa, no así ante el Juez de garantías quien, en todo caso, debe apreciar el acto como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no admitirá ni tomará en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, conforme al artículo 78 de la ley de la materia.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 21/2011. 26 de mayo de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretario: Gerardo Flores Zavala.

Tesis**Registro digital:** 161248**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** IV.3o.T.56 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

PERSONALIDAD EN LA QUEJA. ES ILEGAL EL AUTO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE REQUIERE AL PROMOVENTE PARA ACREDITAR AQUÉLLA, CON EL APERCIBIMIENTO DE TENER POR NO INTERPUESTO EL RECURSO SI NO LA DEMUESTRA, YA QUE LAS ACTUACIONES QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ENVIAR CON SU INFORME JUSTIFICADO, PERMITIRÁN CONSTATAR SI ESTÁ SATISFECHO O NO EL CITADO PRESUPUESTO PROCESAL.

El hecho de que el promovente de la queja comparezca asegurando tener su personalidad debidamente acreditada ante el Juez de Distrito, sin que su aseveración se encuentre respaldada con alguna prueba anexa al escrito de interposición respectivo, no faculta al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito a requerir al inconforme para que justifique la representación con que promueve, apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso. Lo anterior es así, porque examinadas las actuaciones relativas que el Juez de Distrito debe enviar con su informe justificado en términos de los artículos 98 y 99 de la Ley de Amparo, la presidencia podrá constatar la veracidad de lo señalado por el recurrente en cuanto a su personalidad y, en su caso, tomar la decisión que corresponda si las constancias revelan que no la tiene reconocida en los términos que adujo en el escrito de interposición. En tales condiciones, dicho requerimiento es ilegal y debe revocarse el auto de presidencia que reservó la admisión de la queja hasta que el requerido acreditara su personalidad, habida cuenta que esa determinación no responde al criterio que tuvo el legislador al disponer en los preceptos invocados que la tramitación de la queja se sujetará a dar entrada al recurso, requerir a la autoridad contra la que se haya interpuesto para que rinda informe con justificación sobre la materia del recurso, y luego, con informe o sin él, después de dar vista al Ministerio Público, dictar la resolución que proceda; además de que, sostener una interpretación distinta de las normas legales señaladas restringe el acceso a la jurisdicción establecida por el legislador, pues el citado requerimiento se erige como un aspecto que impide u obstaculiza el trámite al que debe sujetarse la queja y que difiere del que rige para el juicio de amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

Reclamación 1/2011. Javier Arnoldo Maldonado Morales. 1o. de junio de 2011. Mayoría de votos. Disidente: José Luis Torres Lagunas. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretaria: Diana Alejandra Calderón Eivet.

Tesis**Registro digital:** 161480**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** VII.2o.(IV Región) 1 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SI AL EXAMINARSE LA DEMANDA O AL RECIBIRSE EL INFORME JUSTIFICADO, NO SE PREVIENE AL QUEJOSO RESPECTO A LA INCLUSIÓN DE ALGUNA AUTORIDAD NO SEÑALADA INICIALMENTE COMO RESPONSABLE PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 30/96 Y 2a./J. 112/2003).

De la interpretación de los artículos 145, 146 y 147 de la Ley de Amparo y de las jurisprudencias de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 30/96 y 2a./J. 112/2003, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos III, junio de 1996 y XVIII, diciembre de 2003, páginas 250 y 93, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA." e "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", respectivamente, se infiere que hay dos momentos procesales en el amparo indirecto en los que el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que incluya en el juicio a una autoridad no señalada inicialmente como responsable; el primero, cuando dicha circunstancia se advierte de la demanda, caso en el cual requerirá al impetrante con el apercibimiento relativo en términos del artículo 146, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que precise si señala o no como responsable a esa autoridad; y el segundo, cuando se derive del informe justificado, hipótesis en que deberá notificarse personalmente a la quejosa el contenido de dicho informe y prevenirla para que aclare o amplíe su demanda, prevenciones que no quedan al arbitrio del juzgador, sino que debe cumplirlas estrictamente en los casos apuntados, en acatamiento a los preceptos de la Ley de Amparo y a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para lo cual el Juez de Distrito debe revisar acuciosamente el contenido de la demanda y los informes justificados. Por consiguiente, es contrario a las normas que rigen el procedimiento del juicio de garantías que con posterioridad a las dos oportunidades procesales mencionadas y bajo el pretexto de subsanar una omisión, se ordene ese requerimiento a la parte quejosa y en virtud de su incumplimiento se sobresea en el juicio de amparo, pues si dicha prevención no se realizó al examinarse la demanda ni al recibirse el informe justificado, se entiende que el juzgador no detectó la participación de alguna autoridad no señalada como responsable que debiera llamarse al juicio constitucional, ni consideró necesario requerir a la impetrante en ese sentido. Lo anterior resulta trascendente al proceso, en virtud de que la ausencia del requerimiento genera una certeza procesal de que se encuentra integrada la litis constitucional y que debe estarse en espera del dictado del fallo; de ahí que si la prevención no se hace oportunamente, debe reponerse el procedimiento y no sancionarse la omisión del quejoso, porque tal prevención por ser extemporánea en sí misma es ilegal y no puede acarrear una consecuencia desfavorable al gobernado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

Amparo en revisión 346/2010. 14 de abril de 2011. Mayoría de votos. Disidente: Ezequiel Neri Osorio. Ponente: Salvador Castillo Garrido. Secretario: Víctor Manuel Contreras Lugo.

Tesis

Registro digital: 161781

Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito

Novena Época

Materia(s): Común

Tesis: III.4o.A.8 K

Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.

Tipo: Aislada

PRUEBAS EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. LA SOLICITUD DEL QUEJOSO AL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE REQUIERA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A FIN DE QUE ACLARE EL SIGNIFICADO DE UNAS SIGLAS QUE SE ENCUENTRAN EN UN ACTA ADMINISTRATIVA QUE REMITIÓ CON SU INFORME JUSTIFICADO, NO SE EQUIPARA A UNA CONFESIONAL POR ABSOLUCIÓN DE POSICIONES.

La solicitud formulada por el quejoso al Juez de Distrito, en el sentido de que requiera a la autoridad responsable para que aclare lo que significan unas siglas que se encuentran en un acta administrativa que remitió con su informe justificado, no se equipara a una confesional por absoluciónde posiciones, toda vez que la aclaración solicitada no puede considerarse como una posición redactada en forma afirmativa que tuviera que absolver dicha autoridad, sobre algún hecho que le hubiera sido imputado por el quejoso en la demanda de garantías, como inconstitucionalidad del acto reclamado, o sea, sobre algún hecho que le perjudica, pues el uso de tales siglas en la aludida acta, es una situación o circunstancia innegable que no puede cambiarse, y la aclaración por parte de la autoridad responsable de su significado, no implica confesión alguna en relación con la inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior, en virtud de que la confesión es una declaración de parte, que contiene el reconocimiento de un hecho de consecuencias jurídicas desfavorables para la confesante, en términos del artículo 96 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, motivo por el que, la aclaración que formulara la autoridad al respecto, no tendría porqué ser valorada como una prueba confesional por absoluciónde posiciones, al no implicar el significado de las aludidas siglas, una confesión.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Queja 173/2010. Jorge Armando Gutiérrez Barragán. 22 de febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Bonilla Pizano. Secretaria: Emilia Hortencia Algaba Jacquez.

Tesis**Registro digital:** 162386**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** I.9o.A.19 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

DEMANDA DE AMPARO. CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑEN AL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS O INFORMACIÓN QUE EL QUEJOSO NO CONOCÍA AL MOMENTO DE SOLICITAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE DARLE VISTA PERSONALMENTE PARA QUE MANIFIESTE SI AMPLÍA AQUÉLLA (APLICACIÓN ANALÓGICA DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 112/2003).

De la interpretación armónica de los artículos 116, fracción IV y 146 a 148 de la Ley de Amparo, se advierte el principio general que regula el trámite de la demanda de garantías, conforme al cual el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que la aclare, corrija o subsane las deficiencias que presente, a fin de lograr la eficaz integración del juicio. Por otra parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", determinó que cuando al rendirse el informe justificado el juzgador advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho documento y prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición. En estas condiciones, de la aplicación analógica de dicho criterio se concluye que cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe la existencia de documentos o información que el quejoso no conocía al momento de solicitar la protección constitucional, el Juez de Distrito debe darle vista mediante notificación personal para que manifieste si amplía su demanda pues, de lo contrario, quedaría inaudito y la administración de justicia no sería eficaz ni completa.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 117/2010. Edgar Nava Vázquez. 25 de junio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Juana Ruiz, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Hortensia González Ruiz.

Nota: Por ejecutoria del 21 de septiembre de 2016, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 27/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en



esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Tesis**Registro digital:** 162927**Instancia:** Primera Sala**Tesis:** 1a./J. 126/2010**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Común**Tipo:** Jurisprudencia

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA SU CELEBRACIÓN NO ES NECESARIO QUE MEDIE EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE AMPARO, ENTRE EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO Y LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN, CUANDO ÉSTA FUE OMISA EN RENDIRLO.

La audiencia constitucional puede celebrarse aun sin el informe justificado de la autoridad responsable, en cuyo caso el artículo 149, tercer párrafo, de la Ley de Amparo establece la consecuencia de tal omisión, consistente en la presunción de certeza de los actos. Por otra parte, el artículo 151 de la ley de la materia prevé la oportunidad para ofrecer la prueba testimonial o pericial a fin de acreditar algún hecho, las cuales deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para ésta. Ahora bien, toda vez que en el juicio de amparo corresponde a la quejosa probar su interés jurídico y la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo cual no se acreditó con la omisión de la autoridad responsable de rendir su informe justificado, sino que la carga de la prueba le corresponde desde el momento de la presentación de la demanda de garantías, el juez de amparo no está en aptitud de diferir la audiencia constitucional por el hecho de no contar con el informe justificado de la autoridad responsable. Al ser esto así, es innecesario que para la celebración de la audiencia medie el plazo previsto para el ofrecimiento de la prueba testimonial o pericial entre la fecha de la celebración y la fecha en que feneció el plazo para rendir el informe con justificación, cuando la autoridad fue omisa en rendirlo.

Contradicción de tesis 59/2010. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 17 de noviembre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.

Tesis de jurisprudencia 126/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diez.

Tesis**Registro digital:** 163703**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XIX.1o.P.T.4 K**Fuente:** Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

ACTO RECLAMADO. EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA ACEPTÉ SU EXISTENCIA Y LA ORDENADORA LA NIEGUE REQUIERE DE UNA EVALUACIÓN DETENIDA QUE INCLUYA EL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME JUSTIFICADO QUE RESPALDEN SUS MANIFESTACIONES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO).

Si las autoridades responsables ordenadoras, al rendir su informe justificado niegan los actos reclamados pero las ejecutoras los aceptan, no debe razonarse sistemáticamente que los actos sean inexistentes por así haberlo dicho las primeras o que éstos existan por un mero reconocimiento de las segundas. El tema de la aceptación de la existencia del acto reclamado por la autoridad ejecutora es un aspecto procesal que debe evaluarse con detenimiento, pues no debe desconocerse que en el juicio de garantías la intervención de las autoridades responsables no se caracteriza normativamente por la sola formulación de manifestaciones genéricas de su parte, sino que, conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, se exige que a los informes se les anexe justificación, o sea documentos que respalden y sirvan tanto de sustento como de demostración a sus afirmaciones, ya que el solo reconocimiento de los actos reclamados, sin el análisis de los aludidos elementos, puede resultar insuficiente para acreditar su existencia y, más aún, para proceder a un estudio de constitucionalidad, pues se trata, en todo caso, de hechos ajenos a dicha ejecutora y propios de la ordenadora, además, hay que recordar que la confesión no puede recaer sobre hechos ajenos a quien la produce.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión 42/2010. Nora Hilda Gómez Piñeyro. 14 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Emmanuel G. Rosales Guerrero. Secretario: Alfonso Bernabé Morales Arreola.

Tesis

Registro digital: 164315

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época**

Materia(s): Penal

Tesis: III.2o.P.237 P

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tipo: Aislada

INFORME JUSTIFICADO. ALCANCE DEL SIGILO MINISTERIAL EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA, AL ACOMPAÑAR LAS CONSTANCIAS RELATIVAS.

Si al rendir su informe con justificación el agente del Ministerio Público de la Federación investigador acompaña la resolución que ordena el aseguramiento de bienes inmuebles y cuentas bancarias a nombre de los quejosos; empero, bajo la consideración del sigilo ministerial previsto por el artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales, la constancia enviada se encuentra testada de tal forma en que no resulta clara ni comprensible; en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá requerir al órgano investigador responsable para que remita el correspondiente acto reclamado, sin menoscabo de la secrecía de la indagatoria, que sea claro y comprensible, adjuntando adicionalmente las pruebas necesarias en que se apoyó para su emisión, a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad; en su defecto, en términos del ordinal 91, fracción IV del citado ordenamiento jurídico, el tribunal revisor deberá ordenar la reposición del procedimiento, para que se recaben oficiosamente por la autoridad recurrida.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 379/2009. 8 de abril de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretaria: Ana Gabriela Urbina Roca.

Tesis**Registro digital:** 164630**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XXX.1o.2 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL AMPARO INDIRECTO. PARA FIJAR LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN DEBEN CONSIDERARSE AL MENOS LOS CINCO DÍAS HÁBILES QUE TIENE LA AUTORIDAD PARA RENDIR EL INFORME JUSTIFICADO Y OCHO PARA QUE EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO SE IMPONGA DE ÉSTE.

Conforme a las reglas contenidas en los artículos 147 y 149 de la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia P./J. 54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 5, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.", para fijar la fecha de celebración de la audiencia constitucional deben considerarse al menos los cinco días hábiles que tiene la autoridad para rendir el informe justificado y ocho días hábiles para que el quejoso o el tercero perjudicado se imponga de éste, pues el juzgador no puede anticipar si la autoridad rendirá su informe antes del término conferido -lo que sin duda alguna puede acontecer-, o bien, si lo hará con posterioridad, por lo que ambos plazos se erigen como pilares de las garantías de defensa y de acceso a la justicia de los gobernados, previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que sea obstáculo que el juicio de amparo sea un proceso concentrado, sumario y de pronta resolución, toda vez que la oportunidad otorgada a las partes para probar los hechos en que sustentan su pretensión, constituye una formalidad esencial del procedimiento y la garantía de celeridad en la impartición de justicia encuentra su límite cuando se impide a los justiciables acceder a ella en forma suficiente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 593/2009. Armando González Valdez. 11 de marzo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Silverio Rodríguez Carrillo. Secretario: Jaime Páez Díaz.

Tesis**Registro digital:** 164749**Instancia:** Pleno**Tesis:** P./J. 35/2010**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Administrativa**Tipo:** Jurisprudencia

NORMAS TRIBUTARIAS QUE ESTABLECEN UN TRATO DIFERENCIADO ENTRE CONTRIBUYENTES QUE SE UBICAN EN CIRCUNSTANCIAS SIMILARES. LAS RAZONES TENDENTES A EXPLICARLO PUEDEN EXPONERSE EN EL INFORME JUSTIFICADO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el requisito de motivación de los actos legislativos se satisface cuando las leyes se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas, sin que ello implique que todas y cada una de las disposiciones que integran una ley deban ser materia de una motivación específica. Asimismo, ha considerado que para emitir un juicio de constitucionalidad respecto de normas que establecen un trato diferenciado no es indispensable que en el proceso legislativo se hayan expresado las razones que justifican esa determinación, pues la autoridad jurisdiccional competente deberá analizar tales normas a la luz de los principios constitucionales y atento a los argumentos expuestos por los interesados para determinar si resultan o no contrarias a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En congruencia con lo anterior, si el Poder Legislativo no está constitucionalmente obligado a exponer una motivación específica y concreta para cada precepto, debe dársele oportunidad de expresar los argumentos correspondientes en el informe justificado, los cuales deberán ser atendidos por el juzgador. Sostener lo contrario implicaría dejar inaudita y en estado de indefensión a la autoridad legislativa pues, por una parte, se le exime de la obligación de aportar una motivación específica en el proceso legislativo que culmina con la expedición del ordenamiento legal cuestionado y, por otra, se haría caso omiso de las razones que se aportan en el juicio para justificar la distinción de trato. Cabe precisar que ese proceder dota a los justiciables de mayor seguridad jurídica, pues se logra un mejor control de la regularidad constitucional en la medida en que el órgano jurisdiccional competente contará con más elementos de juicio, lo que le permitirá adoptar una determinación de mayor rigor técnico y jurídico, máxime cuando es el órgano creador de la norma -es decir, el que mejor conoce los motivos tomados en cuenta para su emisión- quien aporta elementos para hacer un análisis constitucional más completo.

Contradicción de tesis 6/2007-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 11 de marzo de 2010. Mayoría de diez votos. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Francisco Gorka Migoni Goslinga.

El Tribunal Pleno, el doce de abril en curso, aprobó, con el número 35/2010, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a doce de abril de dos mil diez.

Tesis**Registro digital:** 164773**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Penal**Tesis:** III.2o.P.235 P**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO Y AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA A EFECTUAR LA ADECUACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN, CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE UNA REFORMA QUE LE RESULTA BENÉFICA AL SENTENCIADO, LA PRESENTACIÓN Y CELEBRACIÓN RESPECTIVAS, NO SE VEN REGIDAS POR EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO, SINO POR EL 149 DEL MISMO ORDENAMIENTO.

Cuando se reclama la negativa a efectuar la adecuación de la pena de prisión, con motivo de la entrada en vigor de una reforma a la ley sustantiva que le resulta benéfica al sentenciado, no se conforma uno de los casos de excepción, que para reducir los plazos en el trámite del juicio de amparo indirecto, previene el referido artículo 156 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ya que con ello no se está impugnando la aplicación de la ley declarada inconstitucional por el Máximo Tribunal del país, ni se está en alguno de los casos a que se refiere el artículo 37 de la invocada legislación, por no conformar un reclamo de violación de las garantías de los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, apartado A, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo de la Constitución Federal, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, por lo que la presentación del informe con justificación y la celebración de la audiencia constitucional, habrá de regirse por la regla general que al efecto previene el artículo 149 de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 21/2010. 25 de febrero de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: José Alfredo Gutiérrez Barba. Secretario: Fernando Cortés Delgado.

Tesis**Registro digital:** 164943**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** III.4o.A.7 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE DICHO RECURSO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR RECIBIDO EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AUN CUANDO SE ADUZCA QUE QUIEN LO SUSCRIBE CARECE DE LEGITIMACIÓN.

El auto que tiene por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable no es un acto de naturaleza trascendental y grave que cause daño o perjuicio irreparable en sentencia definitiva del amparo, toda vez que no irroga transgresión a la esfera jurídica del quejoso, pues no lo deja sin defensa ni con él se varía la litis y sí, en cambio, le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho convenga, a fin de intentar desvirtuar lo aseverado en ese escrito, aunado a que será, en su caso, la resolución que se llegare a dictar en la audiencia constitucional, la que pudiese causarle perjuicio, lo que puede ser reparado a través del recurso de revisión regulado en el artículo 83 de la Ley de Amparo, en el que podrá destacar todas las violaciones que estime se configuraron en su contra durante el trámite del juicio o en el fallo; además, dicho proveído sólo constituye una determinación de trámite tendente a fijar la litis, sin que, en sí mismo, contenga decisión alguna en cuanto a determinar la constitucionalidad o no de los actos reclamados, lo cual será materia de estudio en la sentencia definitiva y, por esa razón, tampoco configura un perjuicio para el recurrente, por lo que contra este auto es improcedente el recurso de queja previsto en el artículo 95, fracción VI, de la citada ley, aun cuando se aduzca que quien suscribe dicho informe carece de legitimación, porque si bien es cierto que las cuestiones de personalidad son de previo y especial pronunciamiento, también lo es que dicha particularidad no excluye los requisitos o condiciones de procedencia del mencionado recurso de queja, entre otros, que el auto impugnado sea de naturaleza trascendental y grave, con posibilidad de causar un daño o perjuicio no reparable en la sentencia definitiva, circunstancia que en el caso no se configura por las razones expuestas, aunado a que si quien compareció a rendir el informe careciera de personería o legitimación para hacerlo, debe tenerse presente que el juicio de garantías debe continuar su trámite y, a pesar de ello, la parte quejosa puede obtener fallo favorable, en virtud que el procedimiento respectivo no requiere necesariamente la intervención de la responsable, lo cual se corrobora con el numeral 149, tercer párrafo, de la referida legislación, al prever que cuando el ente estatal no rinda su informe con justificación se presumirá la certeza de los actos atribuidos a éste, lo cual denota que se trata de un procedimiento sumario y dicha peculiaridad podría verse afectada si de manera indiscriminada se aceptare la procedencia de la señalada queja, por actuar al margen de las condiciones aludidas. Por las razones expuestas, este órgano jurisdiccional se aparta del criterio sostenido en la queja 65/2006, resuelta el 17 de enero de 2007, de la cual derivó la tesis III.4o.A.1 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 1807, de rubro: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ANALIZA LA OBJECCIÓN A LA PERSONALIDAD DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, POR SER UNA CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO.". Consecuentemente, la jurisprudencia P./J. 4/2001, del Pleno de

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual se sustentó la invocada ejecutoria, publicada en el citado Semanario y época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", es inaplicable al caso, pues aun cuando se refiere al tema de la personería, es en relación con juicios en instancias ordinarias, no con el amparo, lo cual es comprensible si se tiene en cuenta que ante ese tipo de autoridades cabe la posibilidad de que dicha instancia concluya por la falta de atribuciones para actuar en un procedimiento determinado, particularidad que no puede configurarse en sede constitucional, dada la intención legislativa de dotar de la indicada característica de sumariidad al juicio de garantías.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Queja 102/2008. Celso Rodríguez González. 6 de noviembre de 2008. Mayoría de votos. Disidente: Julio Ramos Salas. Ponente: Martín Ángel Rubio Padilla. Secretario: Miguel Mora Pérez.

Queja 55/2009. Miguel Bravo Castro. 29 de mayo de 2009. Mayoría de votos. Disidente: Julio Ramos Salas. Ponente: Martín Ángel Rubio Padilla. Secretario: Abel Ascencio López.

Nota: Esta tesis abandona el criterio sostenido por el propio tribunal en la diversa III.4o.A.1 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 1807, de rubro: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ANALIZA LA OBJECCIÓN A LA PERSONALIDAD DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, POR SER UNA CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO."

Tesis**Registro digital:** 164948**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XXI.2o.P.A.47 K**Fuente:** Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES EN EL AMPARO. SI LA AUTORIDAD ORDENADORA OMITE RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, PERO LA EJECUTORA ACEPTA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y EXHIBE COPIA CERTIFICADA DEL OFICIO MEDIANTE EL CUAL AQUÉLLA LE REMITIÓ UN TANTO PARA SU EJECUCIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS QUE SE TUVIERON A LA VISTA PARA SU EMISIÓN.

Si en el juicio de garantías la autoridad responsable ordenadora omite rendir su informe justificado, pero la ejecutora, al cumplir esta obligación procesal, acepta la existencia del acto reclamado y exhibe copia certificada del oficio mediante el cual aquella autoridad le remitió a su vez un tanto para su ejecución, el Juez de Distrito debe, en acatamiento al artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, recabar oficiosamente tanto la resolución reclamada como las pruebas y actuaciones que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto, esto es, aquellas que la autoridad ordenadora tuvo a la vista para la emisión del acto que se reclama; lo anterior, por presentarse una situación análoga a la prevista en el segundo párrafo del artículo 149 del ordenamiento señalado, es decir, tener por demostrada con certeza la existencia del acto reclamado y no solamente su presunción, como lo establece el tercer párrafo del indicado precepto, pues de lo contrario se actualizaría una violación a las normas fundamentales que rigen el juicio de amparo que ameritaría revocar la sentencia reclamada y reponer el procedimiento en términos del artículo 91, fracción IV, de la ley de la materia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 446/2009. Amadeo González Basurto y otro. 8 de octubre de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Mario Alejandro Noguera Radilla.

Tesis**Registro digital:** 165287**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Administrativa**Tesis:** III.4o.A.68 A**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

DERECHO DE PETICIÓN. SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ÉSTE EL JUEZ DE DISTRITO NO APRECIA EL INFORME JUSTIFICADO Y SUS CONSTANCIAS, A PESAR DE ADVERTIRSE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD DIVERSA A LA INDICADA COMO RESPONSABLE O LA EXISTENCIA DE ACTOS DISTINTOS DEL RECLAMADO Y, POR ENDE, NO DA VISTA AL QUEJOSO PARA QUE AMPLÍE O ACLARE SU DEMANDA, EN EL RECURSO DE REVISIÓN QUE SE INTERPONGA CONTRA TAL OMISIÓN DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.

Si bien es cierto que las jurisprudencias 2a./J. 205/2008 y 2a./J. 149/2006, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXIX y XXIV, enero de 2009 y octubre de 2006, páginas 605 y 334, respectivamente, de rubros: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA." y "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN.", prevén la posibilidad del quejoso de ampliar su demanda de amparo cuando del informe justificado se advierta la participación de una autoridad no señalada por él o si hubiere uno o más actos nuevos no reclamados, también lo es que dichos criterios no relevan al juzgador de amparo de su obligación, en las mencionadas hipótesis, de dar vista con dicho informe al peticionario de garantías, mediante notificación personal, a fin de darle oportunidad de ampliar o aclarar su demanda si lo estima conveniente, pues aquél debe acatar la diversa jurisprudencia 2a./J. 112/2003, difundida en el aludido Semanario y Época, Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.". Por tanto, si en el juicio de amparo promovido por violación al derecho de petición el Juez de Distrito no aprecia el informe justificado y sus constancias, a pesar de advertirse la participación de una autoridad diversa a la indicada como responsable o la existencia de actos distintos del reclamado y, por ende, no da vista al quejoso para que amplíe o aclare su demanda, en el recurso de revisión que se interponga contra tal omisión debe ordenarse la reposición del procedimiento para subsanar tal irregularidad, con fundamento en la tesis citada en último término y en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, porque es al particular a quien corresponde decidir si amplía o aclara su pretensión inicial, lo cual no puede ser vedado por el rector del proceso.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 489/2008. Titular de la Subdelegación Hidalgo y Jefe de Servicios Jurídicos de la Delegación Estatal en Jalisco, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 10 de junio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Ángel Rubio Padilla. Secretario: Miguel Mora Pérez.

Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 92/2011, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión celebrada el treinta de septiembre de dos mil once, en la cual se determinó que no existe la contradicción de criterios sustentados, entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y los Tribunales Colegiados de Circuito Primero del Centro Auxiliar de la Octava Región y Cuarto en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por el contrario que sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. De esta contradicción de tesis derivó la tesis 1a./J. 136/2011 (9a.), que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VIII, Tomo 1, mayo de 2012, página 801, con el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE, AMPLÍE SU DEMANDA."

Tesis**Registro digital:** 166032**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a./J. 189/2009**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Común**Tipo:** Jurisprudencia

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. PROCEDE SU ESTUDIO SI COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA, AUNQUE INTRODUZCAN ARGUMENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON EXPUESTOS EN EL INFORME JUSTIFICADO.

Conforme a los artículos 78 y 149 de la Ley de Amparo, la litis del juicio de amparo indirecto se integra por los conceptos de violación y el acto o actos reclamados. En ese contexto, el informe justificado no tiene como propósito cerrar el debate, sino por el contrario, dar noticia de la existencia del acto reclamado, de la procedencia del juicio y de los diversos elementos que fueron del conocimiento de la responsable que permitan soportar la constitucionalidad de los actos reclamados, quedando fuera de la controversia las explicaciones, aclaraciones y complementos que sobre el acto reclamado se realicen en éste. Ahora bien, de los artículos 83, fracción IV, 87, 88 y 91, fracciones I a IV, de la Ley de Amparo, se advierte que el recurso de revisión constituye un instrumento jurídico que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función jurisdiccional, cuyo estudio atenderá a los agravios expuestos por el recurrente. En consecuencia, es irrelevante que la autoridad responsable aduzca argumentos novedosos que no expuso en su informe justificado. Así, los agravios serán susceptibles de estudio en la medida en que combatan directamente la parte considerativa que controvierte; que exprese la lesión o agravio que las respectivas consideraciones le provocan, así como los motivos que generan esta afectación, sin que sea dable que realice meras afirmaciones sin fundamento; y que controvierta de manera suficiente y eficaz la sentencia definitiva, circunscribiéndose a la litis del juicio de amparo y a las pruebas que en éste se aportaron.

Contradicción de tesis 27/2008-PL. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito y Primero en Materia Administrativa del Séptimo Circuito. 21 de octubre de 2009. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y Ponente: Mariano Azuela Güitrón; en su ausencia hizo suyo el asunto Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Jesicca Villafuerte Alemán.

Tesis de jurisprudencia 189/2009. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de octubre de dos mil nueve.

Tesis**Registro digital:** 167263**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** III.5o.C.25 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

DOCUMENTOS PÚBLICOS. SON OBJETABLES EN EL JUICIO DE AMPARO AQUELLOS A LOS QUE ALUDE EL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES (INTERPRETACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA DE LA VOZ: "INFORME JUSTIFICADO. PUEDE SER OBJETADO DE FALSO SÓLO EN CUANTO A SU AUTENTICIDAD.").

Los motivos que sustentan la contradicción de tesis 40/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que originó la jurisprudencia del rubro invocado, consistentes, esencialmente, en que el informe de la autoridad responsable sólo puede ser impugnado en cuanto a su continente y no a su contenido, no operan cuando se controvierte la autenticidad de una escritura pública, porque mientras que el informe justificado constituye la materia de fondo del juicio de garantías y, por ello, necesariamente será tomado en cuenta por el juzgador federal, quien analizará la totalidad de las manifestaciones vertidas en él, traducidas en la certeza o no de los actos reclamados, las que serán confrontadas con las constancias que al efecto se exhiban, además que el impetrante podrá desvirtuarlo durante la sustanciación del juicio de amparo; por el contrario, la segunda documental únicamente puede impugnarse ofreciendo y desahogando la prueba pericial correspondiente, puesto que no existe precepto legal que obligue al Juez de Distrito a averiguar oficiosamente la veracidad de lo que consta en ella, máxime si lo que se ataca es la falsedad de las rúbricas que la calzan. Además, la presunción de certeza, salvo prueba en contrario, de que gozan tales documentos públicos podría ser destruida, precisamente, a través de la objeción prevista por el dispositivo 153 de la Ley de Amparo, ante la circunstancia de que no se contempla otra etapa procesal ni medio de defensa alguno mediante el cual pudiera plantearse la ausencia de esa calidad. Sin que pase desapercibido que los resultados de la objeción únicamente producen efectos dentro del proceso constitucional y repercuten en que se conceda o niegue la protección federal, o bien, se sobresea en el juicio si la falsedad incide en la justificación de alguna causal de improcedencia (la que, precisamente, pretende desvirtuar la parte quejosa con la objeción de los documentos de donde dicha causal pudiera derivar), pero sin prejuzgar, de modo absoluto, sobre la validez del instrumento impugnado.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 56/2009. Margarito Macías Pérez y otro. 26 de marzo de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Figueroa Cacho. Secretaria: Idania Guisel Solórzano Luna.

Nota: La jurisprudencia citada en el rubro, aparece publicada con la clave P./J. 5/2001, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 10.



Tesis**Registro digital:** 167703**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** I.3o.C.85 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada**INFORME JUSTIFICADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. ES INNECESARIO SOLICITARLO.**

El amparo directo por su naturaleza es eminentemente judicial, pues presupone que siempre exista un juicio previo seguido en jurisdicción ordinaria y esta característica lógica determina que las autoridades responsables siempre sean del orden judicial ya que sólo los Jueces pueden dictar sentencias conforme al artículo 14 constitucional, sea en primera o segunda instancia; es decir, que la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin a juicio, reclamado en amparo directo, siempre será resultado de un juicio. Luego, dado que formalmente pueden reclamarse en amparo directo los actos de ejecución sólo en vía de consecuencia, ya que sus vicios propios no son susceptibles de estudiarse en la vía directa, consecuentemente, en todo caso, serán materia de estudio en un juicio bi-instancial, dado que los vicios propios son aquellos en que incurra el ejecutor al materializar en las partes y sus patrimonios los efectos de la condena, es decir las violaciones cometidas al proceder en ejecución de sus facultades y en su obrar material, por lo cual resulta obvio que no puedan estudiarse en el amparo directo porque éste guarda relación con la definitividad de la sentencia, que es presupuesto lógico y necesario de su ejecutividad. De otra forma se tendría que aceptar que en la vía directa se reclamaran los actos de ejecución como actos futuros, sujetos a la eventualidad de su realización incierta, lo que evidencia la inutilidad de un examen constitucional en estas condiciones, ya que la etapa de ejecución de un juicio inicia con posterioridad a que el fallo quedó firme y ya en la siguiente etapa de ejecución, de infringirse agravio a alguna de las partes, procederá un diverso amparo en vía indirecta en que sea señalada como autoridad responsable la ejecutora, la que tendrá la oportunidad de desvirtuar la ilegalidad que se le imputa a su acto o exponer las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto que se le reclama o la improcedencia del juicio, tanto más, si se considera que es el actuario y no el Juez, quien puede ejecutar materialmente el acto reclamado. Así, cabe distinguir que los actos que son de naturaleza inminente son aquellos cuya existencia es indudable y se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por así condicionarlo los actos previos y sólo falta que se cumplan determinadas formalidades para que se ejecuten; por su parte, los actos futuros son los que su ejecución es remota y al ser inciertos, en su contra no procede el juicio de amparo; luego, en el juicio de amparo directo los actos de ejecución factibles de reclamarse son aquellos que no se reclaman por vicios propios y que tienen la naturaleza de inminentes porque son la consecuencia lógica jurídica de la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin a juicio, las cuales tienen la característica de ser ejecutorias y conservan la calidad de cosa juzgada, motivos por los cuales se concluye que en el juicio de amparo directo resulta innecesario solicitar el informe justificado a las autoridades ejecutoras, ya que por su naturaleza se equipara a la contestación de una demanda, de ahí lo innecesario de que la autoridad demandada (responsable ejecutora) dé contestación sobre la violación de garantías individuales que se le imputa, puesto que, en todo caso, no se analizarán los vicios propios que pudiera contener la ejecución del acto reclamado. Además, es frecuente que cuando se radica o admite la demanda de

garantías todavía no existan actos de ejecución ya sea porque la autoridad responsable ordenadora concedió la suspensión solicitada por el impetrante o porque antes de proveer sobre su ejecución, esperó a que transcurriera el plazo para la promoción del juicio de amparo, esto es, que no obstante la naturaleza ejecutoria de la sentencia que dictan los tribunales de segunda instancia, éstos al agotarse la jurisdicción ordinaria, prudentemente esperan a que ocurra el plazo para la promoción de la demanda de amparo directo y sólo en caso de que no se promueva, remiten los autos a la autoridad ejecutora para que proceda en consecuencia, esto con independencia de que alguna ley procesal pueda contemplar, por excepción, en casos específicos y con sujeción a requisitos de cumplimiento previo como la exhibición de garantías y contragarantías, una forma de ejecución anticipada. En tal virtud, es común que la autoridad responsable ejecutora al rendir el informe justificado niegue el acto reclamado o indique que se adhiere al informe que para tal efecto rinda la autoridad responsable ordenadora; con lo cual, se corrobora la naturaleza inminente de los actos de ejecución que se reclaman en el amparo directo; máxime que, cuando el Tribunal Colegiado provee sobre la admisión de la demanda de garantías, cuenta con el cúmulo de autos originales y constancias que integran el juicio ya que la autoridad responsable ordenadora los debe adjuntar como apoyo de su informe justificado, por ello, a nada práctico conduce solicitar un informe justificado a la autoridad responsable ejecutora, quien no cuenta con los autos originales para informar al respecto y si existen actos propios de ejecución, no podrían ser materia de estudio en amparo directo, por así establecerlo la jurisprudencia vigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de modo que si en el informe justificado llegara a manifestar que ha dictado actos de ejecución, no se estudiarán sus vicios propios sino en vía de consecuencia lógica jurídica de la sentencia definitiva, laudo o resolución que puso fin a juicio y, por ende, la declaración que se haga en la ejecutoria de amparo directo sobre el otorgamiento o la negativa de la protección constitucional impetrada, seguirá la misma suerte del principal acto reclamado, esto es, los efectos de la ejecutoria de amparo se extenderán a los actos de ejecución existan o no vicios propios. De modo que si materialmente se hubiere verificado algún acto de ejecución, éste no es susceptible de analizarse por vicios propios en el amparo directo, sino en la vía indirecta que brinda al agraviado toda la amplitud de defensa que nuestra Constitución consagra, con una litis independiente y con el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, lo que no se lograría con el amparo directo en que el acto de ejecución sólo se estudia por vía de consecuencia; motivos por los cuales, en el juicio de amparo uniinstancial es innecesario solicitar el informe justificado a las autoridades responsables ejecutoras, con lo que además se atiende al principio constitucional de economía procesal que rige en el juicio de garantías.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 700/2008. Liconsa, S.A. de C.V. 18 de diciembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: Greta Lozada Amezcua.

Tesis**Registro digital:** 167813**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Penal**Tesis:** XIII.1o.10 P**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

VIDEOGRABACIONES EN EL JUICIO ORAL HECHAS EN DISCOS ÓPTICOS EN FORMATO DVD, QUE REMITE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE SUJECCIÓN A PROCESO DICTADO CONFORME AL NUEVO PROCESO PENAL Y EL JUEZ DE DISTRITO OMITE ORDENAR OFICIOSAMENTE LA REPRODUCCIÓN DE AQUÉLLAS, EN LAS QUE SE CONTIENEN EL ACTO RECLAMADO Y LAS ACTUACIONES QUE LE SIRVIERON DE SUSTENTO, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS ADECUADOS, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE OBLIGA A LA AUTORIDAD REVISORA A ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 91, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA MATERIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).

El artículo 78, párrafo tercero, de la Ley de Amparo señala que corresponde al juzgador recabar oficiosamente las pruebas que sean necesarias para resolver el asunto sometido a su conocimiento. Por su parte, el numeral 150 del mismo ordenamiento legal establece que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o el derecho. En ese sentido es posible determinar que en el juicio de garantías son admisibles como prueba los discos ópticos en formato "DVD" que contengan videograbaciones, ya que no son contrarios a la moral y sí, en cambio, están regulados por la ley, conforme a los numerales 93, fracción VII y 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2o., pues se trata de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y el avance tecnológico. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclama un auto de sujeción a proceso, dictado conforme a los numerales 33, 272, 274, 277 y 278 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, relativos al nuevo proceso penal, y la autoridad responsable remite, en apoyo a su informe justificado, videograbaciones contenidas en discos ópticos en formato "DVD", relativas a la audiencia de ley celebrada acorde con las formalidades establecidas en dichos dispositivos legales, en la que, además, se realizaron actuaciones judiciales, intervenciones y ofrecimiento de pruebas de las partes, las cuales sirvieron de sustento a la resolución de término constitucional, el Juez de Distrito, a efecto de brindar certidumbre jurídica a las partes y dictar una sentencia conforme a derecho, debe ordenar oficiosamente la reproducción de esas videograbaciones, toda vez que se trata de un medio de prueba que no se desahoga por sí mismo, como las documentales, sino que, para que el Juez y las partes la verifiquen y se impongan de su contenido, es menester llevar a cabo su reproducción a través de los medios electrónicos adecuados, para que constate que se trata de la citada audiencia y demás actuaciones relacionadas con el acto reclamado, con base en las grabaciones ahí contenidas. Lo anterior debe hacerse en audiencia pública, con citación previa y oportuna de las partes, de la que se deje constancia escrita en autos y se plasmen las consideraciones vertidas por el Juez responsable para dictar el acto reclamado, así como los aspectos fundamentales de esa audiencia, lo cual permitirá al órgano de amparo analizar la constitucionalidad del acto reclamado, no obstante que en el nuevo proceso penal predomine el principio de oralidad, pues no deben

confundirse las distintas formalidades y principios procesales que rigen al nuevo proceso penal estatal, con las que continúan vigentes para el juicio de amparo, sin que ello impida al juzgador de garantías tratar de compaginar ambos sistemas en la medida de lo posible, pero sin trastocar las normas vigentes que rigen el juicio de amparo. Por tanto, si el Juez de Distrito no procedió en esta forma, resulta inconcuso que se actualiza una violación procesal que obliga a la autoridad revisora a ordenar la reposición del procedimiento, en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 292/2008. 5 de noviembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Marcos García José. Secretario: Víctor Manuel Jaimes Morelos.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 455/2012, de la que derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL."

Tesis**Registro digital:** 168189**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a./J. 205/2008**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Común**Tipo:** Jurisprudencia

CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA.

De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.

Contradicción de tesis 164/2008-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Décimo Quinto, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 19 de noviembre de 2008. Cinco votos. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza.

Tesis de jurisprudencia 205/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del tres de diciembre de dos mil ocho.

Tesis**Registro digital:** 168300**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Penal**Tesis:** III.2o.P. J/23**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

ORDEN DE APREHENSIÓN. SI EL INDICIADO DESCONOCE LOS FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL INFORME JUSTIFICADO Y PREVENIRLO PARA QUE AMPLÍE SUS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SALVO QUE DE SU LECTURA SE ADVIERTA QUE LOS ALEGATOS PLANTEADOS TIENDEN A REBATIR LAS RAZONES TORALES QUE LA SUSTENTAN O DE AUTOS SE DESPRENDA QUE TUVO CONOCIMIENTO DE SUS CONSIDERACIONES.

Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión, el Juez de amparo, al recibir el informe justificado en sentido afirmativo, debe ordenar la notificación personal al impetrante de garantías del auto de vista correspondiente, previniéndolo para que, en su caso, amplíe la demanda en cuanto a los conceptos de violación, pues de lo contrario generaría una violación procesal que ameritaría reponer el procedimiento, de conformidad con el precepto 91, fracción III, de la Ley de Amparo, al tomar en cuenta que el mandamiento de captura se notifica exclusivamente al Ministerio Público, lo que implica que dado el sigilo que el Juez de la causa debe guardar al respecto, el peticionario no conoce los fundamentos de esa resolución al momento de presentar la demanda, por tanto, no está en posibilidades de esgrimir los motivos de inconformidad y se le deja en estado de indefensión, en virtud de no tener la posibilidad de combatir la resolución impugnada, lo que atenta contra la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en los juicios constitucionales que de manera preponderante tienen como objetivo tutelar las garantías fundamentales del gobernado, máxime si el acto que combate el indiciado y que implícitamente se observa lo ignora, es de vital importancia por constituir la materia con que se forma la litis constitucional, pues de seguir con la práctica viciada de notificar por lista el informe que rinde la autoridad en donde acepta el acto que se le atribuye (orden de aprehensión), en el supuesto de que el peticionario ignora su fundamentación y motivación, ello impide que defienda sus intereses adecuadamente, con la salvedad de que si de la lectura de los conceptos de violación se desprende que formula alegatos que tiendan a rebatir las razones torales que sustentan el acto reclamado o de autos se advierta que el quejoso tuvo conocimiento de las consideraciones de aquél, a pesar de que no se ordenara la notificación personal, no sería necesaria la prevención de mérito.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 234/2005. 2 de diciembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Osiris Ramón Cedeño Muñoz.

Amparo en revisión 182/2007. 7 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Osiris Ramón Cedeño Muñoz.

Amparo en revisión 8/2008. 7 de marzo de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Fernando Cortés Delgado.

Amparo en revisión 187/2008. 11 de septiembre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Osiris Ramón Cedeño Muñoz.

Amparo en revisión 299/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Fernando Cortés Delgado.

Tesis**Registro digital:** 168462**Instancia:** Primera Sala**Tesis:** 1a./J. 69/2008**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Penal**Tipo:** Jurisprudencia

INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTE QUE ADEMÁS DE LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN SEÑALADA POR EL QUEJOSO COMO ACTO RECLAMADO EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, TAMBIÉN SE HIZO EFECTIVA LA GARANTÍA EXHIBIDA PARA GOZAR DE SU LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO ES NECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ORDENE QUE SE LE NOTIFIQUE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, NI QUE LO PREVENGA PARA QUE MANIFIESTE SI ES SU DESEO AMPLIARLA O ACLARARLA, POR LO QUE NO PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA TALES EFECTOS.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 411, 412, 413, 414 y 416 del Código Federal de Procedimientos Penales, y 366, 367, 368, 369, 371, 372 y 374 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, se advierte que en los siguientes supuestos: a) cuando el acusado o inculpado desobedezca, sin causa justa y comprobada, las órdenes legítimas del tribunal, juez o sala que conozca de su asunto o proceso; b) cuando el acusado o inculpado no efectúe las exhibiciones dentro de los plazos fijados por el propio tribunal, en el caso de que se le haya autorizado realizar el depósito en parcialidades; c) cuando el acusado o inculpado incumpla con alguna de las obligaciones que haya contraído en razón del proceso, esto es, no se presente ante el tribunal, juez o sala que conozca de su caso los días fijos que se estime conveniente señalarle y cuantas veces sea citado o requerido para ello; no comunique al tribunal, juez o sala los cambios de domicilio que tuviere, y se ausente del lugar sin permiso de la autoridad que le haya concedido la libertad provisional, el que no podrá exceder de un mes, y d) cuando el tercero que haya garantizado la libertad provisional bajo caución del inculpado o acusado, no lo presente ante el tribunal dentro del término que para ello se le haya concedido, el cual tampoco podrá exceder de un mes; invariablemente, o sea, siempre y en todo caso, el tribunal, juez o sala dispondrá la revocación de la libertad provisional bajo caución del acusado, ordenará su reaprehensión y mandará a hacer efectiva la garantía exhibida. De lo anterior se deduce que entre estas determinaciones, cuando se presenta alguno de los indicados supuestos, existe un vínculo indisoluble, que permite considerarlas como un solo acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En este sentido, si del informe justificado rendido por la autoridad responsable se advierte que además de la orden de reaprehensión señalada por el quejoso como acto reclamado en forma destacada en su demanda de garantías, también se hizo efectiva la garantía exhibida para gozar de su libertad provisional bajo caución, al tratarse de un solo acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, no es necesario que el juez de distrito ordene que se le notifique personalmente el contenido de dicho informe, ni que lo prevenga para que manifieste si es su deseo ampliarla o aclararla y, por ende, el tribunal colegiado no debe ordenar la reposición del procedimiento respectivo si se incurrió en dicha omisión, sino que, en todo caso, atendiendo a los principios de exhaustividad y congruencia que deben guardar las sentencias de amparo, en términos de lo dispuesto en los artículos 77 y 78 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunado a que se trata de materia penal y que el referido acto reclamado implica afectación de la libertad personal del quejoso, el juzgador de

amparo debe analizarlo en su integridad, esto es, examinar en su conjunto la constitucionalidad de la revocación de la libertad provisional bajo caución, la orden de reaprehensión y el mandamiento de hacer efectiva la garantía exhibida para gozar de ese beneficio, incluso supliendo, en su caso, la deficiencia de la queja, aun ante la falta absoluta de conceptos de violación, de conformidad con lo establecido en el artículo 76 bis, fracción II, del mismo ordenamiento legal, en la inteligencia de que si incumple con dicha obligación, el tribunal colegiado debe proceder a su estudio en observancia de los indicados principios.

Contradicción de tesis 26/2008-PS. Entre los criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 11 de junio de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Juan Carlos Moreno Correa.

Tesis de jurisprudencia 69/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticinco de junio de dos mil ocho.

Tesis**Registro digital:** 169232**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** I.15o.A.35 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

QUEJA. ESTE RECURSO ES PROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE EN EL JUICIO DE AMPARO TIENE POR NO RENDIDO EL INFORME JUSTIFICADO DE UNA AUTORIDAD RESPONSABLE.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 95, fracción VI, de la Ley de Amparo, ese medio de impugnación procede contra las resoluciones dictadas durante la tramitación del juicio de garantías o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión, y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en sentencia definitiva. Ahora bien, tocante a la rendición del informe justificado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que no constituye una formalidad esencial del procedimiento, pues no es un elemento preponderante que integre la litis constitucional; sin embargo, es innegable que incide sensiblemente en la relación jurídico procesal entre las partes que intervienen en el juicio de amparo, en la medida en que a través de ese informe la autoridad responsable se pronuncia sobre la existencia o inexistencia del acto reclamado, puede plantear causas de inejercitabilidad de la acción de garantías que a su consideración se actualicen, expresar los argumentos tendientes a defender la constitucionalidad del acto que se le atribuye y, además, ofrecer las pruebas conducentes. Por tanto, del contenido del informe justificado que rinda la autoridad responsable se puede desprender la existencia de los actos reclamados y su justificación, pero además, es posible que se revelen nuevos actos o diversas autoridades, lo que traería como consecuencia que el quejoso pudiera ampliar su demanda respecto de aquéllos y, entonces, modificarse la litis constitucional originalmente planteada; de ahí que el hecho de que no se tenga por rendido el informe justificado que emite la autoridad responsable, es una resolución que podría reportar a las partes un perjuicio no reparable ni con el dictado de la sentencia definitiva, en la medida en que incide en la determinación de la existencia de los actos reclamados y de las cargas probatorias, puesto que de su contenido es posible que se desprendan elementos de convicción que obliguen a probar a alguna de las partes o a ampliar la demanda de garantías, por lo que es susceptible de generar daños o perjuicios que el Juez de Distrito ya no podría reparar en la sentencia definitiva, en tanto no le está permitido dejar sin efectos la audiencia constitucional para regularizar violaciones procesales u otorgar a alguna de las partes la oportunidad de probar o defenderse, esto es, al advertir en el momento de sentenciar, la irregularidad cometida en el sentido de no darle cauce legal a un informe justificado debidamente rendido, no podría volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación en comento.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 54/2008. San Gerardo, S.A. de C.V. 4 de junio de 2008. Unanimidad de votos. Ponente:

Armando Cortés Galván. Secretario: Roberto Fraga Jiménez.

Nota: El criterio contenido en esta tesis contendió en la contradicción de tesis 73/2011, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión celebrada el diecisiete de agosto de dos mil once, en la cual se determinó que no existe la contradicción de criterios sustentados, por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y por la otra, con los criterios sustentados por el Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el contrario que sí existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por el Decimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito. De esta contradicción de tesis derivó la tesis 1a./J. 111/2011 (9a.), que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 3, enero de 2012, página 2609, con el rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR NO RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO."

Tesis**Registro digital:** 169410**Instancia:** Primera Sala**Tesis:** 1a./J. 17/2008**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Penal**Tipo:** Jurisprudencia

SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN.

Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto.

Contradicción de tesis 129/2007-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito. 30 de enero de 2008. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López.

Tesis de jurisprudencia 17/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha seis de febrero de dos mil ocho.

Nota: Las tesis 2a./J. 10/2003 y P./J. 15/2003, citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XVII, marzo de 2003, página 386 y XVIII, julio de 2003, página 12, respectivamente.



Tesis

Registro digital: 170081

Instancia: Segunda Sala

Tesis: 2a./J. 21/2008

Novena Época

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Materia(s): Común

Tipo: Jurisprudencia

INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.

En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial.

Contradicción de tesis 253/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 30 de enero de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García.

Tesis de jurisprudencia 21/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de febrero de dos mil ocho.

Nota: Esta tesis jurisprudencial sustituye a la que con el número 2a./J. 21/2008, fue aprobada en la sesión del seis de febrero de dos mil ocho y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 590.

Tesis**Registro digital:** 170199**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XV.4o.6 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO INDIRECTO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CONOZCA DE LA REVISIÓN NO PUEDE ORDENARLA, CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN ACTO NO SEÑALADO COMO RECLAMADO QUE AFECTE AL QUEJOSO, CUYO ESTUDIO OMITIÓ EL JUEZ DE DISTRITO, PUES SE TRASTOCARÍA EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA.

De conformidad con la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el precepto 4o. de la Ley de Amparo, se advierte el principio básico del juicio de garantías, que es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada, que en esencia consiste en que el juicio constitucional no procede de forma oficiosa, esto es, sin que haya un interesado legítimo en provocar su actividad tuteladora, y tendrá dicho carácter el gobernado que estime lesionados sus derechos constitucionales con el acto autoritario, que deberá estar contemplado entre los previstos en el numeral 103 constitucional. Atendiendo a ello, el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de la revisión no puede constreñir al Juez de amparo a actuar en forma oficiosa en el juicio biinstancial mediante la reposición del procedimiento, cuando del informe justificado se advierta la existencia de un acto no señalado como reclamado que afecte al quejoso cuyo estudio omitió, pues ello equivaldría a obligarlo a impulsar la promoción del amparo respecto de actos no impugnados, cuestión que no está prevista en la ley de la materia, pues la única excepción al comentado principio se establece en materia agraria, específicamente en el artículo 225 de la referida ley, en que se prevé la facultad del Juez de Distrito de analizar los actos reclamados tal como se hayan probado, aun cuando sean distintos a los señalados en la demanda, con la limitante de que ello sea en beneficio de núcleos de población, ejidatarios o comuneros en lo individual. Se concluye lo anterior sin que pase inadvertida la jurisprudencia P./J. 127/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo XII, diciembre de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CUANDO DEL INFORME JUSTIFICADO SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR LA QUEJOSA EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, CON LA PREVENCIÓN CORRESPONDIENTE."; ya que con fundamento en el aludido criterio es posible efectuar la prevención o requerimiento al quejoso en cuanto al señalamiento o no de la autoridad a la que le corresponda el carácter de responsable; sin embargo, ésta es una cuestión distinta a la planteada en la presente tesis, pues aquí ya está establecido el acto reclamado, con base en el cual se solicitó la protección constitucional, y únicamente resta establecer en forma precisa cuál es la autoridad responsable que lo emitió o que interviene en su ejecución, de tal suerte que la prevención o el citado requerimiento no constituye un impulso para la promoción del juicio de amparo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 184/2007. 6 de diciembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretario: Ciro Alonso Rabanales Sevilla.

Nota: Esta tesis contendió en la contradicción 26/2008-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 69/2008, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, noviembre de 2008, página 5, con el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTE QUE ADEMÁS DE LA ORDEN DE REAPREHENSIÓN SEÑALADA POR EL QUEJOSO COMO ACTO RECLAMADO EN SU DEMANDA DE GARANTÍAS, TAMBIÉN SE HIZO EFECTIVA LA GARANTÍA EXHIBIDA PARA GOZAR DE SU LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, NO ES NECESARIO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ORDENE QUE SE LE NOTIFIQUE PERSONALMENTE EL CONTENIDO DE DICHO INFORME, NI QUE LO PREVENGA PARA QUE MANIFIESTE SI ES SU DESEO AMPLIARLA O ACLARARLA, POR LO QUE NO PROCEDE ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA TALES EFECTOS."

Tesis**Registro digital:** 170291**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a./J. 21/2008**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Común**Tipo:** Jurisprudencia

INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. IMPONE QUE SE DIFIERA LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL PARA OTORGAR ÍNTEGRAMENTE A LAS PARTES, EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO.

De acuerdo con el análisis de dicho artículo, el plazo que permite al quejoso tener conocimiento del informe justificado, es de al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, que la circunstancia de que no se rinda con esa anticipación es imputable únicamente a la autoridad responsable y que en ningún caso puede provocar que se deje en estado de indefensión al quejoso. Conforme a ello, en el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, la audiencia debe diferirse para que se otorgue íntegramente a las partes el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, el cual, por tanto, debe computarse a partir de que surta efectos la notificación del auto en que se difiere la audiencia constitucional en términos del artículo 24, fracciones I y II del ordenamiento legal en cita, para que las partes se impongan del informe y, en su caso, cuenten con el tiempo suficiente para desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dando de esta manera, viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para el desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial; pues de computar ese plazo, contando los días que corren a partir del siguiente al en que surte efectos la notificación del proveído con que se da vista con el informe justificado hasta el anterior a la audiencia constitucional junto con los días que pasan entre el día siguiente a que surte efectos la notificación del auto que difiere la audiencia hasta que ésta se lleva a cabo, se deja en indefensión al gobernado ante la incertidumbre que genera el no conocer con seguridad el plazo efectivo que tiene para desvirtuar y probar las refutaciones que tenga contra el informe justificado, así como si dicho plazo verdaderamente será de ocho días, lo que puede ocasionar que actúe con vacilación respecto a imponerse del informe, realizar sus investigaciones, recabar los elementos probatorios necesarios para acreditar su derecho y ofrecerlos de manera oportuna. Por tanto, los jueces de Distrito tendrán que verificar, cuando difieran la audiencia constitucional con motivo de que el informe justificado se haya presentado en forma extemporánea, que entre la fecha en que surta efectos la notificación del proveído relativo y la nueva fecha señalada para su desahogo, transcurran cuando menos ocho días hábiles.

Contradicción de tesis 253/2007-SS. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito. 30 de enero de 2008. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Luis Ávalos García.

Tesis de jurisprudencia 21/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del seis de febrero de dos mil ocho.

Nota: Esta tesis ha sido sustituida por la 2a./J. 21/2008, que fue aprobada en la sesión del seis de febrero de dos mil ocho y aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 151, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO."

Tesis**Registro digital:** 170729**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a. CLXIX/2007**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Administrativa**Tipo:** Aislada

INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS JURISDICCIONALES Y DE ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE SE PRESUMIERON CIERTOS POR FALTA DE INFORME JUSTIFICADO.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que cuando se otorga el amparo contra una sentencia o laudo, por irregularidades procesales o formales, o bien cuando habiéndose estudiado el fondo de la controversia se hayan definido todas las cuestiones debatidas, el cumplimiento del fallo protector consiste, en dejar sin efecto la resolución jurisdiccional reclamada y emitir otra atendiendo los lineamientos señalados en la sentencia de la Justicia Federal; por otro lado, también ha sostenido que cuando la sentencia concesoria se basa en la presunción de certeza, conforme al artículo 149 de la Ley de Amparo, respecto de actos emitidos por autoridades administrativas, para su debido acatamiento será necesario que la autoridad responsable revoque el acto reclamado y sus efectos. Luego, tratándose de actos administrativos contra los que se concede la protección constitucional al haberse presumido ciertos y estimarse inconstitucionales en sí mismos, resulta insuficiente que la autoridad responsable se limite a revocarlos, pues es necesario que el tribunal de amparo la constriña a dejar insubsistentes los efectos o consecuencias de dichos actos, es decir, que actúe de manera positiva, si es el caso, volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, pues sólo así podrá restituirse al quejoso en el goce de la garantía individual violada, en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario, en caso de inconformidad de la parte quejosa contra la decisión que tuvo por cumplida la sentencia, el tribunal de amparo tendría que declararla fundada y devolver los autos al Juez de Distrito al advertirse la omisión de diversas actuaciones por parte de las autoridades responsables que no han cumplido, lo que iría en demérito de la garantía de justicia pronta contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Inconformidad 65/2007. Elena Trejo Saucedo y otros. 31 de octubre de 2007. Mayoría de tres votos. Ausente: Genaro David Góngora Pimentel. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Francisco García Sandoval.

Tesis**Registro digital:** 170918**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XVII.34 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

PRUEBA PERICIAL EN EL AMPARO. DEBE TENERSE POR NO OFRECIDA CUANDO SE ANUNCIE FUERA DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO OBSTANTE QUE SE HAYA DIFERIDO DE OFICIO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, AUN CUANDO CON ELLA SE PRETENDAN DESVIRTUAR AFIRMACIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU INFORME JUSTIFICADO, SI EL QUEJOSO CONOCÍA LOS HECHOS MOTIVO DE LA PRUEBA DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS.

El artículo 151 de la Ley de Amparo dispone que cuando las partes tengan que rendir la prueba pericial para acreditar algún hecho, deberán anunciarla cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia, cuando se trate de hechos conocidos desde la demanda, lo que lleva a considerar que cuando el quejoso no los conozca, se actualiza una excepción al cumplimiento del término para su anuncio. En esa tesitura, si dicha prueba se anuncia fuera del mencionado término debe tenerse por no ofrecida, no obstante que se haya diferido la aludida audiencia al no haberse rendido los informes justificados y aun cuando la parte oferente afirme que pretende desvirtuar afirmaciones de la responsable contenidas en ellos, si de la demanda se advierte que los hechos a probar ya los conocía desde que promovió el juicio de garantías, ya que ello no implica que se le deje en estado de indefensión, independientemente de que la audiencia constitucional haya sido diferida de oficio y no a petición de parte.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 62/2007. Motel La Cima, S.A. de C.V. 28 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: María Teresa Zambrano Calero. Secretaria: María Guadalupe Hernández Ortiz.

Tesis**Registro digital:** 171156**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Civil**Tesis:** IX.2o.44 C**Fuente:** Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO. SI DE ÉL SE ADVIERTE UN ACTO LESIVO A LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO, DISTINTO AL INICIALMENTE RECLAMADO, CONSISTENTE EN LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE AUTOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIR AL AGRAVIADO PARA QUE MANIFIESTE SI DESEA SEÑALAR DICHA ACTUACIÓN COMO ACTO RECLAMADO.

Si en el juicio de amparo el quejoso reclama la falta de emplazamiento y todas las subsecuentes actuaciones de un juicio ejecutivo mercantil promovido en su contra, entre las cuales figura la resolución de adjudicación de un inmueble de su propiedad y la orden de poner a la adjudicataria en posesión material y jurídica de ese bien, pero del informe justificado se advierte un acto lesivo distinto al inicialmente reclamado, consistente en la falta de notificación al incidente de reposición de autos sustanciado por el Juez de la causa, en el cual el quejoso no tuvo intervención alguna, el Juez de Distrito al recibir dicho informe debe ordenar se notifique personalmente la vista de éste y prevenir al agraviado para que, dentro del plazo que para tal efecto se le conceda, manifieste si es o no su deseo tener como acto reclamado la ilegal notificación del inicio del incidente de mérito, pues sólo si el quejoso reclama esa actuación, podrá ser materia de estudio formal en el juicio de amparo y, con base en ello, resolver lo conducente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión 136/2007. Elías Rocha García. 15 de agosto de 2007. Mayoría de votos. Disidente: Enrique Alberto Durán Martínez. Ponente: Pedro Elías Soto Lara. Secretario: Gustavo Almendárez García.

Tesis**Registro digital:** 171439**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** I.15o.A.29 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DE RENDIRLO PRODUCE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, PERO NO IMPONE AL JUEZ DE DISTRITO LA OBLIGACIÓN DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS QUE NO OBREN EN AUTOS.

El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo señala que cuando no se rinda el informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Por otra parte, el diverso 78, párrafo tercero, de la misma legislación establece que el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos; lo que indica que tal numeral se aplica sólo cuando la responsable tenga en su poder esa prueba pero no la haya remitido y, por su estrecha vinculación con el acto reclamado, resulta necesaria para resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese orden de ideas, es patente que el párrafo tercero del citado artículo 78 establece una obligación para el juzgador de garantías que no se encuentra condicionada por la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 149, sino relacionada directamente con la establecida en el párrafo segundo de este último numeral, es decir, con aquella en la que la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamado y no remite las constancias relativas a fin de demostrar su constitucionalidad. Luego, en la hipótesis de que la autoridad responsable no rinda su informe justificado, el Juez de Distrito no está obligado a recabar oficiosamente pruebas sobre los hechos que pudieran determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado; lo que deja a salvo su facultad para hacerlo voluntariamente, de estimarlo necesario para la resolución del asunto.

DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 105/2007. Esteban José Patricio Hernández. 18 de abril de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretaria: Lilia Maribel Maya Delgadillo.

Nota: Por ejecutoria de fecha 9 de septiembre de 2020, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 103/2018 en que participó el presente criterio.

Tesis**Registro digital:** 171855**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** IV.1o.A.14 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI LA RESPONSABLE EN SU INFORME JUSTIFICADO NEGÓ LA EXISTENCIA DEL ACTO Y EXPUSO QUE UNA DIVERSA AUTORIDAD EMITIÓ Y NOTIFICÓ LA RESPUESTA, Y EL JUEZ DE DISTRITO NO SE LO NOTIFICÓ AL QUEJOSO NI LO PREVINO PARA QUE ACLARARA O AMPLIARA SU DEMANDA, ELLO IMPLICA UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, publicada en el Tomo XVIII, diciembre de 2003, página 93, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", estableció que cuando del informe justificado rendido por alguna autoridad responsable se advierta la participación de una potestad diversa no señalada con tal carácter por el quejoso, el Juez de Distrito debe notificarle a este último de manera personal su contenido y prevenirlo para que aclare o, en su caso, amplíe la demanda, pues de no hacerlo así incurrirá en violación a las normas del procedimiento. Entonces, conforme a las directrices de dicho criterio, si en el amparo el quejoso reclama la omisión de una autoridad de dictar la respuesta a un escrito que le presentó y ésta al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado y expuso que otra ya contestó y notificó al quejoso el acuerdo relativo y el juzgador de amparo no notificó personalmente al impetrante de garantías el contenido de dicho informe ni lo previno para que aclarara o ampliara la demanda, al no proceder en tales términos, transgrede las normas reguladoras del juicio constitucional y, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse la reposición del procedimiento.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 115/2007. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León. 24 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo R. Ríos Vázquez. Secretaria: Ana María Chibli Macías.

Nota: Por ejecutoria del 30 de septiembre de 2011, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 92/2011, derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.



Tesis**Registro digital:** 171976**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Penal**Tesis:** XI.2o.60 P**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

ORDEN DE APREHENSIÓN. SI UN MENOR DE EDAD PROPORCIONA LA FECHA EN QUE ASEGURA SE DICTÓ ESE MANDATO EN SU CONTRA Y PRECISA EL NÚMERO DE PROCESO DE DONDE DERIVA, AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU INFORME JUSTIFICADO NIEGUE SU EXISTENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REQUERIRLE EL INFORME RELATIVO, ADEMÁS DE RECABAR LAS CONSTANCIAS SOLICITADAS POR AQUÉL, SIN NECESIDAD DE EXIGIR EL REQUISITO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 152 DE LA LEY DE AMPARO.

No obstante que en el juicio de amparo las autoridades señaladas como responsables, al rendir sus respectivos informes con justificación, nieguen la existencia de la orden de aprehensión girada contra un menor de edad ello no trae como consecuencia que el Juez de Distrito sobresea en el juicio en términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, si cuando aquél manifiesta que sigue teniendo temor de ser privado de su libertad, e incluso, proporciona la fecha en que asegura fue girada en su contra la orden de captura por una de esas autoridades y precisa el número de proceso penal de donde deriva. En estos casos, el Juez de Distrito tiene la obligación de requerir a la autoridad de que se trate para que informe si existe o no la orden de aprehensión reclamada por el peticionario de garantías, sin necesidad de exigir el requisito a que se contrae el numeral 152 de la citada ley, pues en atención a la minoría de edad del impetrante, dicho juzgador está facultado para solicitar esa información y allegarse las constancias pertinentes, pues si no lo hace incurre en una violación al procedimiento de amparo, al tenor del artículo 91, fracción IV, de la propia ley, la cual sería de tal gravedad porque podría redundar en la privación de la libertad del referido menor; máxime que de conformidad con los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 161, último párrafo, de la invocada ley, los menores no están obligados a agotar los recursos establecidos en la ley, como sería el proveído por el que el Juez de Distrito se negó a recabar las constancias solicitadas por el quejoso, por considerar insatisfecho lo exigido por el citado numeral 152 de la misma ley.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 5/2007. 14 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Sahuer Hernández. Secretaria: Ma. de la Cruz Estrada Flores.

Tesis**Registro digital:** 172269**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** VII.1o.A.T. J/35**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA REVISIÓN SI INTRODUCE ARGUMENTOS SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO NO PLANTEADOS AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.

El artículo 116 de la Ley de Amparo exige que el quejoso en la demanda de garantías manifieste, entre otros requisitos "bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado", así como los conceptos de violación; y a la autoridad responsable el diverso 149, segundo párrafo, ibídem, le impone la obligación de "rendir su informe con justificación exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio y acompañarán, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe"; de lo cual se desprende que es al momento de rendir el informe justificado en el juicio de garantías indirecto cuando la responsable debe exponer los hechos, razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado y controvertir los hechos y los conceptos de violación planteados por el quejoso, por lo que si dicha autoridad no hace valer determinada argumentación en él mismo, y al interponer el recurso de revisión previsto en el numeral 83 de la propia ley, contra la sentencia definitiva dictada en el juicio, introduce esa argumentación, es evidente que como la misma no formó parte de la litis constitucional en primera instancia ante el Juez de Distrito, tampoco puede serlo de la segunda ante el Tribunal Colegiado de Circuito que conozca de esa revisión, el cual sólo puede analizar y pronunciarse sobre aquellas cuestiones hechas valer expresamente en ese informe justificado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 21/2003. Administrador de la Aduana de Veracruz. 2 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala.

Amparo en revisión 22/2003. Administrador Central de lo Contencioso, en ausencia del Administrador General de Aduanas. 2 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala.

Amparo en revisión 23/2003. Verificador con sede en México, Distrito Federal. 2 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala.

Amparo en revisión 207/2003. Gerente de Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de Electricidad, en ausencia del Director General de dicho organismo. 19 de febrero de 2004.

Unanimidad de votos. Ponente: Eliel E. Fitta García. Secretario: Vicente Jasso Zavala.

Amparo en revisión 71/2007. Director General de Verificación de Combustibles de la Procuraduría Federal del Consumidor y otro. 10 de mayo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Graciela Guadalupe Alejo Luna. Secretaria: Alma Rosa Tapia Ángeles.

Notas:

La denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

Esta tesis contendió en la contradicción 27/2008-PL, resuelta por la Segunda Sala, de la que derivaron las tesis 2a./J. 189/2009 y 2a./J. 188/2009 que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, noviembre de 2009, páginas 423 y 424, con los rubros: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. PROCEDE SU ESTUDIO SI COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA, AUNQUE INTRODUCAN ARGUMENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON EXPUESTOS EN EL INFORME JUSTIFICADO." y "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN.", respectivamente.

Tesis**Registro digital:** 173273**Instancia:** Primera Sala**Tesis:** 1a./J. 112/2006**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Común**Tipo:** Jurisprudencia

INFORME JUSTIFICADO Y AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SUS RESPECTIVAS PRESENTACIÓN Y CELEBRACIÓN DEBEN REGIRSE POR EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 37 DE DICHO ORDENAMIENTO.

Del Capítulo IV del Título Segundo de la Ley de Amparo y de la tesis P./J. 54/2000, se advierten los lineamientos para la presentación del informe justificado que deben rendir las autoridades responsables, la fecha en que debe celebrarse la audiencia constitucional y los supuestos en que ésta ha de diferirse o suspenderse, así como las siguientes reglas generales: 1) que dicho informe debe rendirse por las responsables en un término de cinco días, o 2) cuando menos con la suficiente anticipación -ocho días antes de la celebración de la audiencia-, para que sea del conocimiento de las partes y éstas puedan oponerse, 3) de lo contrario, el Juez puede diferir o suspender la audiencia, a petición del quejoso o del tercero perjudicado, o de oficio y por una sola vez si éstos no comparecen a la audiencia para solicitarlo. Sin embargo, el artículo 156 de la mencionada Ley establece de manera concreta y específica diversos supuestos de excepción a dichas reglas, a saber: a) cuando el quejoso impugne la aplicación de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia decretada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o b) en aquellos casos en que se alegue la violación a que se refiere el artículo 37 del citado ordenamiento legal, es decir, a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que en tales hipótesis los plazos para la sustanciación del procedimiento se reducen a tres días improrrogables para la rendición del informe y a diez días siguientes al de la admisión de la demanda para la celebración de la audiencia. Ello es así, porque al ser claro y categórico el aludido artículo 156 no es posible realizar una interpretación distinta; de ahí que cuando en la demanda de garantías se señalan como actos reclamados los supuestos apuntados, la autoridad responsable debe rendir su informe justificado en tres días y el Juez de Distrito debe ordenar dar vista de éste a la quejosa por un término continuo y genérico de tres días -acorde con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo- a fin de que la audiencia constitucional se verifique dentro de los diez días siguientes al de la admisión de la demanda; lo cual, por otro lado, garantiza la observancia al principio de celeridad contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Además, en caso de incumplimiento de las autoridades responsables, el Juez está en aptitud de aplicar lo dispuesto en los párrafos tercero, cuarto y quinto del artículo 149 de la Ley de Amparo para sancionarlas, e incluso si así lo solicita la impetrante, la audiencia constitucional puede suspenderse o diferirse por una sola ocasión, pues las excepciones previstas en el citado precepto 156 no desincorporan en su totalidad las previsiones generales estatuidas en aquel numeral.

Contradicción de tesis 79/2006-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del

Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito. 29 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Antonio Espinosa Rangel.

Tesis de jurisprudencia 112/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintinueve de noviembre de dos mil seis.

Nota: La tesis P./J. 54/2000 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 5, con el rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO."

A partir del Decreto por el que se declaran reformadas, adicionadas y derogadas diversas disposiciones del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de 21 de septiembre de 2000, las fracciones I, VIII y X de dicho precepto aparecen agrupadas en un apartado A.

Tesis

Registro digital: 173481

Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito

Novena Época

Materia(s): Común

Tesis: XX.2o.23 K

Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.

Tipo: Aislada

QUEJOSO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR EN LA REVISIÓN LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR NO HABER RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.

Si el Juez de Distrito no aplica una multa a la autoridad responsable que omitió rendir su informe justificado, la parte quejosa carece de legitimación para solicitar en el recurso de revisión la aplicación de dicha sanción, ya que tal proceder no afecta de manera directa su interés jurídico, pues la sanción económica se aplicaría a favor del erario de la Federación y no en su beneficio.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 708/2004. Marilú Mollinedo Salvatierra. 19 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretario: Serafín Salazar Jiménez.

Tesis**Registro digital:** 174300**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** I.3o.T.10 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO RINDE SU INFORME JUSTIFICADO DEBE DIFERIRSE DE OFICIO SI ENTRE LA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN Y EL ÚLTIMO DÍA QUE TUVO LA AUTORIDAD PARA RENDIRLO NO MEDIA EL TÉRMINO QUE PREVEÉ EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE AMPARO, PUES DE LO CONTRARIO SE INFRINGEN LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS.

El tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo establece que cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado, el acto reclamado se presumirá cierto; y, que en este caso quedará a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo. Por otra parte, de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 23/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 84, diciembre de 1994, página 20, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME.", el quejoso tiene la obligación de acreditar su interés jurídico aunque opere la presunción de certeza del acto reclamado. Finalmente, el artículo 151 de la citada legislación prevé que cuando las partes tengan que rendir pruebas testimonial, pericial o de inspección ocular, deberán anunciarlas cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Ahora bien, en el caso de que las autoridades responsables no rindan su informe con justificación, el término para que el quejoso pruebe la inconstitucionalidad del acto reclamado o su interés jurídico debe contarse a partir del día siguiente al último en que las autoridades hayan tenido para rendir su informe, pues será hasta ese momento en que el agraviado esté en posibilidad de conocer tal circunstancia. Consecuentemente, si entre la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional y el último día que tuvieron las autoridades responsables para rendir sus informes, no media el término que prevé el artículo 151 de la Ley de Amparo, dicha audiencia debe diferirse de oficio, para no coartar el derecho del quejoso de ofrecer tales pruebas; y si el Juez de Distrito no lo hace, infringe las reglas del procedimiento que rigen el juicio de garantías y debe ordenarse la reposición del procedimiento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 763/2006. Alma Leticia Vázquez Chávez. 11 de mayo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Tarsicio Aguilera Troncoso. Secretario: Manelic Delón Vázquez.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 59/2010, de la que

derivó la tesis jurisprudencial 1a./J. 126/2010 de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA SU CELEBRACIÓN NO ES NECESARIO QUE MEDIE EL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 151 DE LA LEY DE AMPARO, ENTRE EL ÚLTIMO DÍA DEL PLAZO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO Y LA FECHA DE SU CELEBRACIÓN, CUANDO ÉSTA FUE OMISA EN RENDIRLO."

Tesis**Registro digital:** 174428**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Laboral**Tesis:** I.6o.T.299 L**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

LAUDO. SI SE RECLAMA LA OMISIÓN DE SU DICTADO Y SE TIENE POR PRESUNTIVAMENTE CIERTO EL ACTO POR NO HABER RENDIDO LA RESPONSABLE SU INFORME JUSTIFICADO, ELLO NO EXIME AL QUEJOSO DE DEMOSTRAR SU INCONSTITUCIONALIDAD, Y SI NO LO HACE NO ACREDITA SU INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER EL AMPARO.

Si el acto reclamado en el amparo indirecto consiste en la omisión de dictar un laudo, la falta de informe justificado conduce a presumir cierta su existencia, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, mas no así la de los hechos afirmados en la demanda de amparo, tales como: a) La existencia de un juicio en el que haya sido parte el quejoso; b) Que se hubiera cerrado la instrucción; y, c) Que hubiese transcurrido el plazo que tenía la autoridad laboral para emitir el fallo definitivo; ya que tales cuestiones indefectiblemente toca demostrarlas al quejoso de conformidad con el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; consecuentemente, si el agraviado no allegó elementos de convicción tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de sus aseveraciones, es evidente que no existe una afectación directa en su esfera jurídica y, por ende, no acredita su interés jurídico para promover el juicio constitucional y debe ser sobreseído en términos del artículo 74, en relación con el diverso 73, fracción V, ambos de la Ley de Amparo.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 336/2006. Ferrocarriles Nacionales de México. 27 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretario: Joaquín Zapata Arenas.

Nota: Por ejecutoria de fecha 21 de noviembre de 2007, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 234/2007-SS en que participó el presente criterio.

Tesis**Registro digital:** 174444**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XXII.1o.34 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NO ESTÁN OBLIGADAS A RENDIRLO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.

La Ley de Amparo no establece que el informe con justificación que deben rendir las autoridades responsables deba formularse bajo protesta de decir verdad pues, en lo conducente, el artículo 149 del ordenamiento en mención, sólo las obliga a exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado, además de que tampoco se advierte que la intención del legislador hubiese sido que ese requisito formal se manifieste de manera expresa en el informe con justificación, como sí lo plasmó en los artículos 116, fracción IV y 151 de la ley de la materia en los cuales dispone, respectivamente, la obligación del quejoso de manifestar, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedente del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, así como de los peritos de hacerlo respecto de la falta de impedimento legal para aceptar el cargo conferido, sin que lo anterior implique impunidad para las autoridades responsables, pues sus afirmaciones pueden ser controvertidas con base en la igualdad procesal entre las partes, ya que en el supuesto de que se demuestre que las argumentaciones del informe justificado afirmen una falsedad o nieguen la verdad, la autoridad responsable incurrirá en responsabilidad, toda vez que dada su investidura y la naturaleza propia de su función se encuentra obligada, sin el requisito formal de la protesta de decir verdad, a conducirse con veracidad ante la autoridad que conoce del juicio de garantías, pues de no hacerlo, queda sujeta a las sanciones que señala el Código Penal Federal, en relación con el artículo 204 de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Queja 5/2006. 1o. de junio de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: J. Guadalupe Tafoya Hernández. Secretario: Alejandro Alfaro Rivera.

Tesis**Registro digital:** 174445**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Civil**Tesis:** VII.3o.C.67 C**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DE RENDIRLO EN UN JUICIO DE AMPARO QUE VERSA SOBRE MATERIA FAMILIAR EN DONDE SE INVOLUCREN DERECHOS DE MENORES, PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 167, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.", estableció que la suplencia de la queja en el juicio de amparo que verse sobre materia familiar y en donde se vean involucrados derechos de menores, debe ser total, sin limitarse a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues su alcance comprende desde el escrito de demanda hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, el allegamiento oficioso de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 149 de la Ley de Amparo, la omisión de rendir el informe justificado no supone la inconstitucionalidad de los actos reclamados pues, esta circunstancia, esencial para que prospere la acción de amparo deducida, debe ser probada por el quejoso, ya que tal omisión solamente establece una presunción juris tantum, por lo que en esta hipótesis no puede quedar contemplada la obligación que el artículo 78 de la ley de la materia impone al Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos, toda vez que esta exigencia se refiere a la hipótesis contemplada en el párrafo segundo del citado artículo 149 cuando la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamado. Sin embargo, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo versa sobre cuestiones de naturaleza familiar en donde se involucran derechos de menores, como es el de alimentos, el Juez de Distrito, ante la omisión tanto de la autoridad responsable en rendir su informe justificado como de la parte quejosa en exhibir las constancias necesarias para resolver el asunto, incluyendo la relativa al propio acto reclamado, debe suplir la queja en toda su amplitud, ordenando se recabe tanto la resolución impugnada como las constancias procesales necesarias para resolver sobre la acción de amparo, y no abstenerse de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, bajo el argumento de que la parte quejosa no exhibió prueba alguna pues, de hacerlo, se apartaría del principio protector que debe observar todo juzgador para emitir una sentencia válida y justa en un caso en el que se dilucidan derechos de menores, en donde no debe atenderse a la verdad formal emanada de la actividad probatoria de las partes, sino a la verdad real, para lo cual debe suplirse en su grado máximo la queja deficiente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 570/2005. 17 de febrero de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretaria: María Guadalupe Cruz Arellano.

Tesis**Registro digital:** 174623**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** IV.1o.A.10 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

RECLAMACIÓN. ES FUNDADA LA INTERPUESTA CONTRA EL AUTO DEL PRESIDENTE DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE ADMITE EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 95, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, POR NO TENER LA CONSTANCIA DE NOTIFICACIÓN DEL PROVEÍDO CONTROVERTIDO EN ÉSTE PARA REALIZAR EL CÓMPUTO PARA SU INTERPOSICIÓN, PERO DEL INFORME JUSTIFICADO SE DEDUCE QUE AQUÉL FUE EXTEMPORÁNEO.

De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 99 de la Ley de Amparo, el recurso de queja interpuesto con fundamento en el diverso 95, fracción I, debe tramitarse acorde con el segundo párrafo del numeral 98 de ese mismo cuerpo legal, que establece que dada la entrada al recurso se requerirá a la autoridad contra la que se interpuso, su informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro de los tres días; que transcurrido dicho plazo, con informe o sin él, se dará vista al Ministerio Público por igual término y que dentro de los tres días siguientes, se dictará la resolución correspondiente. De suerte que si la autoridad responsable que interpuso la queja equivocó la vía al presentarla ante el a quo que emitió el auto recurrido, y éste la remitió a la oficina de correspondencia común de los Tribunales Colegiados de Circuito, la que a su vez la envió al órgano en turno, cuyo presidente la admitió por no tener a su alcance la constancia de notificación del auto controvertido para efectuar el cómputo respectivo de su interposición, sino que ello ocurrió una vez que el Juez de Distrito rindió su informe con justificación y anexó las constancias respectivas; de ahí que si hasta entonces se conoció la extemporaneidad de ese medio de defensa, la reclamación interpuesta contra el proveído de presidencia que lo admitió, debe declararse fundada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Reclamación 1/2006. Foster Unlimited, S.A. de C.V. 20 de abril de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo R. Ríos Vázquez. Secretaria: Ana María Chiblí Macías.

Tesis**Registro digital:** 174682**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Civil**Tesis:** VII.3o.C.68 C**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

MENORES E INCAPACES. EN ARAS DEL PRINCIPIO DE ECONOMÍA PROCESAL ES IMPRÁCTICO ORDENAR REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA RECABAR CONSTANCIAS SI YA OBRAN ANEXAS AL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO ÉSTE SE HAYA RENDIDO EXTEMPORÁNEAMENTE.

Si la autoridad responsable rindió su informe justificado de manera extemporánea éste, por regla general, no debe tomarse en cuenta por el Juez de Distrito. Por otra parte, en asuntos en donde se involucren derechos de menores o incapaces adquiere especial vigor la aplicación de los supuestos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 76 Bis, fracción V, de la Ley de Amparo, conforme a los cuales, los Jueces y tribunales federales tienen atribuciones para decretar las medidas necesarias que tiendan a preservar los derechos de aquéllos, así como para suplir la deficiencia de la queja de manera total. Conforme a lo anterior, encontrándose de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, cuando la autoridad responsable rinde su informe justificado extemporáneamente pero remite junto con él las constancias necesarias y éstas bastan para resolver el asunto, el Tribunal Colegiado que, en su caso, conozca del recurso que se interponga contra la sentencia, en aras del principio de economía procesal consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y dado que en esos casos opera invariablemente la suplencia de la queja debe estudiar tales constancias, pues resultaría impráctico que aun obrando en el expediente los documentos suficientes para resolver el fondo del asunto, ordenara reponer el procedimiento con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, para el efecto de que el Juez de Distrito, en cumplimiento al artículo 78 de la ley de la materia, recabe dichas constancias; de ahí que, dada la naturaleza de los derechos que se controvierten, el tribunal revisor debe considerar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el Juez Federal, en términos de la fracción I del invocado numeral al efectuar su análisis con base en las constancias anexas al informe, ello para procurar una justicia pronta y expedita al menor de edad o al incapaz.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 570/2005. 17 de febrero de 2006. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretaria: María Guadalupe Cruz Arellano.

Tesis**Registro digital:** 174797**Instancia:** Pleno**Tesis:** P. L/2006**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Común**Tipo:** Aislada

AMPARO DIRECTO. EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN ESTÁ OBLIGADO A REMITIR AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO REQUERENTE LA DEMANDA RELATIVA CON SUS ANEXOS, ASÍ COMO LA SENTENCIA IMPUGNADA Y, EN SU CASO, EL INFORME JUSTIFICADO, PARA QUE DICHO COLEGIADO DETERMINE SOBRE SU PROCEDENCIA.

El artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano especializado y la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en el país, con excepción de la facultad que aquella confiere en la fracción II de su artículo 105 a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que sus resoluciones son definitivas e inatacables. En este sentido, se concluye que cuando se promueva juicio de amparo en contra de las sentencias dictadas por el citado Tribunal Electoral, conforme a los artículos 158, 167, 168 y 169 de la Ley de Amparo, dicho órgano está obligado a remitir al Tribunal Colegiado de Circuito en turno la demanda y sus anexos, así como la sentencia impugnada y, en su caso, el informe justificado, para el efecto de que dicho colegiado provea respecto de la procedencia del juicio de amparo, ya que sólo los órganos competentes para conocer de los juicios de garantías pueden determinar sobre su procedencia; quedando únicamente a cargo del Tribunal Electoral decidir, con plenitud de jurisdicción, sobre el otorgamiento o no de la suspensión de la ejecución de la sentencia reclamada conforme a los artículos del 170 al 176 de la misma ley.

Varios 799/2005-PL. Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de mayo de 2006. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Bertín Vázquez González.

El Tribunal Pleno, el primero de junio en curso, aprobó, con el número L/2006, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a primero de junio de dos mil seis.

Tesis**Registro digital:** 175915**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** II.1o.P. J/11**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

INFORME JUSTIFICADO. SI EL ACTO RECLAMADO SE REFIERE A LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE DARSE VISTA AL QUEJOSO CON AQUÉL POR UN PLAZO CONTINUO Y GENÉRICO DE TRES DÍAS.

Cuando el acto reclamado en vía de amparo indirecto se refiera a alguno de los casos que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, es decir, que exista violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20, apartado A, fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, debe darse vista a la parte quejosa con los informes justificados por el término continuo y genérico de tres días, acorde con el ordinal 156 de la citada ley, en relación con el 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, toda vez que en aquel supuesto no es aplicable el artículo 149 de la ley reglamentaria de la materia ni la jurisprudencia P./J. 54/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98-PL, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 5, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO.", en virtud de que se refieren a una tramitación del juicio de amparo indirecto diversa de la que prevé el artículo 156 del propio ordenamiento, que obliga a que la audiencia constitucional se señale dentro de los diez días siguientes al de la admisión de la demanda.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 243/2005. 28 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Legorreta Segundo. Secretario: Rodrigo Bautista Renedo.

Amparo en revisión 244/2005. 28 de octubre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Arturo Sánchez Valencia. Secretario: Jacinto Banda Martínez.

Amparo en revisión 246/2005. 10 de noviembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Legorreta Segundo. Secretario: Eloy Rojas Florencio.

Amparo en revisión 245/2005. 1o. de diciembre de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Martha María del Carmen Hernández Álvarez. Secretaria: Coraluz Saldaña Sixto.

Amparo en revisión 256/2005. 12 de enero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Rubén Arturo

Sánchez Valencia. Secretario: Julio César Gutiérrez Guadarrama.

Notas:

Esta tesis contendió en la contradicción 62/2006-PS que fue declarada sin materia por la Primera Sala, toda vez que sobre el tema tratado existe la tesis 1a./J. 112/2006.

Esta tesis contendió en la contradicción 79/2006-PS resuelta por la Primera Sala, de la que derivó la tesis 1a./J. 112/2006, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, febrero de 2007, página 366, con el rubro: "INFORME JUSTIFICADO Y AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SUS RESPECTIVAS PRESENTACIÓN Y CELEBRACIÓN DEBEN REGIRSE POR EL ARTÍCULO 156 DE LA LEY DE AMPARO, TRATÁNDOSE DE LOS CASOS A QUE SE REFIERE EL NUMERAL 37 DE DICHO ORDENAMIENTO."

Tesis**Registro digital:** 176276**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XVII.21 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO EXTEMPORÁNEO. DEBEN ANALIZARSE EN LA REVISIÓN LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA QUE SE HAGAN VALER EN ÉL.

Por regla general, el informe justificado rendido por la autoridad responsable después de celebrada la audiencia constitucional no puede ser tomado en cuenta en perjuicio de la parte quejosa. Sin embargo, tal principio tiene excepciones, por ejemplo, cuando, se hacen valer diversas causales de improcedencia, pues en esa hipótesis es dable que el órgano revisor, en aras de la impartición de justicia y acorde a la técnica del juicio de garantías, si se actualiza alguna de ellas la invoque de oficio, en atención a que la procedencia del juicio es de orden público, en términos del artículo 73, último párrafo, de la Ley de Amparo, habida cuenta que soslayar su estudio bajo el pretexto de la extemporaneidad del informe que las contiene, haría procedente un juicio de garantías que no lo es, lo que ocasionaría un error judicial.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 283/2005. Servicio El Jarudo, S.A. de C.V. 22 de septiembre de 2005. Mayoría de votos. Disidente: María Teresa Zambrano Calero. Ponente: Avelina Morales Guzmán. Secretaria: Cecilia Aceves Pacheco.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, agosto de 1992, página 567, tesis III.2o.P.5 K, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO EXTEMPORÁNEO. SOBRESEIMIENTO." y Séptima Época, Volúmenes 121-126, Sexta Parte, página 102, tesis de rubro: "INFORME JUSTIFICADO EXTEMPORÁNEO. SOBRESEIMIENTO."

Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 206/2021, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tesis**Registro digital:** 176810**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Administrativa**Tesis:** IV.3o.A. J/11**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS. TIENE LEGITIMACIÓN PARA RENDIR EL INFORME JUSTIFICADO EN SUPLENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y ÉSTE EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.

De acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del artículo 105 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el subprocurador fiscal federal de Amparos, está legitimado para representar y, por ende, rendir el informe justificado correspondiente en ausencia del secretario de Hacienda y Crédito Público, quien a su vez, representa al presidente de la República, ya que en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de enero de dos mil tres, se establece una verdadera suplencia por ausencia, al disponer que el secretario de Hacienda y Crédito Público será suplido por los funcionarios en el orden ahí indicado, de manera que ante la ausencia de uno de los mencionados, el siguiente ejercerá la totalidad de las funciones del secretario de Estado a quien suple por ausencia temporal; superando lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó como una representación prohibida en el juicio de amparo, que se preveía en el texto anterior a dicha reforma. De manera que, al encontrarse previsto el subprocurador fiscal federal de Amparos en el precepto mencionado, y haber fundamentado su actuación en tal dispositivo, en ausencia del titular de dicha dependencia y de los funcionarios que le preceden, el informe justificado que presente en el juicio de amparo en el que sean señalados como responsables el secretario de Hacienda y Crédito Público y el presidente de la República, debe tenerse por rendido y tomarse en consideración.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 57/2003. Presidente de la República. 28 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María de la Luz Garza Ríos.

Amparo en revisión 145/2003. Presidente de la República. 22 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretario: Marco Antonio Arroyo Torres.

Amparo en revisión 142/2003. Presidente de la República. 2 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretario: Rafael Rivera Durón.

Amparo en revisión 163/2003. Presidente de la República. 3 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Bonilla Pizano. Secretaria: Sandra Elizabeth López Barajas.

Amparo en revisión 348/2004. Presidente de la República. 7 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María de la Luz Garza Ríos.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, noviembre de 2003, página 128, tesis 1a. LXVIII/2003, de rubro: "SUBPROCURADOR FISCAL FEDERAL DE AMPAROS. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN AUSENCIA DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE ESA DEPENDENCIA, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 23 DE ENERO DE 2003."

Tesis**Registro digital:** 176883**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Administrativa**Tesis:** IV.3o.A. J/10**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

PRUEBA DOCUMENTAL EN AMPARO CONTRA LEYES. ES OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA ANEXAR A SU INFORME JUSTIFICADO LA TENDIENTE A APOYARLO CUANDO AFIRME QUE NO SE TRATA DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY IMPUGNADA.

El artículo 149 de la Ley de Amparo, establece la obligación para las autoridades responsables de acompañar a su informe justificado las constancias necesarias para apoyarlo. De manera que, cuando el acto reclamado es una ley tributaria, a partir de un acto de aplicación, como es la retención de un patrón a su trabajador del impuesto sobre la renta, será obligación de la autoridad hacendaria anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyar su informe, cuando manifieste que no se trata del primer acto de aplicación de la ley impugnada, sino de uno ulterior, ya que es a ella a quien se entera el impuesto correspondiente y cuenta con la documentación fiscal de rigor.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 57/2003. Presidente de la República. 28 de agosto de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María de la Luz Garza Ríos.

Amparo en revisión 145/2003. Presidente de la República. 22 de septiembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretario: Marco Antonio Arroyo Torres.

Amparo en revisión 142/2003. Presidente de la República. 2 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jesús R. Sandoval Pinzón. Secretario: Rafael Rivera Durón.

Amparo en revisión 163/2003. Presidente de la República. 3 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Bonilla Pizano. Secretaria: Sandra Elizabeth López Barajas.

Amparo en revisión 348/2004. Presidente de la República. 7 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Meza Pérez. Secretaria: María de la Luz Garza Ríos.

Tesis**Registro digital:** 176976**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Administrativa**Tesis:** IV.3o.A.48 A**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO. SI DE SU ANÁLISIS SE ADVIERTE CLARAMENTE LA PARTICIPACIÓN EN LA EMISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, DE UNA AUTORIDAD DIVERSA A LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE, TRATÁNDOSE DEL AMPARO AGRARIO, ORDENAR EN FORMA OFICIOSA SU INCORPORACIÓN A LA RELACIÓN JURÍDICO-PROCESAL RESPECTIVA, VÍA EMPLAZAMIENTO A JUICIO (EXÉGESIS METÓDICA DE LOS ARTÍCULOS 225 Y 5o., FRACCIÓN II, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LOS PRECEPTOS 103 Y 107 CONSTITUCIONALES).

Si con motivo de los informes justificados, relacionados con la demanda de garantías o algún otro documento existente en autos, se obtiene información indicativa de que en la emisión de los actos reclamados tuvo intervención una autoridad diferente a las exprofeso señaladas como responsables, el jurisdicente federal en grado originario debe, tratándose del amparo en materia agraria y atento a la mecánica específica de dicho procedimiento constitucional, tenerla como tal en calidad de parte. A dicha conclusión es dable arribar, después de llevar a cabo una interpretación sistemática y extensiva de lo previsto en los artículos 225 y 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por cuanto a que en ellos se dispone, respectivamente que la inconstitucionalidad de los actos objeto del amparo se resolverá tal y como aparezcan probados, con entera independencia de que sean distintos de los reclamados desde un principio; y, que es parte en el juicio de garantías, la autoridad o autoridades responsables. En coherencia con lo anterior, tiene que disponerse, oficiosamente, su incorporación a la relación jurídico-procesal, vía emplazamiento a juicio, incluso, sin ser necesario requerir la exhibición de la copia de traslado respectiva, porque así lo autoriza el diverso numeral 221 ibídem, ni tampoco formular prevención con apercibimiento al quejoso para que manifieste si es su deseo hacer dicha inclusión, como por regla general sucede en otras materias regidas por el principio de estricto derecho, merced a las particularidades y rasgos característicos protectores que inspiraron a los congresistas a incorporar al ordenamiento en consulta, el libro segundo intitulado: "Del amparo en materia agraria". En la inteligencia de que la omisión concomitante hace incurrir al Juez de Distrito en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de su conocimiento que, per se trasciende al resultado de la sentencia dictada, lo cual propicia su reposición, por así disponerlo terminantemente el arábigo 91, fracción IV, de la citada ley.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 146/2005. Comisariado Ejidal del poblado "Nuevo Repueblo", Municipio de Doctor González, Nuevo León. 4 de mayo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Bonilla Pizano. Secretario: Jorge Toss Capistrán.



Tesis**Registro digital:** 177092**Instancia:** Primera Sala**Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** 1a./J. 133/2005**Fuente:** Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. SON INOPERANTES LOS FORMULADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, SI SE LIMITAN A REITERAR SUSTANCIALMENTE LOS ARGUMENTOS EXPRESADOS AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.

Conforme a los artículos 83, fracción IV, 87 y 88 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable que obtuvo sentencia de amparo desfavorable a sus intereses puede interponer el recurso de revisión, expresando los agravios que considere le causa la sentencia recurrida. Ahora bien, si la autoridad recurrente al formular sus agravios no combate consideración alguna de dicha sentencia, sino que se limita a reiterar sustancialmente los argumentos expresados al rendir su informe justificado en el juicio de amparo, los cuales se dirigen a controvertir lo expuesto en los conceptos de violación planteados por el quejoso en su demanda de garantías, resulta inconcuso que dichos agravios devienen inoperantes. Ello es así, porque al ser la materia de la revisión la sentencia recurrida y no los conceptos de violación planteados en la demanda de garantías, en los agravios deben formularse razonamientos lógico-jurídicos encaminados a combatir las consideraciones que sustentan la concesión del amparo, sin que sea dable suplir la deficiencia de la queja, en términos del artículo 76 bis de la mencionada ley, pues aquélla sólo se admite respecto del particular recurrente, no así de la autoridad que interpuso el recurso de revisión.

Amparo en revisión 367/2000. Latin American Reinsurance Company, Ltd. 6 de junio de 2001. Cinco votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Arturo Fonseca Mendoza.

Amparo en revisión 2595/2003. Ismael Rodríguez Vega y otros. 18 de febrero de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.

Amparo en revisión 977/2004. Fernando Luna Gutiérrez. 25 de agosto de 2004. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.

Amparo en revisión 1556/2004. Icr, S.A. de C.V. 24 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Amparo en revisión 569/2005. Flora María Castillo Contreras. 25 de mayo de 2005. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Juan Carlos Roa Jacobo.

Tesis de jurisprudencia 133/2005. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de veintiocho de septiembre de dos mil cinco.



Tesis**Registro digital:** 177168**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** VI.3o.A.27 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE ORDENARSE CUANDO EL JUEZ FEDERAL OMITE DAR OPORTUNIDAD A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RINDA SU INFORME JUSTIFICADO Y APOORTE PRUEBAS, RESPECTO DE ACTOS DISTINTOS A LOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA INICIAL.

Si bien es cierto que de acuerdo con los principios de una justicia completa e imparcial, el Juez de amparo no sólo debe limitarse a analizar o tener por acreditados los actos reclamados tal y como los plantea o señala destacadamente la parte quejosa, sino que debe hacerlo a la luz de un estudio integral de la demanda de garantías y pruebas que obren en el sumario; también lo es que ello no puede estar por encima del respeto al principio de igualdad procesal entre las partes y que con mayor rigor debe cuidar el órgano de control constitucional. De manera que si es hasta la audiencia constitucional o dictado de la sentencia que el Juez Federal advierte la existencia del o los actos realmente reclamados por la quejosa y que ésta obviamente no los destacó así en su escrito inicial de demanda, entonces, en observancia al citado principio de igualdad el juzgador debe diferir la referida audiencia o, en su caso, regularizar el procedimiento y emplazar a las autoridades señaladas como responsables para que tengan oportunidad de rendir sus informes justificados y aportar las pruebas que estimen pertinentes con relación a los nuevos actos, pues de lo contrario incurre en violación a las reglas esenciales del procedimiento que trasciende al sentido del fallo, lo que debe corregirse por el órgano colegiado revocando la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 188/2005. Secretario de Comunicaciones y Transportes del Estado de Puebla. 9 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Raúl Oropeza García. Secretaria: Jennifer Acosta Gregory.

Tesis**Registro digital:** 177629**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Administrativa**Tesis:** XV.3o.15 A**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

DERECHO DE PETICIÓN. NO PUEDE CONSIDERARSE SUBSANADA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE CON EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO EN EL JUICIO DE GARANTÍAS CITANDO LOS PRECEPTOS APLICABLES EN QUE FUNDA SU COMPETENCIA LEGAL.

El artículo 78 de la Ley de Amparo dispone que en el juicio de garantías el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable; de ahí que si se señala como tal la violación al derecho de petición, no es válido que la autoridad responsable al rendir su informe justificado pretenda subsanar la infracción a la garantía mencionada citando los preceptos aplicables en que pudiera fundar su competencia legal; en consecuencia, el a quo no debe tomar en consideración los fundamentos legales que invoque la autoridad en aquel informe, toda vez que, en todo caso, éstos deben contenerse en la resolución reclamada.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 729/2004. Carolina Medina Venegas. 10 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molina Torres. Secretaria: Angelina Sosa Camas.

Amparo en revisión 753/2004. Alexandra Flores Montes, en representación de su hija menor de edad Irlanda Medina Flores. 17 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio González Esparza. Secretario: Miguel León Bio.

Amparo en revisión 11/2005. Iolany Michel Trenado Espinoza, por conducto de su representante legal Socorro Espinoza Acosta. 1o. de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Manuela Rodríguez Caravantes. Secretaria: Elia Muñoz Aguilar.

Amparo en revisión 20/2005. Diana Michell Ruiz López. 7 de abril de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Molina Torres. Secretaria: Rosa Isela Pedroza Navarro.

Tesis**Registro digital:** 177744**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XX.2o.17 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

VIOLACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. LA CONSTITUYE LA OMISIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO DE NO DIFERIR LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL SI EN LA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO POR ENCONTRARSE DE VACACIONES.

Del artículo 149 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deberán rendir su informe con justificación dentro del término de cinco días hábiles, los cuales se contarán a partir del momento en que queden legalmente notificadas, lapso que podrá ampliarse hasta por otros cinco si el caso lo amerita. Ahora bien, si durante el transcurso del término a que se refiere el precepto antes citado inicia el periodo vacacional de la autoridad responsable, es evidente que aquél se interrumpe, ya que de lo contrario el informe no se exhibirá con la anticipación requerida por la ley de la materia, esto es, ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, lo que generaría su diferimiento para no afectar la defensa de la parte quejosa, al impedírsele que se imponga de su contenido y, en su caso, se encuentre en posibilidad de aportar las pruebas que estime pertinentes con la finalidad de desvirtuarlo. De donde se sigue que si la autoridad responsable a quien se ha solicitado el informe se encuentra gozando de vacaciones y no obstante ello el a quo celebra la audiencia a que refiere el artículo 155 de la Ley de Amparo, y ante la omisión presume como cierto el acto reclamado y además arroja la carga de la prueba de los hechos que determinan su inconstitucionalidad a la parte quejosa, por no ser el acto de que se duele en sí mismo violatorio de garantías, ello constituye una trasgresión a las normas que rigen el procedimiento de amparo en términos de la fracción IV del artículo 91 de la citada ley.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 423/2003. Lucio Escalante Morales. 19 de mayo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretario: Humberto Barrientos Molina.

Tesis**Registro digital:** 180816**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XII.4o.1 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

PRUEBAS EN LA REVISIÓN. PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO LA AUTORIDAD RECURRENTE ADJUNTA A SU ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS COPIA CERTIFICADA EN LA QUE CONSTA EL SELLO DE LA OFICINA DE TELÉGRAFOS DEL QUE SE DESPRENDE DE MANERA FEHACIENTE LA RENDICIÓN OPORTUNA DEL INFORME JUSTIFICADO.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 60/2002, derivada de la contradicción de tesis 22/2001, publicada en la página trescientos cincuenta y dos, Tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "PRUEBAS EN LA REVISIÓN. DEBEN TOMARSE EN CUENTA LAS DOCUMENTALES APORTADAS PARA DESVIRTUAR LA OMISIÓN DE RENDIR INFORME JUSTIFICADO QUE SE IMPUTA EN LA SENTENCIA RECURRIDA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE RECURRENTE.", determinó, como excepción a la regla contenida en el artículo 91, fracción II, de la Ley de Amparo, que en el recurso de revisión procede tomar en consideración las pruebas aportadas por la autoridad recurrente a fin de desvirtuar la omisión en la rendición del informe justificado, en atención a que dicha prueba se refiere a un hecho que no pudo contradecir ante el Juez de Distrito, pero que a pesar de ello sirvió de base para emitir la resolución impugnada. Acorde con este criterio, se colige que cuando la autoridad recurrente, con el fin de desvirtuar el que se le haya tenido por presuntivamente cierto el acto reclamado por no haber rendido su informe justificado, adjunta a su escrito de expresión de agravios copia certificada en la que consta el sello de la oficina de telégrafos u otra análoga, del cual se desprenda de manera fehaciente su rendición oportuna, es decir, antes de que tuviera lugar la celebración de la audiencia constitucional, lo procedente es revocar la sentencia recurrida y ordenar reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto para que el Juez Federal tome en consideración el informe rendido por la autoridad recurrente, y dé vista con él a la parte quejosa en términos del artículo 149 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, a fin de que exponga lo que a su derecho convenga.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 70/2004. Administrador Local de Auditoría Fiscal de Nogales, Sonora. 31 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Juventino Rubio Hernández, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Manuel Horacio Vega Montiel.

Tesis

Registro digital: 180839

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Novena Época

Materia(s): Común

Tesis: VII.3o.C.19 K

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tipo: Aislada

PERSONALIDAD EN EL AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO VERSA SOBRE LA MATERIA DE ALIMENTOS PARA MENORES, EL ESTUDIO DE ESE PRESUPUESTO PROCESAL NO SÓLO PUEDE HACERSE DESDE LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, SINO HASTA EL MOMENTO EN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE RINDA EL INFORME JUSTIFICADO Y ENVÍE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS.

Si bien es cierto que, por regla general, al ser afectados derechos patrimoniales, la personalidad de las partes en los juicios de amparo debe ser examinada por el Juez de Distrito al analizar la demanda correspondiente, también lo es que existen excepciones, como en los casos en que el acto reclamado versa sobre la materia de alimentos para menores de edad, ya que en esta hipótesis está de por medio su subsistencia, en la que el Estado y la sociedad tienen interés. En estas circunstancias y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 146 de la Ley de Amparo, se concluye que el análisis de este presupuesto procesal en el juicio constitucional no sólo puede hacerse desde la fase inicial del juicio, sino que con más elementos de convicción, puede realizarse hasta el momento en que la autoridad responsable rinda su informe justificado y envíe las constancias respectivas.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión (improcedencia) 17/2004. Mireya Barrios Márquez. 9 de febrero de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Arnulfo Joachin Gómez.

Tesis**Registro digital:** 181329**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XXI.4o.11 K**Fuente:** Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

IMPEDIMENTO. PARA SU PLANTEAMIENTO ES NECESARIO QUE PREVIAMENTE SE DÉ VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD EJECUTORA, SI DE ÉSTE SE ADVIERTE LA CONCURRENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO QUE CONOCE DEL AMPARO COMO AUTORIDAD ORDENADORA, PARA QUE PRECISE SI TAMBIÉN LO SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE.

Cuando del informe justificado rendido por la autoridad responsable ejecutora se advierta la concurrencia como autoridad ordenadora del Juez de Distrito que conoce del amparo, es requisito necesario para que se actualice la hipótesis prevista en la última parte de la fracción IV del artículo 66 de la Ley de Amparo, que previamente se dé vista con dicho informe al peticionario de garantías para que precise si señala también como autoridad responsable al propio Juez de amparo, y sólo en caso afirmativo el Juez de Distrito que conoce del juicio de garantías podrá plantear el impedimento de referencia.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

Impedimento 1/2004. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Mario Alejandro Noguera Radilla.

Impedimento 2/2004. Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Martiniano Bautista Espinosa. Secretario: Mario Alejandro Noguera Radilla.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-2, enero a junio de 1990, página 583, tesis de rubro: "IMPEDIMENTO DE LOS JUECES DE DISTRITO. CUANDO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE LES PRESENTA."

Tesis**Registro digital:** 182476**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** II.3o.A.2 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES IMPROCEDENTE SU DIFERIMIENTO CON MOTIVO DE LA OMISIÓN DE ALGUNAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO SI EL EXPEDIENTE SE ENCUENTRA COMPLETAMENTE INTEGRADO.

El artículo 149 de la Ley de Amparo prevé dos supuestos en relación con la omisión de rendir el informe justificado: en el primero, cuando la autoridad responsable no rinde el informe respectivo con ocho días de anticipación a la fecha de celebración de la audiencia constitucional, el Juez Federal podrá diferir o suspender la audiencia, según proceda, a solicitud del quejoso, del tercero perjudicado o, incluso, de oficio; y, en el segundo, cuando las autoridades responsables, habiendo sido legalmente emplazadas, no rindan el informe justificado, el Juez de Distrito no debe diferir la audiencia constitucional, pues la consecuencia legal de tal omisión consiste en que se presuman ciertos los actos reclamados, así como la imposición de una sanción económica para dichas autoridades, en los términos establecidos por aquel numeral. En consecuencia, si del juicio de garantías se advierte que únicamente algunas de las autoridades responsables rindieron el informe justificado con la anticipación debida y el a quo ordenó dar vista al quejoso para imponerse de su contenido; el hecho de que las restantes responsables, legal y oportunamente emplazadas a juicio, hayan omitido rendir el informe, siempre y cuando de autos también se desprenda que el expediente está completamente integrado, no es causa para el diferimiento de la audiencia constitucional, pues tal situación sólo traería como consecuencia legal presumir ciertos los actos reclamados de aquellas autoridades omisas y la imposición de sanción económica a éstas por tal conducta, sin que por ello deban considerarse vulneradas las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, ni que se deje en estado de indefensión al quejoso.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 248/2003. José Fidel Hurtado Salas y otros. 27 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Angelina Hernández Hernández. Secretario: Günther Demián Hernández Núñez.

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, diciembre de 1992, página 258, tesis IV.3o.64 A, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DIFERIMIENTO DE LA. NO OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMITE EL INFORME JUSTIFICADO."

Tesis**Registro digital:** 182617**Instancia:** Segunda Sala**Tesis:** 2a./J. 112/2003**Novena Época****Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Materia(s):** Común**Tipo:** Jurisprudencia

INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.

De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada.

Contradicción de tesis 86/2003-SS. Entre las sustentadas por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito. 31 de octubre de 2003. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

Tesis de jurisprudencia 112/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del catorce de noviembre de dos mil tres.

Nota: En la sesión celebrada el veintisiete de enero de dos mil diez, se declaró infundada la solicitud de modificación de jurisprudencia 11/2009, en la cual se solicitó la modificación de la tesis jurisprudencial 2a./J. 112/2003, por unanimidad de cinco votos de los Ministros integrantes de la Segunda Sala: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Sergio A. Valls Hernández, Luis María Aguilar Morales y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

Tesis**Registro digital:** 183142**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Novena Época****Materia(s):** Común**Tesis:** II.1o.P.37 K**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA INICIALMENTE PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA SEÑALADA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO SE TUVO CONOCIMIENTO DEL INFORME JUSTIFICADO CON LA ANTICIPACIÓN DEBIDA, DEBEN MEDIAR OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS.

El artículo 149 de la Ley de Amparo establece que el Juez o la autoridad que conozca del juicio de garantías biinstancial debe diferir, oficiosamente y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional cuando la autoridad responsable no presente su informe con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por la parte quejosa, a fin de que esté en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estime pertinentes para desvirtuar el contenido de aquél. De esa manera, si la parte quejosa no tuvo conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable con la anticipación a que se refiere el numeral en comento, es decir, ocho días, pues entre la fecha señalada para la audiencia constitucional y la que se programó para que de nueva cuenta tuviera verificativo mediaron menos de ocho días hábiles, es patente que la audiencia constitucional se celebró sin otorgar cabalmente al quejoso su derecho de defensa, o sea, la oportunidad de imponerse del contenido del informe con justificación y, por tanto, la posibilidad de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimara convenientes. Esto es, entre la fecha inicialmente prevista para la audiencia constitucional y la nueva que se señale con motivo de su diferimiento deben mediar ocho días hábiles y continuos, dado que sólo así puede el quejoso ajustarse a los términos previstos en el segundo párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo y no simplemente completarlos en relación con la fecha de recepción del informe justificado, pues de ser así, habría necesidad de un nuevo diferimiento en caso de que se diera el anuncio de pruebas, lo que iría en contra del principio de celeridad procesal y de la finalidad de equilibrar procesalmente a las partes.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 6/2003. 13 de febrero de 2003. Mayoría de votos. Disidente: Jorge Luis Silva Banda. Ponente: Luis Pérez de la Fuente. Secretario: Juan Miguel Ortiz Marmolejo.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 667, tesis VI.3o.A. J/12 y Tomo XVII, marzo de 2003, página 1449, tesis III.2o.P. J/14, ambas de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ENTRE LA FECHA PREVISTA PARA SU CELEBRACIÓN Y LA NUEVA CON MOTIVO DE SU DIFERIMIENTO PORQUE NO MEDIÓ TIEMPO SUFICIENTE PARA EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES JUSTIFICADOS, DEBEN TRANSCURRIR CUANDO MENOS OCHO DÍAS HÁBILES Y CONTINUOS."



Tesis**Registro digital:** 2001098**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** III.4o.A.2 K (10a.)**Fuente:** Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO NO DA AL QUEJOSO LA OPORTUNIDAD DE AMPLIARLA RESPECTO DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR UNA NUEVA AUTORIDAD RESPONSABLE, SIN QUE HAYAN TRANSCURRIDO LOS QUINCE DÍAS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, INFRINGE LAS NORMAS DEL JUICIO DE GARANTÍAS LO QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO.

En congruencia con la jurisprudencia P./J. 15/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, julio de 2003, página 12, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", si en el lapso que medió entre la fecha en que surtió efectos la notificación del acuerdo que tuvo por rendido el informe justificado de una nueva autoridad señalada como responsable y aquella en que se celebró la audiencia constitucional, no habían transcurrido los quince días que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo para que el quejoso ampliara su demanda contra la motivación y fundamentación del acto reclamado dadas a conocer en dicho informe, y el Juez de Distrito no le da esa oportunidad, infringe las normas fundamentales que regulan el procedimiento del juicio de amparo indirecto, por lo que procede reponerlo para el efecto de que, previamente a la celebración de la audiencia, se otorgue al peticionario de garantías el referido plazo.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1/2012. Óscar Oswaldo Padilla Muñoz. 21 de febrero de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Ramos Salas. Secretario: Rigoberto González Ochoa.

Tesis**Registro digital:** 2001893**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Constitucional, Administrativa, Común**Tesis:** IV.2o.A.23 A (10a.)**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

DERECHO HUMANO A LA SALUD. LA SIMPLE AFIRMACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SOBRE LA INEXISTENCIA DE LOS ACTOS EN SU INFORME JUSTIFICADO, RELATIVOS A OTORGAR INCAPACIDADES Y MEDICAMENTOS, ES INSUFICIENTE PARA REVERTIR LA CARGA DE LA PRUEBA Y, POR TANTO, DICHA ACTUACIÓN CONTRAVIENE AQUÉL.

El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos coincidentemente, entre otros tratados internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Por tanto, si la quejosa demuestra ante la instancia constitucional, mediante los documentos relativos que ha presentado un padecimiento de salud que está siendo atendida en la institución de salud pública correspondiente, y le atribuye a ésta la negativa de otorgarle las incapacidades y medicamentos necesarios; entonces la simple afirmación de las autoridades responsables sobre la inexistencia de esos actos en su informe justificado, es insuficiente para revertir la carga probatoria, ya que no se trata de una negativa lisa y llana, sino que conlleva implícito un hecho positivo consistente en la prestación adecuada y eficiente del servicio médico, pues por estar de por medio el irreductible derecho humano a la salud del derechohabiente, la discrecionalidad en la prescripción de incapacidades y medicamentos a ella, no puede convertirse en una arbitrariedad libre de control de constitucionalidad. En tal virtud, si las citadas autoridades no esclarecen y justifican la constitucionalidad de la negativa que se les atribuye, no obstante que tienen a su alcance los medios documentales adecuados para ello, su actuación contraviene el referido derecho humano a la salud.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 190/2012. Martha Beatriz Hernández Ibarra. 21 de junio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretaria: Zarahí Escobar Acosta.

Tesis**Registro digital:** 2001969**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Décima Época****Materia(s):** Constitucional, Administrativa, Común**Tesis:** I.7o.A.55 A (10a.)**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Aislada

NEGATIVA FICTA. SI LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, RESPONSABLE EN EL AMPARO, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO NO DA A CONOCER AL GOBERNADO LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS POR LOS QUE AQUÉLLA SE CONFIGURÓ, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo en su título tercero, intitulado: "Del procedimiento administrativo", consigna la forma en que los gobernados pueden acudir ante la autoridad administrativa a efecto de que defina y aclare su situación sobre los actos que emita, los cuales podrán ser controvertidos, en su caso, a través de los medios de impugnación a su alcance. Así, entre las disposiciones que integran dicho procedimiento, concretamente el artículo 17, establece la figura jurídica de la negativa ficta, consistente en que para el caso de que las autoridades no emitan la resolución correspondiente en el plazo de tres meses, se entenderá que es en sentido negativo al promovente, a menos que en otra disposición legal o administrativa de carácter general se prevea lo contrario. En ese contexto, la autoridad administrativa, responsable en el amparo, al rendir su informe justificado debe dar a conocer al gobernado los fundamentos y motivos por los que se configuró la negativa ficta, a efecto de que éste pueda impugnarla, toda vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES." (Novena Época. Registro IUS 172759. Instancia: Primera Sala. Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, abril de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: 1a./J. 42/2007. Página: 124), estableció que la garantía a la tutela jurisdiccional prevista en el artículo 17 constitucional se define como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, el cual puede conculcarse por normas que impongan requisitos impositivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción. Por tanto, si la responsable no procede en los términos indicados, transgrede la garantía de acceso a la justicia prevista en el artículo 17 constitucional, sin que sea óbice a lo anterior la circunstancia de que la autoridad alegue que no ejerce facultades jurisdiccionales, ya que esta garantía también abarca dichos procedimientos.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 202/2012. Director General de Telecomunicaciones de México. 22 de agosto de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: F. Javier Mijangos Navarro. Secretario: José Arturo González Vite.

Nota: Por ejecutoria del 3 de abril de 2019, la Segunda Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 14/2019 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al estimarse que no son discrepantes los criterios materia de la denuncia respectiva.

Tesis**Registro digital:** 2004362**Instancia:** Primera Sala**Décima Época****Materia(s):** Común, Penal**Tesis:** 1a./J. 43/2013 (10a.)**Fuente:** Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.**Tipo:** Jurisprudencia

VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.

En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga.

Contradicción de tesis 455/2012. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito y el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito. 27 de febrero de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por lo que se refiere a la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de cinco votos en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: José Díaz de León Cruz.

Tesis de jurisprudencia 43/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en

sesión de fecha diecisiete de abril de dos mil trece.

Tesis**Registro digital:** 2005574**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común, Penal**Tesis:** I.3o.P.15 P (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO EN MATERIA PENAL. SI SE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO, POR ADVERTIRSE LA EXISTENCIA DE UN ACTO DISTINTO AL RECLAMADO EN LA DEMANDA PERO QUE GUARDA ESTRECHA RELACIÓN CON ÉL, AQUÉLLA DEBE REALIZARSE EN EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS.

La ampliación de la demanda de amparo es una institución procesal reconocida en el artículo 111 de la ley de la materia, cuya materialización en el trámite del juicio ya iniciado, en principio, debe ceñirse a la oportunidad para controvertir el nuevo acto que guarda estrecha relación con el originalmente reclamado en la demanda, de manera que si bien habrá de atenderse a los plazos y excepciones determinados en su artículo 17, adicionalmente debe limitarse a que no se haya celebrado la audiencia constitucional. Por ende, cuando con motivo del informe justificado rendido por alguna de las autoridades responsables se advierta la existencia de un acto distinto al reclamado en la demanda, pero que guarda estrecha relación con él, al margen de la formalidad y trámite específicos, que en torno a los actos materialmente administrativos establece el último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para efecto de la ampliación de la demanda en materia penal, con la finalidad de materializar el derecho fundamental de tutela judicial efectiva, y con apego a las reglas fundamentales que norman el procedimiento, es menester dar vista al quejoso con dicho informe, y precisarse que el derecho a ampliar la demanda es por el plazo genérico de quince días y no por uno menor o mayor, lo anterior con independencia de que en razón a la naturaleza del acto novedoso sea legalmente posible ejercer la acción de amparo en un plazo mayor o incluso en cualquier tiempo, pues ante tal circunstancia el quejoso estará en la opción de ejercer ese derecho de ampliar la demanda, o bien, de presentar una nueva e iniciar un procedimiento de amparo diverso.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 84/2013. 21 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. Secretario: Juan Manuel Flores Belmont.

Queja 85/2013. 21 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Venancio Pineda. Secretario: Juan Manuel Flores Belmont.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de febrero de 2014 a las 11:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2005733**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Décima Época****Materia(s):** Constitucional, Común**Tesis:** IV.2o.A.52 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.**Tipo:** Aislada

AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO ES ARBITRARIA NI OPERA AISLADAMENTE, PUES EL LEGISLADOR ADOPTÓ MEDIDAS COMPLEMENTARIAS PARA ASEGURAR EL EQUILIBRIO PROCESAL Y EXCLUIR LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA.

Del artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se advierte que el legislador, como excepción al principio general de inmutabilidad del acto reclamado en el amparo indirecto, determinó que tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, deberá complementar dichos aspectos; excepción que si bien es cierto no se explicitó en las iniciativas que dieron lugar a la expedición de la ley referida, halla su antecedente comprobable más remoto en la parte justificativa del documento denominado "Proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado por el Alto Tribunal en 2001, del que se desprende que la intención de integrarla era la de evitar que respecto de un mismo acto se instauraran juicios de amparo sucesivos, uno por la falta de fundamentación y motivación y, una vez subsanado esto, otro por las violaciones de fondo. Asumido el propósito de la excepción aludida, es preciso señalar que su introducción a la regulación del amparo indirecto no es arbitraria ni opera aisladamente, pues, en principio, su operatividad se encuentra estrictamente acotada en relación con los juicios de amparo en que se reclaman actos materialmente administrativos, entendiéndose por éstos aquellos que, con independencia de que la entidad que los emite, se considere orgánicamente parte de la administración pública, el acto en sí mismo considerado tenga un objeto o contenido propio de los actos de la administración para la satisfacción de un interés general. Además, el legislador adoptó, como reguladoras de dicha excepción, dos disposiciones complementarias: la primera, contenida en el propio párrafo final del artículo 117 de la Ley de Amparo, consistente en que una vez subsanada la falta o insuficiente fundamentación y motivación del acto por la autoridad en el informe justificado, con éste deberá correrse traslado al quejoso, el cual podrá ampliar su demanda en un plazo de quince días, en relación con las cuestiones derivadas de dicha complementación y, la segunda, que suscitada la ampliación, se dará vista a las responsables, al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las autoridades distintas que se mencionen en la ampliación, difiriéndose en tanto la audiencia constitucional. Por otra parte, si bien es cierto que en el juicio de amparo opera el principio de definitividad, cuyo incumplimiento genera la improcedencia del juicio, regulado, específicamente tratándose de actos administrativos, en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, también

lo es que existe una excepción a ese principio tratándose, entre otros supuestos, de actos carentes de fundamentación, aun cuando en el informe justificado la autoridad responsable señale la fundamentación y motivación del acto, lo cual constituye la tercera medida para acotar la funcionalidad de la excepción al principio general de inmutabilidad del acto reclamado. De lo anterior se advierte que al introducir el legislador la disposición excepcional indicada inicialmente, ésta aparece encaminada a la consecución de un propósito válido, que es hacer eficiente el juicio de amparo y, además, resulta razonablemente acotada, pues también se adoptaron las medidas instrumentales necesarias para no generar un desequilibrio procesal o indefensión entre las partes, excluyendo la improcedencia del juicio como efecto denegatorio de justicia y asegurando el estudio de las violaciones sustantivas atribuibles al acto reclamado en el mismo asunto en que se analicen las formales; igualmente, la disposición en estudio es congruente con el artículo 189 de la Ley de Amparo, el cual establece como regla para todas las materias, privilegiar el estudio de los conceptos de violación que redunden en un mayor beneficio, definiéndolos como los que se refieran a violaciones de fondo por encima de las de procedimiento y forma; regla que se especifica en relación con los actos materialmente administrativos a través del párrafo final del artículo 117 invocado que, como se dijo, permite que, superada la existencia de vicios de forma, se analicen las cuestiones de fondo introducidas desde la demanda, o bien, en su ampliación a partir de la complementación del acto, a menos que invertir aquel orden de estudio redunde en un mayor beneficio para el quejoso.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2005734**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Constitucional,
Común**Tesis:** IV.2o.A.53 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, COMO GARANTÍA DEL DERECHO HUMANO A LA SEGURIDAD JURÍDICA.

Del artículo 117, último párrafo, de la Ley de Amparo, vigente desde el 3 de abril 2013, se advierte una excepción al principio general de inmutabilidad del acto reclamado en el amparo indirecto, la cual consiste en que tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuye la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado, la autoridad deberá complementar dichos aspectos, caso en el cual, el quejoso podrá ampliar su demanda, a fin de impugnar los aspectos complementados; esto con el propósito de hacer eficiente el juicio de amparo y procurar que en un solo procedimiento se analicen tanto los vicios formales como los sustantivos del acto materialmente administrativo. Ahora bien, un recto entendimiento del principio de legalidad, como garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, cuya adopción para el orden jurídico nacional se refleja en el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales de aquel derecho, lleva a reconocer que la sola preconización de dichos requisitos en sede constitucional no supone la inexistencia de actos de autoridad que los incumplan, sino que, en todo caso, si bien la realidad impone reconocer la existencia de actos carentes de fundamentación y motivación, por el alcance del referido precepto constitucional, el gobernado queda legitimado para recurrir a los mecanismos jurisdiccionales de control y demandar la anulación del acto, esto, en el entendido de que, por virtud del mismo principio de legalidad, constitutivo de un régimen de facultades expresas, todo acto de autoridad se presume fundado en la ley y, por ende, válido, mientras no se demuestre lo contrario. En estas condiciones, de la manera en que opera el principio de legalidad, no es dable considerar que la excepción al principio inicialmente señalado lo contravenga, pues no permite la existencia de actos carentes de fundamentación y motivación, sino que, básicamente y en función de que el juicio de amparo constituye, per se, una garantía jurisdiccional de verificación del cumplimiento de dichos requisitos, se establece la posibilidad de que se acaten, previo al dictado de la sentencia, lo que no supone un perfeccionamiento del acto reclamado hasta esa etapa, pues éste gozaba ya de una presunción de legalidad, conforme a la cual se aceptaba que presuntivamente representaba el ejercicio de una facultad prevista expresamente en una ley como expresión de la voluntad general soberana, siendo la confirmación o desestimación de esta presunción a lo que se encamina el mecanismo excepcional previsto en la disposición aludida de la Ley de Amparo y no a la afirmación de que los actos que carecen de fundamentos y motivos o que son insuficientes en

dichos aspectos, deban considerarse ineludiblemente válidos, pues la disposición en análisis no excluye la posibilidad de que se declare la inconstitucionalidad del acto si no se complementa en cuanto a los aspectos formales indicados y tampoco esa complementación impediría el dictado de una sentencia de amparo, si el acto aún tiene otros vicios formales o sustantivos.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2005735**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Décima Época****Materia(s):** Constitucional, Común**Tesis:** IV.2o.A.54 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.**Tipo:** Aislada

AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO RELATIVO, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, NO CONTRAVIENE EL DERECHO HUMANO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA.

Del artículo 117, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se advierte que en el juicio de amparo indirecto se adopta, como regla general, el principio de inmutabilidad del acto reclamado, pues éste debe ser apreciado tal como aparezca probado, sin que sea dable a las autoridades al rendir su informe justificado, variar o mejorar la fundamentación del acto ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por el quejoso. No obstante, esa regla halla una excepción en el último párrafo del propio precepto, conforme al cual, tratándose de actos materialmente administrativos, al rendir su informe, la autoridad deberá complementar la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto, caso en el cual, el quejoso podrá ampliar su demanda, a fin de impugnar los aspectos complementados. Así, dicha excepción permite que, previo al dictado de la sentencia en la audiencia constitucional, excepcionalmente, tratándose de actos materialmente administrativos, se anticipe la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación y, concomitantemente, en función de la complementación del acto en cuanto a esos aspectos, se dé al quejoso la oportunidad de perfeccionar su defensa, garantizando que en la sentencia se efectúe un análisis integral del acto, tanto en sus aspectos formales como sustantivos, con lo cual se logra, en principio, inmediatez en la reparación de las violaciones que, por ser fuente de inseguridad jurídica, impedían al quejoso ejercer una defensa adecuada; también se aseguran el estudio y restauración de las violaciones sustantivas que llegasen a existir, evitando el dictado de una resolución que atienda sólo a los vicios formales pero que postergue el estudio de los sustantivos, en detrimento del deber de no repetición como subprincipio del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, en la medida en que conforme al contenido de este derecho humano, corresponde a los tribunales evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto y, en todo caso, en la restauración de los derechos vulnerados, a través de un procedimiento eficiente y eficaz, el párrafo final del artículo 117 de la Ley de Amparo no lo contraviene, pues anticipa al dictado de la sentencia la verificación del respeto al requisito constitucional de fundamentación y motivación, como garantía instrumental del derecho humano a la seguridad jurídica y, además, garantiza al gobernado la aptitud de defenderse y tiene como primer alcance el superar un estado de incertidumbre denunciado en su demanda, de suerte que si la autoridad complementa dichos aspectos, se adelanta un efecto restauratorio de la violación a un derecho humano y se logra que el

quejoso conozca dentro del procedimiento de amparo, con mayor precisión, la naturaleza del acto, para perfeccionar su defensa ante el acto y dado su conocimiento integral.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2005736**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** IV.2o.A.49 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. **Tipo:** Aislada

AMPARO INDIRECTO. LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL DE INMUTABILIDAD DEL ACTO RECLAMADO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONSISTENTE EN QUE, TRATÁNDOSE DE ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS A LOS QUE SE ATRIBUYA LA AUSENCIA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO, DEBERÁ COMPLEMENTAR DICHOS ASPECTOS, SÓLO ES APLICABLE EN RELACIÓN CON LA HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO RELATIVO CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN II, DEL PROPIO ORDENAMIENTO.

Entre las reglas del juicio de amparo indirecto previstas en la ley de la materia, vigente desde el 3 de abril de 2013, el último párrafo de su artículo 117 establece que tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado, la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el cual deberá correrse traslado con el informe al quejoso para que, en el plazo de quince días, amplíe su demanda, la que se limitará a las cuestiones derivadas de la referida complementación. Ahora bien, desentrañar el sentido de la expresión "actos materialmente administrativos" contenida en dicha porción normativa, es necesario para delimitar el campo de aplicación de la referida excepción al principio general de inmutabilidad del acto reclamado, pues como tal, su aplicación es estricta, propósito para el cual resulta útil recordar que en la doctrina existen dos definiciones del acto administrativo, una denominada formal u orgánica, la cual lo concibe en función de su fuente, esto es, de que represente la actividad de una entidad orgánicamente integrada a la administración pública, con independencia del contenido del acto, y otra material o de contenido, que atiende predominantemente a su objeto, más allá de que su fuente esté o no integrada orgánicamente a la administración y, conforme a la cual, un acto materialmente administrativo es aquel que con independencia de que la entidad que lo emite se considere orgánicamente perteneciente a la administración pública, por su contenido material, tenga un objeto característico de los actos de dicha administración para la satisfacción de los intereses generales; siendo esta acepción la que se considera fue adoptada por el legislador en relación con el contenido del párrafo final del artículo 117 de la ley que se analiza. De esta perspectiva, se concluye que la excepción señalada no resulta aplicable respecto de los actos materialmente legislativos o jurisdiccionales, ni los correspondientes al ejercicio de la función persecutora del delito o a la facultad punitiva del Estado, previstos en las fracciones I, III, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 107 de la propia Ley de Amparo como hipótesis de procedencia del juicio biinstancial, sino únicamente en relación con su fracción II, pues sólo en ésta encuadran los actos denominados materialmente administrativos, es decir, actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Queja 147/2013. Andrés Caro de la Fuente. 22 de noviembre de 2013. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de febrero de 2014 a las 11:02 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2005903**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** V.2o.P.A.4 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE.

De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 266/2013. 28 de octubre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Javier Sánchez Martínez. Secretario: Iván Güereña González.

Esta tesis se publicó el viernes 14 de marzo de 2014 a las 09:53 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2006144**Instancia:** Pleno**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** P./J. 23/2014 (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Jurisprudencia

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES PROCESALES Y EL QUEJOSO NO ACREDITA HABER SIDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE DEBE DETERMINAR LA FALTA DE AQUEL Y, POR ENDE, LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO.

La impugnación de violaciones procesales en el juicio de amparo indirecto requiere que el quejoso haya sido parte en el juicio ordinario del cual deriva el acto reclamado, pues sólo por ello es que cuenta con el derecho público subjetivo para que deba desplegarse correctamente la función jurisdiccional de la autoridad que conoce de su reclamo o donde deduce su defensa, y es uno de los presupuestos a verificar para establecer la procedencia del juicio, ya que el interés jurídico es un presupuesto para su procedencia, con fundamento en el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, debiendo ser este estudio, previo al análisis de fondo de la cuestión planteada. Por tanto, como la presunción de que es cierto el acto reclamado por haber sido omisa la autoridad responsable al no rendir informe justificado se refiere únicamente a la certeza de aquél, pero no a la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo, se concluye que la falta de prueba que corrobore el dicho del quejoso de ser parte en el procedimiento del cual deriva el acto reclamado, lleva a determinar la falta de interés jurídico y, en consecuencia, la improcedencia del juicio de amparo.

Contradicción de tesis 153/2012. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 30 de septiembre de 2013. Unanimidad de nueve votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Luis María Aguilar Morales, Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Juan N. Silva Meza. Ausentes: Margarita Beatriz Luna Ramos y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Luis María Aguilar Morales. Secretaria: María Marcela Ramírez Cerrillo.

Tesis y/o criterios contendientes:

La tesis III.3o.(III Región) 25 L (9a.), de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. CUANDO SE RECLAMA LA OMISIÓN DE DICTADO DEL LAUDO RESPECTIVO Y SE TIENE POR CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME JUSTIFICADO Y ANTE LA AUSENCIA DE PRUEBAS DE SI EL AGRAVIADO ES PARTE DEL JUICIO LABORAL, ES IMPROCEDENTE SOBRESEER CON APOYO EN LOS ARTÍCULOS 73, FRACCIÓN V Y 74, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, PUES A ELLO DEBE ATENDERSE PARA DETERMINAR SI SE NIEGA O CONCEDE

EL AMPARO.", aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro II, Tomo 1, noviembre de 2011, página 670, y el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, al resolver el amparo en revisión 102/2012.

El Tribunal Pleno, el treinta y uno de marzo en curso, aprobó, con el número 23/2014 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a treinta y uno de marzo de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de abril de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Tesis**Registro digital:** 2006279**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XXVII.3o.7 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCTENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).

El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 7/2013. Alicia Vázquez Rocha y otra. 16 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretaria: Dulce Guadalupe Canto Quintal.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2006291**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XXVII.3o.8 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI SE PROMUEVE A NOMBRE DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIRSE EL DOCUMENTO CON EL QUE SE ACREDITE LA PERSONALIDAD, Y EL JUEZ DE DISTRITO DEBE REMITIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES UNA COPIA DE AQUÉLLA Y DE DICHO DOCUMENTO, AL SOLICITARLES SU INFORME JUSTIFICADO, SI NO LO HIZO AL PEDIRLES EL PREVIO.

Conforme a los artículos 108, fracción I y 114, fracción III, de la Ley de Amparo, uno de los requisitos de la demanda de amparo indirecto consiste en acreditar la representación del promovente que actúa a nombre del quejoso, por lo que el documento con el que se acredite tal extremo constituye un anexo inherente de la demanda, dado que se trata de la comprobación de un presupuesto procesal sin el cual, no prospera la acción constitucional, pues su omisión amerita prevención, cuyo incumplimiento ocasiona tener por no presentada la demanda. Luego, como el artículo 110 de la citada ley exige al promovente exhibir copias suficientes de la demanda para traslado a las partes, también debe exhibir las del documento con el que acredite su personalidad cuando actúa en nombre del quejoso, por lo que al ser un anexo inherente a la demanda, el Juez de Distrito debe remitir a las autoridades responsables copia de ésta y de dicho anexo, al solicitarles su informe justificado, si no lo hizo al pedir el previo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 16/2013. Gobernador del Estado de Quintana Roo. 23 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretaria: Claudia Luz Hernández Sánchez.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 224/2016 de la Segunda Sala de la que derivó la tesis jurisprudencial 2a./J. 124/2016 (10a.) de título y subtítulo: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITA PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES."

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2006300**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Constitucional, Común**Tesis:** I.1o.A.E.2 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.**Tipo:** Aislada

INFORMACIÓN RESERVADA. CRITERIO DE PONDERACIÓN APLICABLE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PARA RESPETAR Y PRESERVAR LA REMITIDA EN EL INFORME JUSTIFICADO CON ESA CLASIFICACIÓN QUE COMPRENDE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE DESCONOCE EL QUEJOSO, Y PROTEGER Y GARANTIZAR EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL.

Al suscitarse en el juicio de amparo indirecto un conflicto entre los derechos fundamentales previstos, por una parte, en los artículos 14 (de defensa) y 17 (a la tutela judicial efectiva) y, por otra, en el diverso 6o. (a la información reservada o confidencial), en correlación con el 16 (derechos patrimoniales que conminan a clasificar la información secreta), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben ponderarse a través de lo que se conoce como "prueba de daño o interés público", evaluar y determinar qué información reservada, concreta y específica, es preciso desclasificar o develar para hacer funcionales los principios en pugna, con el propósito de obtener una versión pública para la parte interesada. Consecuentemente, cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe que la información remitida clasificada como reservada comprende los actos reclamados que desconoce el quejoso, con independencia de esa clasificación efectuada por la autoridad responsable que el juzgador debe respetar y preservar, es indispensable proteger y garantizar el derecho a la tutela judicial, por lo que debe permitirse a aquél el acceso a la que sea necesaria, a efecto de que pueda deducir sus derechos y fundar sus impugnaciones, en favor de una administración de justicia eficaz y completa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Queja 16/2013. Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V. y otro. 13 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2006301**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** I.1o.A.E.1 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.**Tipo:** Aislada

INFORMACIÓN RESERVADA. CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑEN AL INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE OBSERVE QUE LA REMITIDA CON ESA CLASIFICACIÓN COMPRENDE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE DESCONOCE EL QUEJOSO, DEBE PERMITÍRSELE EL ACCESO A LA QUE SEA NECESARIA, A FIN DE QUE PUEDA HACER VALER LO QUE A SU DERECHO E INTERÉS CONVENGAN.

El juicio de amparo indirecto se rige por sus propias reglas, en la medida en que se discuten violaciones a derechos fundamentales y debe primar un debido proceso que permita la tutela judicial efectiva, de modo que, cuando de las constancias que se acompañen al informe justificado se observe que la información remitida clasificada como reservada comprende los actos reclamados que desconoce el quejoso, debe permitírsele el acceso a la que sea necesaria, a fin de que pueda hacer valer lo que a su derecho e interés convengan, lo cual implica una reconsideración o revisión de los criterios de clasificación de la información, a efecto de conseguir este fin garantista.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Queja 16/2013. Comunicaciones Celulares de Occidente, S.A. de C.V. y otro. 13 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Agustín Ballesteros Sánchez.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 121/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivó la tesis jurisprudencial P./J. 26/2015 (10a.) de título y subtítulo: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRUCTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA."

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis

Registro digital: 2006453

Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito

Décima Época

Materia(s): Común

Tesis: III.2o.P.7 K (10a)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.

Tipo: Aislada

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO INDIRECTO. CARECE DE ÉL QUIEN RECLAMA QUE EN EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN UN DIVERSO JUICIO DEL ÍNDICE DEL MISMO JUZGADO DE DISTRITO, SE EXPRESARON CONSIDERACIONES PARA SOSTENER LA LEGALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.

Cuando en un amparo indirecto se reclama que en el informe justificado rendido por la autoridad responsable en un diverso juicio del índice del mismo Juzgado de Distrito se expresaron consideraciones para sostener la legalidad del acto reclamado, aquél es improcedente de acuerdo con el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo por no afectar el interés jurídico del quejoso, ya que la autoridad responsable, al rendir dicho informe, lo hace como parte dentro del juicio y en uso de un derecho subjetivo, de conformidad con el artículo 117, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la citada ley y, en tales condiciones, no se trata de un acto que provenga de autoridad, sino de un informe que rinde la autoridad responsable como parte en el juicio de amparo, en el que puede hacer valer causales de improcedencia o sostener la legalidad del acto que se le reclama; de ahí que el quejoso carece de interés jurídico al tratarse de un mero informe de la autoridad responsable.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Queja 5/2014. 13 de marzo de 2014. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Lorenzo Palma Hidalgo. Encargado del engrose: Óscar Vázquez Marín. Secretaria: María Yolanda Ascencio López.

Esta tesis se publicó el viernes 16 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2006573**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** I.1o.A.E.4 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, AL CONSTITUIR PRUEBA PLENA, ES SUFICIENTE PARA TENER POR CUMPLIDA LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.

El precepto mencionado dispone que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y establece la obligación para ésta de acompañar a su informe las constancias necesarias para apoyarlo, o sea, los documentos que respalden y sirvan tanto de sustento como de demostración a sus afirmaciones. Por otra parte, conforme al artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos consignados en medios electrónicos gozan de reconocimiento y validez absoluta. Consecuentemente, la exhibición en formato electrónico o digital de las constancias en que se apoya el informe justificado en el juicio de amparo, al constituir prueba plena, es suficiente para tener por cumplida la carga procesal de la autoridad responsable impuesta por el artículo 117 citado. Por lo anterior, si en un mismo órgano jurisdiccional se tramitan diversos amparos en los que los actos reclamados derivan de un mismo expediente administrativo, basta que la autoridad responsable presente, para uno de los juicios, un ejemplar impreso de las constancias que respalden lo aseverado en su informe justificado y, en formato electrónico o digital para los demás, siempre que se certifique la equivalencia en contenidos por el funcionario correspondiente, quien se responsabiliza de ese aspecto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Queja 6/2014. Pleno, Presidente, Secretario Ejecutivo y Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, todos de la Comisión Federal de Competencia Económica. 27 de febrero de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Rosa Elena González Tirado. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Queja 7/2014. Pleno, Comisionado Presidente, Secretario Ejecutivo y Notificador, todos de la Comisión Federal de Competencia Económica. 27 de febrero de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Rosa Elena González Tirado. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Queja 8/2014. Pleno, Presidente Ejecutivo (sic), Secretario Ejecutivo y Notificador, todos de la

Comisión Federal de Competencia Económica. 27 de febrero de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Rosa Elena González Tirado. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Queja 12/2014. Pleno y Secretario Ejecutivo, ambos de la Comisión Federal de Competencia Económica. 20 de marzo de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Rosa Elena González Tirado. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretaria: Claudia Erika Luna Baraibar.

Queja 15/2014. Pleno, Presidente, Secretario Ejecutivo, Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, Director General de Asuntos Jurídicos, todos de la Comisión Federal de Competencia Económica. 3 de abril de 2014. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Rosa Elena González Tirado. Secretaria: María Isabel Pech Ramírez.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2006574**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** I.1o.A.E.5 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO. LA EXHIBICIÓN EN FORMATO ELECTRÓNICO O DIGITAL DE LAS CONSTANCIAS EN QUE SE APOYA, PARA CUMPLIR CON LA CARGA PROCESAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 117, CUARTO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE DEBIDO PROCESO LEGAL, CONTRADICCIÓN E IGUALDAD DE LAS PARTES.

Si la autoridad responsable exhibe en formato electrónico o digital las constancias en que se apoya el informe justificado, a efecto de cumplir con la carga procesal impuesta por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, no se deja en estado de indefensión a las partes en el juicio, pues si bien es cierto que el derecho humano al debido proceso reconocido en favor de los gobernados en los artículos 1o. y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lleva implícita la necesidad de que todo procedimiento, como es el juicio de amparo, deba regirse por diversos principios establecidos en la ley, la jurisprudencia, la doctrina y el derecho internacional de los derechos humanos, como son, entre otros, los de debido proceso legal, contradicción e igualdad de las partes, también lo es que, en primer lugar, siempre se dispondrá de un ejemplar de las constancias exhibidas por la autoridad responsable con la calidad de documento certificado en soporte o formato electrónico y, en segundo, se dará vista a las partes con el contenido del informe justificado y sus anexos, específicamente los consignados en el formato electrónico, para lo cual, el Juez de Distrito deberá requerir a la autoridad responsable la exhibición de los ejemplares en formato electrónico y en versión pública que resulten necesarios e indispensables, a efecto de que las partes tengan pleno conocimiento y se impongan de dicha información y, en su caso, manifiesten lo que a su derecho convenga; por lo que es evidente que no se contrarían los principios mencionados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

Queja 6/2014. Pleno, Presidente, Secretario Ejecutivo y Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, todos de la Comisión Federal de Competencia Económica. 27 de febrero de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Rosa Elena González Tirado. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Queja 7/2014. Pleno, Comisionado Presidente, Secretario Ejecutivo y Notificador, todos de la Comisión Federal de Competencia Económica. 27 de febrero de 2014. Mayoría de votos. Disidente:

Rosa Elena González Tirado. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Queja 8/2014. Pleno, Presidente Ejecutivo (sic), Secretario Ejecutivo y Notificador, todos de la Comisión Federal de Competencia Económica. 27 de febrero de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Rosa Elena González Tirado. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Sergio Ballesteros Sánchez.

Queja 12/2014. Pleno y Secretario Ejecutivo, ambos de la Comisión Federal de Competencia Económica. 20 de marzo de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Rosa Elena González Tirado. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretaria: Claudia Erika Luna Baraibar.

Queja 15/2014. Pleno, Presidente, Secretario Ejecutivo, Director General de Investigaciones de Prácticas Monopólicas Absolutas, Director General de Asuntos Jurídicos, todos de la Comisión Federal de Competencia Económica. 3 de abril de 2014. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Rosa Elena González Tirado. Secretaria: María Isabel Pech Ramírez.

Esta tesis se publicó el viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis

Registro digital: 2006719

Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito

Décima Época

Materia(s): Común

Tesis: XVII.1o.C.T.24 K (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.

Tipo: Aislada

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE SI AL INFORME JUSTIFICADO SE ACOMPAÑAN DIVERSAS CONSTANCIAS QUE ACREDITAN QUE NO SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA, SIN QUE EL RECURRENTE DESVIRTÚE SU CONTENIDO.

De conformidad con el artículo, fracción e inciso de referencia, el recurso de queja procede, tratándose del juicio de amparo directo, contra la omisión de la autoridad responsable de tramitar la demanda relativa o cuando lo haga indebidamente; por tanto, si al informe justificado se acompañan diversas constancias que acreditan que no se presentó la demanda de amparo, sin que el recurrente desvirtúe su contenido, es inconcuso que no existe la omisión que se imputa a dicha autoridad, consecuentemente, el medio de impugnación debe desecharse por improcedente, al no satisfacer un presupuesto lógico o requisito de forma establecido en la ley.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Queja 27/2014. José Arturo García Rivera. 10 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María del Carmen Cordero Martínez. Secretaria: Myrna Grisselle Chan Muñoz.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de junio de 2014 a las 09:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis

Registro digital: 2006771

Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito

Décima Época

Materia(s): Común

Tesis: (I Región)4o.2 K (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.

Tipo: Aislada

INFORME JUSTIFICADO. CUANDO EN ÉL SE MODIFICA LA FUNDAMENTACIÓN Y/O MOTIVACIÓN DEL ACTO RECLAMADO, PROCEDE DAR VISTA AL QUEJOSO MEDIANTE NOTIFICACIÓN PERSONAL, PARA QUE PUEDA AMPLIAR LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

De la interpretación conjunta de los artículos 26, fracción I, inciso k) y 117, séptimo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, se colige que, tratándose de actos de naturaleza administrativa, cuando en el informe justificado respectivo la autoridad responsable dé su fundamentación y/o motivación, debe ordenarse correr traslado al quejoso con éste mediante notificación personal, a efecto de que tenga la oportunidad de ampliar la demanda de amparo al respecto, pues de lo contrario, se transgreden en su perjuicio las reglas que rigen el procedimiento del juicio de amparo, al dejarlo sin defensas. Consecuentemente, si la autoridad responsable modifica la fundamentación y/o motivación en que sustentó el acto reclamado, también debe darse vista en los términos indicados, ya que se trata de una misma situación en el juicio de amparo, de lo contrario, procede la reposición del procedimiento.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL.

Amparo en revisión 6/2014 (cuaderno auxiliar 338/2014) del índice del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal. Empacadora Rion, S.A. de C.V. 10 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Alberto Arriaga Farías. Secretaria: Erika Verence Carrillo García.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis

Registro digital: 2006772

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Décima Época

Materia(s): Común, Penal

Tesis: II.3o.P.36 P (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Tipo: Aislada

INFORME JUSTIFICADO. SI LO RINDE LA AUTORIDAD A LA QUE SE RECLAMÓ QUE NO RECIBIÓ EL ESCRITO POR EL QUE SE SOLICITÓ LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, Y ÉSTA, ADEMÁS DE NEGAR ESE ACTO, EMITE CONSIDERACIONES DE FONDO TENDENTES A EXPLICAR POR QUÉ NO PROCEDE DICHA FIGURA JURÍDICA, ESOS ARGUMENTOS NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO UN NUEVO ACTO, PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.

Si en la demanda de amparo el quejoso reclama la no recepción del escrito donde solicita la prescripción de la acción penal en la carpeta de investigación, pero del informe justificado se advierte que la autoridad responsable, además de negar el acto, emite consideraciones de fondo tendentes a explicar por qué en el caso no procede esa figura jurídica, tales argumentos no pueden considerarse como un acto reclamado autónomo susceptible de escrutinio en el juicio constitucional, pues de conformidad con el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, constituyen explicaciones que la autoridad estima pertinentes para dar soporte a su informe. Máxime si la existencia del acto reclamado no aparece demostrada en las constancias procesales, ni se prueba en la audiencia constitucional.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 45/2014. 3 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Selina Haidé Avante Juárez. Secretaria: Lizeth Bernal Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de junio de 2014 a las 10:35 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2007088**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común,
Administrativa**Tesis:** VI.1o.A.71 A (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

FALTA O INSUFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO. SU SOLA AFIRMACIÓN NO BASTA CUANDO AL RENDIR EL INFORME JUSTIFICADO, LA AUTORIDAD NO COMPLEMENTA TALES ASPECTOS EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO, PARA QUE INVARIABLEMENTE SE ACTUALICE UN VICIO DE FONDO Y SE CONCEDA EL AMPARO CON FUNDAMENTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO IN FINE DEL ARTÍCULO 124 DE LA CITADA LEY.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 117 de la nueva Ley de Amparo, tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, la autoridad responsable, en su informe justificado, deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado; sin embargo, cuando no se complementan no debe invariablemente concluirse que se está en presencia de un vicio de fondo, y que deba concederse el amparo en los términos que prevé el último párrafo del diverso artículo 124 del citado ordenamiento legal, en virtud de que no basta con que la parte quejosa afirme la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto materialmente administrativo, para que si la autoridad responsable no complementa éste al rendir su informe justificado, se actualice sin más la consecuencia prevista en la parte final del último párrafo del artículo 124 de la invocada ley, puesto que el Juez de Distrito, en primer lugar, debe analizar el o los conceptos de violación formulados al respecto y determinar si es fundado o infundado el planteamiento de falta o insuficiencia de fundamentación y motivación del acto reclamado, ya que si concluye que éste sí satisface dichos requisitos, exigidos por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ser constitucional el acto administrativo reclamado, y así lo confirma el Tribunal Colegiado en el recurso de revisión correspondiente, no trasciende para efectos de la parte final del último párrafo del artículo 124 de la nueva Ley de Amparo, el que la autoridad responsable no hubiera complementado aquél en su informe justificado; por el contrario, si el Juez Federal determina que, como lo planteó la parte quejosa, el acto reclamado sí adolece de falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, y así es confirmado por el Tribunal Colegiado, entonces sí trasciende al resultado del fallo la omisión en que incurra la autoridad responsable de no complementar tales aspectos al rendir su informe justificado, lo que actualiza el supuesto previsto en el último párrafo in fine del referido artículo 124, caso en el cual no podrá reiterar su actuación en ese sentido, sino ajustándose a los requisitos exigidos en la ley del acto.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 66/2014. 23 de abril de 2014. Mayoría de votos. Disidente: José Eduardo Téllez Espinoza. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: María Elena Gómez Aguirre.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de agosto de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2007098**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común, Penal**Tesis:** III.2o.P.57 P (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

ORDEN DE REAPREHENSIÓN. CUANDO SE RECLAMA EN AMPARO INDIRECTO Y SE ADUCE DESCONOCER EL MOTIVO POR EL QUE SE DECRETÓ, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR EL INFORME JUSTIFICADO PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y PREVENIRLO PARA QUE, SI LO ESTIMA CONVENIENTE, AMPLÍE SU DEMANDA O LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.

Cuando se promueve el juicio de amparo contra la orden de reaprehensión y el quejoso aduce desconocer el motivo por el que se decretó ese mandato de captura, el Juez de Distrito debe notificarle personalmente el informe justificado y prevenirlo para que, si lo estima conveniente, amplíe su demanda o los conceptos de violación. Lo anterior es así, toda vez que no puede presumirse que aquél tuvo a la vista las constancias que remitió la autoridad responsable y que sirvieron de base para emitir la orden, pues si el acuerdo en que éstas se recibieron se notificó por lista, debió ordenarse la notificación personal y prevenir al quejoso para que ampliara su demanda o los conceptos de violación, y así, emitir una resolución constitucional justa y apegada a la realidad, ya que es obligación del Juez de Distrito analizar totalmente, entre otras constancias, los informes justificados de las autoridades y advertir la existencia del acto que reclama el quejoso y que aduce desconocer y no únicamente ordenar darle vista, puesto que esa omisión genera incertidumbre jurídica y, consecuentemente, estado de indefensión, no siendo facultad del juzgador de control constitucional, mediante razonamientos forzados, dilucidar tal situación, esto es, qué acto o actos señalan, sino que este cometido corresponde al propio quejoso, en tanto que dicho proceder (debido señalamiento del acto reclamado) redundará en su beneficio y así podrá administrarse justicia correcta y eficazmente, sin perder de vista que en el juicio de amparo está por encima de cualquier otro aspecto procesal, la tutela de los derechos fundamentales del gobernado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 44/2014. 10 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Lorenzo Palma Hidalgo. Secretaria: María Yolanda Ascencio López.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de agosto de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2007112**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** IV.2o.A.74 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. **Tipo:** Aislada

VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DE AMPARO. SE ACTUALIZA POR LA OMISIÓN DE DAR VISTA AL QUEJOSO PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA RESPECTO DE LA COMPLEMENTACIÓN DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO, REALIZADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO.

El último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo dispone que en el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos materialmente administrativos a los que se atribuya la ausencia o insuficiencia de fundamentación y motivación, al rendir su informe justificado la autoridad deberá complementar esos aspectos, caso en el cual, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Así, dicha excepción al principio de inmutabilidad del acto reclamado permite que, previo al dictado de la sentencia en la audiencia constitucional, se anticipe la verificación del cumplimiento de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación y, concomitantemente, en función de la complementación del acto reclamado, se dé al impetrante la oportunidad de perfeccionar su defensa, garantizando que en la sentencia se efectúe un análisis integral de éste, tanto en sus aspectos formales como en los sustantivos, con lo cual se logra, en principio, inmediatez en la reparación de las violaciones que, por ser fuente de inseguridad jurídica, impedían al quejoso ejercer una defensa adecuada; también se aseguran el estudio y restauración de las violaciones sustantivas que llegasen a existir, evitando el dictado de una resolución que atienda sólo a los vicios formales, pero que postergue el estudio de los sustantivos, en detrimento del deber de no repetición como subprincipio del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, corresponde a los tribunales evitar dilaciones innecesarias en la resolución del asunto y, en todo caso, en la restauración de los derechos vulnerados, a través de un procedimiento eficiente y eficaz; de ahí que el precepto inicialmente citado anticipa al dictado de la sentencia la verificación del respeto al requisito constitucional de fundamentación y motivación, como garantía instrumental del derecho humano a la seguridad jurídica y, además, garantiza al gobernado la aptitud de defenderse y tiene, como primer alcance, el superar un estado de incertidumbre denunciado en su demanda, de suerte que si la autoridad complementa dichos aspectos, se adelanta un efecto restauratorio de la violación a un derecho humano y se logra que el impetrante conozca dentro del procedimiento de amparo, con mayor precisión, la naturaleza del acto, para perfeccionar su defensa, dado su conocimiento integral. Relacionado con lo anterior, el último párrafo del artículo 124 de la Ley de Amparo establece la obligación del Juez para que en los asuntos del orden administrativo se analice en la sentencia el acto reclamado, considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado y, ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en caso de concederse el amparo, se determine que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; este dispositivo adquiere sentido

jurídico, pues en él se encuentra inmerso implícitamente el principio de efectividad del amparo, el cual orienta y obliga a los órganos jurisdiccionales que conocen del juicio a resolver atendiendo a un sentido pragmático, que incida eficazmente en la esfera de derechos del gobernado, y no se utilice únicamente (por parte del quejoso) para entorpecer la actividad del Estado, o bien, tratándose de actos jurisdiccionales, para obstaculizar el goce de los derechos de la contraparte. Bajo ese contexto, de la interpretación sistemática de los dispositivos 117, último párrafo y 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, se colige que cuando en la demanda de amparo se reclame un acto materialmente administrativo, el Juez de Distrito deberá actuar procedimentalmente de la siguiente forma: 1) Rendido el informe justificado, en caso de que la autoridad responsable complemente la fundamentación y motivación, correrá traslado de forma personal al quejoso para que, en el plazo de quince días, realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a las cuestiones derivadas de la referida complementación; 2) Con la ampliación se dará vista a las responsables así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen; 3) Para tales efectos deberá diferirse la audiencia constitucional; 4) Celebrada ésta, en la sentencia el Juez analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado; y, 5) Si considera que, superado lo anterior, aún existe falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. En consecuencia, la omisión de dar vista al quejoso con la complementación de la fundamentación y motivación expresada en el informe justificado, para que amplíe su demanda, en lo que respecta a esa complementación, que origina que el Juez de Distrito no se pronuncie en la sentencia en relación con la reiteración o no del acto reclamado, sin posibilidad de cercioramiento efectivo sobre la incidencia real de éste en la esfera jurídica del impetrante, es decir, únicamente desde una perspectiva meramente anulatoria y no reparadora, constituye una violación a las leyes del procedimiento de amparo, así como al principio de efectividad de las sentencias, que trasciende al resultado del fallo y obliga a reponer el procedimiento para subsanar dicha omisión.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 89/2014. Delegado de las autoridades responsables del Municipio de Monterrey, Nuevo León. 24 de abril de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretario: Luis Alberto Calderón Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de agosto de 2014 a las 08:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2007255**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común, Administrativa**Tesis:** VI.Io.A.72 A (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.**Tipo:** Aislada

FALTA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO NO COMPLEMENTA ESOS ASPECTOS POR ESTIMAR QUE EL ACTO RECLAMADO LOS CUMPLE, NO PROCEDE CORRER TRASLADO AL QUEJOSO CON AQUÉL, EN TÉRMINOS DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO.

Dicha porción normativa establece que tratándose de actos materialmente administrativos, cuando en la demanda de amparo se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en el informe justificado la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado y, en tal caso, deberá correrse traslado con el informe al quejoso, para que en el plazo de quince días realice la ampliación de la demanda, la cual se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación. Sin embargo, cuando la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, defiende su acto tal y como fue emitido, por estimar que está suficientemente fundado y motivado, no se actualiza el supuesto previsto en el último párrafo del artículo 117 de la nueva Ley de Amparo, referente a correr traslado con el informe al quejoso, porque si la autoridad no complementó su acto en esos aspectos, no hay materia para que el quejoso formulara la ampliación de la demanda, en virtud de que ésta única y exclusivamente podría referirse a cuestiones derivadas de la mencionada complementación, la que de no existir exime al Juez de Distrito de correr traslado con el informe al quejoso, razón por la cual, en un caso así, no se produce violación alguna que obligara a ordenar reponer el procedimiento en el juicio de amparo de origen.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 48/2014. 14 de mayo de 2014. Mayoría de votos. Disidente: José Eduardo Téllez Espinoza. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: María Luisa Aceves Herrera.

Esta tesis se publicó el viernes 22 de agosto de 2014 a las 09:33 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2007493**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común,
Administrativa**Tesis:** VI.Io.A.74 A (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

REGLA ESPECIAL PREVISTA DE MANERA COMPLEMENTARIA EN LOS PÁRRAFOS FINALES DE LOS ARTÍCULOS 117 Y 124 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA FALTA O INSUFICIENCIA DE LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS EN ASUNTOS VINCULADOS CON LA MATERIA ADMINISTRATIVA. DA LUGAR A DIVERSAS HIPÓTESIS QUE PUEDEN PRESENTARSE, DERIVADAS DE LA ACTUACIÓN QUE DESPLIEGUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

Del último párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, vigente desde el tres de abril de dos mil trece, se advierte una regla especial tratándose de actos materialmente administrativos, consistente en que cuando en la demanda de amparo se aduzca la falta o insuficiencia de la fundamentación y motivación de aquéllos, la autoridad responsable deberá, en su informe justificado, complementar en esos aspectos el acto reclamado. En relación con ello, se dispone que en caso de que dicha autoridad efectúe tal complementación, deberá correrse traslado con el respectivo informe al quejoso, para que esté en aptitud de realizar la ampliación de la demanda en el plazo legalmente previsto, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación, y que, en su caso, con dicha ampliación se dará vista a las responsables, así como al tercero interesado, y se emplazará a las diversas autoridades que en aquélla se señalen. Por su parte, el último párrafo del diverso 124 de la propia ley de la materia, prevé igualmente una regla especial relativa a la forma en que debe analizarse en la sentencia el tema jurídico relativo a la fundamentación y motivación en los asuntos del orden administrativo. Al respecto, la regla jurídica en comento establece que en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que, en su caso, haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado para complementarlo, y si a pesar de esa complementación se concluye la falta o insuficiencia de dichos requisitos de fundamentación y motivación, dispone que en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Por tanto, debe concluirse que esta última porción normativa complementa la regulación que sobre el tema relativo a la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación de los actos materialmente administrativos, se introduce en el artículo 117, último párrafo, inicialmente referido, ya que prevé la forma en que debe analizarse en el fallo si se satisfacen los referidos requisitos constitucionales de fundamentación y motivación, disponiendo que debe atenderse a la complementación que, en su caso, introduzca la responsable en el informe justificado, y fija los alcances de la protección constitucional para el caso de estimarse omisa o insuficientemente fundado y motivado el acto, pues al efecto prevé que deberá estimarse que se está ante un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Ahora bien, precisado lo anterior, debe decirse que de la interpretación sistemática y conforme de las normas jurídicas en comento, se advierte que tratándose de actos en materia administrativa, en los que se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, pueden presentarse, al menos, los siguientes supuestos: 1. Que la autoridad responsable se limite, al rendir su informe justificado, a exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la

constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, pero sin complementarlo en esos aspectos; es decir, que dicho informe se rinda en los términos generales que se prevén en los párrafos primero y cuarto del propio artículo 117, lo que podría atender a diversas circunstancias, como el estar simplemente ante una omisión por parte de la autoridad responsable, o bien, que ésta considere que el acto que de ella se reclama resulta constitucional y no precisa ser complementado en cuanto a su fundamentación y motivación, y estime que al momento de efectuarse el análisis de tales aspectos en la sentencia respectiva, se concluirá que es ajustado a derecho. 2. Que la autoridad responsable complemente el acto reclamado en cuanto a su fundamentación y motivación. En este último caso, se actualizan las siguientes obligaciones derivadas del texto legal: 2.1. Debe correrse traslado con el respectivo informe al quejoso, para que en el plazo legalmente previsto realice la ampliación de la demanda, la que se limitará a las cuestiones derivadas de la referida complementación. En caso de ampliarse la demanda, se dará vista a las responsables, así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen; y 2.2. En la sentencia deberá analizarse el tema jurídico relativo a la fundamentación y motivación del acto reclamado, considerando no sólo el contenido de éste, sino también la complementación sobre tales aspectos contenida en el informe justificado y, en su caso, los planteamientos hechos valer en la ampliación de demanda. Es importante precisar que del propio análisis de las normas legales en cuestión, no se sigue que en el supuesto de que la autoridad responsable no complemente la fundamentación y motivación del acto reclamado en la hipótesis del último párrafo del artículo 117 de la nueva Ley de Amparo, invariablemente deba concluirse que se está en presencia de un vicio de fondo y que deba concederse el amparo en los términos que prevé el último párrafo del diverso 124, pues expresamente esta última norma ordena efectuar en la sentencia el análisis de dichos requisitos constitucionales, y prevé que al efecto se considere, en su caso, la complementación efectuada en esos aspectos en el informe, pero no condiciona el sentido del fallo a la conducta que despliegue la autoridad responsable. Sostener lo contrario implicaría que la concesión de la protección federal quedara al arbitrio de las partes y no derivara del análisis que el juzgador de amparo efectúe respecto de la constitucionalidad del acto de autoridad. Ahora bien, el alcance de la consecuencia normativa derivada de estimar que el acto acusa falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, consistente en que la autoridad está impedida para su reiteración, debe entenderse en el sentido de que, con motivo de la concesión de la protección constitucional, la responsable no está en aptitud jurídica de emitir un acto en que, nuevamente, vulnere tales prerrogativas fundamentales, pues expresamente está aparejada a la ficción legal de mérito, una proscripción en ese sentido. Asimismo, dado que esta prohibición de reiterar la vulneración de derechos en perjuicio del particular quejoso, debe armonizarse con el respeto a la prerrogativa específica de seguridad jurídica, debe tenerse presente la hipótesis consistente en que el acto reclamado haya sido emitido en respuesta a una petición formulada por el particular, o bien, se haya dictado para resolver una instancia o recurso; pues en ese supuesto, la autoridad, a fin de no dejar de resolver dichas peticiones, instancias o recursos, debe dictar un nuevo acto, pero ciñéndose a la restricción legal de referencia, únicamente a fin de no conculcar dicho principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 4/2014. Síndico Municipal del Ayuntamiento de Puebla. 9 de abril de 2014. Mayoría de votos. Disidente: José Eduardo Téllez Espinoza. Ponente: Francisco Javier Cárdenas Ramírez. Secretario: Salvador Alejandro Lobato Rodríguez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de septiembre de 2014 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2007527**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Constitucional, Común**Tesis:** XIX.1o.P.T.2 CS (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.**Tipo:** Aislada

INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SI SE LE TUVO COMO PARTE TERCERO INTERESADA HASTA QUE SE RINDIÓ EL INFORME JUSTIFICADO Y SE LE EMPLAZÓ CON LA DEMANDA Y SU AUTO ADMISORIO SIN OTORGARLE COPIA DE AQUÉL NI DE LAS CONSTANCIAS QUE LO ACOMPAÑARON PARA QUE SE IMPUSIERA TOTALMENTE DEL ACTO RECLAMADO Y EJERCIERA SU DERECHO DE DEFENSA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, ELLO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.

Cuando el Juez de Distrito decide tener como parte tercero interesada a una niña, niño o adolescente hasta el momento en que se ha rendido el informe justificado y ordena emplazarlos al juicio, corriéndoles traslado únicamente con la demanda y su auto admisorio, sin otorgarles copia autorizada del informe justificado ni de las constancias respectivas que acompañó la autoridad responsable, a efecto de que se impusieran totalmente del acto reclamado y ejercieran su derecho de defensa a través de su representante, ello constituye una violación a las leyes del procedimiento que amerita su reposición, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que deben protegerse sus derechos a participar en los procedimientos jurisdiccionales en los que se afecte su esfera jurídica y ser escuchados e informados conforme a los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño y 38 a 41 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, permitiéndoles el acceso a todo lo actuado en los autos para una mejor defensa de sus derechos, lo cual se logrará, no sólo dándole vista con el expediente en el que se ventile la controversia, sino proporcionándole los medios para que dicho acceso sea efectivo, lo cual se logrará, otorgándoles copia autorizada del informe justificado de la responsable y piezas procesales que lo acompañaron para que se impongan realmente del acto reclamado y puedan ejercer su defensa, a través de quien los representa en el juicio.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión 70/2014. 12 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Abel Anaya García. Secretario: Alfonso Silva Vicencio.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de septiembre de 2014 a las 09:45 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2007879**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** VI.2o.C.20 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.**Tipo:** Aislada

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA FORMULARLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE CONCLUYE EL PLAZO DE TRES DÍAS CON EL QUE SE DA VISTA AL QUEJOSO CON EL INFORME JUSTIFICADO.

Para la ampliación de la demanda de amparo deben tenerse en cuenta las mismas condiciones establecidas para la presentación de aquélla, de manera que el plazo de quince días al que alude el artículo 17 de la ley de la materia, interpretado en relación con los diversos numerales 18 y 111 de la misma ley, debe computarse a partir de que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución. Atendiendo al último de los dispositivos legales mencionados, la ampliación de la demanda de amparo puede hacerse siempre y cuando no transcurran los plazos para su presentación, a partir de que el quejoso tenga conocimiento de los actos de autoridad que guarden relación estrecha con los reclamados en la demanda inicial. En tal virtud, en los casos en que el Juez de amparo ordena dar vista al quejoso con el informe justificado y sus anexos, el cómputo del término para la presentación de la ampliación de la demanda no debe realizarse a partir del día siguiente al en que surte efectos la notificación del auto que ordenó la vista, ya que el artículo 117 de la Ley de Amparo no establece un plazo para que el quejoso acuda a imponerse de dicho informe, de manera que hay que acudir, supletoriamente, al plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, en los casos en que la ampliación de la demanda de amparo se realice a partir de la rendición del informe justificado, el término de quince días para formularla debe computarse a partir del siguiente al en que culmine el plazo de tres que dure la vista que se da al quejoso con dicho informe.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

Queja 114/2014. María de los Ángeles Otilia Olazo Campos o María de los Ángeles Olazo Campos o María de los Ángeles Olazo de Lara. 25 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino Reyna.

Nota: Esta tesis fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 368/2016 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la que derivó la tesis jurisprudencial P./J. 8/2018 (10a.) de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. MOMENTO EN EL QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR SU AMPLIACIÓN, CON MOTIVO DE LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO."

Por ejecutoria del 15 de febrero de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la contradicción de tesis 379/2016 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.) que resuelve el

mismo problema jurídico.

Por ejecutoria del 15 de febrero de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró sin materia la contradicción de tesis 252/2017 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.

Por ejecutoria del 10 de octubre de 2018, la Primera Sala declaró improcedente la contradicción de tesis 197/2018 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis, al existir la jurisprudencia P./J. 8/2018 (10a.) que resuelve el mismo problema jurídico.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de noviembre de 2014 a las 09:51 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis

Registro digital: 2007891

Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito

Décima Época

Materia(s): Común

Tesis: I.18o.A.3 K (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.

Tipo: Aislada

INFORME JUSTIFICADO. COMPLEMENTACIÓN DEL. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO NO ES APLICABLE A ACTOS ADMINISTRATIVOS DE CARÁCTER OMISIVO.

La porción normativa referida establece que cuando se hagan valer en la demanda de amparo indirecto violaciones relacionadas con la falta o insuficiente fundamentación y/o motivación, y se trate de actos materialmente administrativos, las autoridades responsables deberán complementar en esos aspectos el acto reclamado, al rendir su informe justificado. De ahí que dicha regla sea inaplicable respecto de actos omisivos, dado que éstos se refieren lisa y llanamente a la ausencia de un actuar por las autoridades y, por tanto, no es posible complementarlos, proporcionando fundamentación o motivación alguna en el informe justificado que debiera tomarse en consideración en la litis, por lo cual, en estos casos, debe imperar la regla general de inmutabilidad de los actos reclamados.

DÉCIMO OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 143/2014. Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene, en la Delegación Regional Poniente en el Distrito Federal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 7 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Cruz Razo. Secretaria: Anís Sabedra Alvarado Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 07 de noviembre de 2014 a las 09:51 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2008052**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** (III Región)4o.19 K (10a.) **Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. **Tipo:** Aislada

DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO, POR EL HECHO DE QUE EL PARTICULAR SE HAGA SABEDOR DE LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS DEL ACTO MATERIALMENTE ADMINISTRATIVO RECLAMADO DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO Y ALEGUE HABERLOS DESCONOCIDO PREVIAMENTE A LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO, AUN CUANDO AQUÉL, CON LA FUNDAMENTACIÓN RELATIVA, SEA DE FECHA ANTERIOR A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA.

Del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo será improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que la ley de la materia prevé y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con el apuntado cuerpo legal. Asimismo, determina diversas hipótesis de excepción al principio de definitividad descrito, a saber: 1. Que el acto reclamado carezca de fundamentación; 2. Que únicamente se aleguen violaciones directas a la Constitución; y, 3. Que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia. Concomitante con lo anterior, el último párrafo del numeral analizado es enfático al indicar que si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio aludido. Sin embargo, esa disposición debe interpretarse de conformidad con los diversos 117, último párrafo y 124, último párrafo, del propio ordenamiento, pues éstos contienen el único supuesto en que se permite a la autoridad responsable expresar la fundamentación de su acto cuando carezca de ella, o complementarla en caso de que estime haya sido insuficiente, a saber, respecto de aquellos actos materialmente administrativos en los que, al ser del conocimiento de los particulares, no contengan la fundamentación correspondiente; de ahí que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado, pueda precisar los fundamentos que la facultaron para actuar en los términos en que lo hizo. Consecuentemente, de la interpretación sistemática de los preceptos referidos no se colige que se actualice una excepción al principio de definitividad que, por regla general, rige en el amparo indirecto, por el hecho de que el particular se haga sabedor de las razones y fundamentos del acto materialmente administrativo reclamado durante la tramitación del juicio y alegue haberlos desconocido previamente a la rendición del informe justificado, aun cuando aquél, con la fundamentación relativa, sea de fecha anterior a la presentación de la demanda, pues estimar lo contrario generaría la promoción indiscriminada de juicios de amparo, porque bastaría que los quejosos expresaran desconocer el acto para hacer viable un medio de defensa instituido como extraordinario.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA TERCERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN GUADALAJARA, JALISCO.

Amparo en revisión 223/2014 (cuaderno auxiliar 588/2014) del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con apoyo del Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Comercializadora Britannia, S.A. de C.V. 27 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Claudia Mavel Curiel López. Secretario: Édgar Iván Ascencio López.

Esta tesis se publicó el viernes 28 de noviembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis

Registro digital: 2008204

Instancia: Tribunales Colegiados
de Circuito

Décima Época

Materia(s): Común

Tesis: XXVII.3o.67 K (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.

Tipo: Aislada

INFORME JUSTIFICADO. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE SOLICITA AL JUEZ DE DISTRITO LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE QUINCE DÍAS PARA RENDIRLO, DEBE REVELAR LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS QUE LO AMERITEN.

Conforme al artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable debe rendir su informe justificado en el amparo indirecto dentro del plazo de quince días, que podrá ampliarse por otros diez, "atendiendo a las circunstancias del caso". Ahora bien, cuando el Juez de Distrito no decreta oficiosamente esta prórroga, se entenderá que ha considerado normales las circunstancias del caso y, por tanto, que ha estimado innecesario alterar el periodo general previsto por el legislador para la rendición del informe en condiciones ordinarias. En este supuesto, si la autoridad responsable solicita la ampliación del plazo de quince días, deberá revelar las circunstancias extraordinarias, desconocidas por el juzgador, que ameriten el otorgamiento de un periodo mayor. El razonamiento de esta solicitud no quedará satisfecho con el simple aserto de que la prórroga es necesaria a fin de recabar los datos y documentos requeridos para sustentar el informe y remitir las copias certificadas que le servirán de apoyo. Es así, porque la necesidad de buscar y recopilar esos elementos es una condición común en la preparación de los informes justificados, de modo que, por sí misma, resulta insuficiente para demostrar la procedencia de una prórroga de carácter excepcional.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 191/2014. Juan Margarito Domínguez Montero. 28 de agosto de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: Samuel René Cruz Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 09 de enero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2008385**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común,
Administrativa**Tesis:** XIX.1o.1 A (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

CORRESPONDENCIA EN LOS CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMA SU RETENCIÓN PROLONGADA Y LA RESPONSABLE, EN SU INFORME JUSTIFICADO, SEÑALA AMBIGUA Y GENÉRICAMENTE QUE EN SU ENTREGA SE CUMPLEN LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA NORMATIVA INTERNA, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DEL ACTO Y LA OBLIGACIÓN DE AQUÉLLA DE DEMOSTRAR SU AFIRMACIÓN.

Cuando el acto reclamado en el amparo consiste en la retención prolongada de correspondencia dirigida a los quejosos, quienes se encuentran reclusos en un centro penitenciario, y la responsable, en su informe justificado, niega la existencia de aquél y, ambigua y genéricamente señala que en su entrega se cumplen los requisitos previstos en los artículos 70 del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social y 30, 31 y 32 del Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de noviembre de 2006, es evidente que dicha forma de rendir el informe genera la presunción de certeza del acto reclamado, sin que proceda imponer a los quejosos la carga de la prueba para que desvirtúen esa negativa, pues acorde con la normativa interna existente para la recepción de correspondencia destinada a los internos y su forma de entrega, así como con la condición de vulnerabilidad en que se coloca a las personas privadas de su libertad, es inconcuso que dicha forma de proceder genera una afirmación que le corresponde demostrar a la autoridad, dado el carácter omisivo en que incurrió y, si no lo hace, el acto reclamado viola el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al privarse a los agraviados del derecho a recibir su correspondencia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión 205/2014. Vladimir Guzmán Ayala y otros. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Miguel García Treviño. Secretario: Arturo Ortegón Garza.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de febrero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2008463**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** VI.Io.A.35 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO NO RENDIDO DENTRO DEL TÉRMINO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO. NO AMERITA LA IMPOSICIÓN DE MULTA CONFORME A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 260 DE DICHA LEY.

La multa prevista en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se actualiza ante la falta de rendición del informe con justificación o la omisión de remitir las constancias necesarias para resolver el juicio de amparo. Así, el mencionado precepto únicamente autoriza al Juez de Distrito a imponer a las autoridades responsables una multa que oscila entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento de realizarse la conducta sancionada, cuando aquéllas no rindan su informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. Además, debe tomarse en consideración que el párrafo tercero del artículo 117 del propio ordenamiento, prevé la posibilidad de que los informes justificados se rindan extemporáneamente, y que a pesar de ello puedan ser tomados en cuenta si la parte quejosa tuvo oportunidad de conocerlos; sin que en el citado precepto o en algún otro de la ley de la materia, se establezca que la rendición de los informes fuera del término de quince días, motive la imposición inmediata de sanción pecuniaria alguna. En efecto, una multa de ese tipo no es dable imponerla en un acuerdo de mero trámite, sino que en el caso de que las responsables no rindan sus informes con justificación, en la sentencia se les impondrá la multa respectiva. Ello tiene su razón de ser, ya que será hasta que se emita el fallo constitucional cuando el Juez de Distrito estará en aptitud legal de determinar si las responsables cumplieron con el imperativo que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, consistente en la rendición de sus informes con justificación o, en su caso, de la remisión de las constancias necesarias; ya que aun cuando éstos se rindan extemporáneamente, podrán ser tomados en consideración en la sentencia, si las partes estuvieron en aptitud de conocerlos. Asimismo, si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de normas generales, aun cuando las autoridades responsables que tengan el carácter de legislativas fueran omisas en rendir sus informes, ello no daría lugar a sancionarlas con multa, de conformidad con el último párrafo del artículo 260 de la Ley de Amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

Queja 94/2014. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla y otras. 12 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Higuera Corona. Secretaria: María Luisa Aceves Herrera.

Esta tesis se publicó el viernes 13 de febrero de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2008534**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XIX.1o.3 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO. CASO EN EL QUE POR SER AMBIGUO, CONTENER MANIFESTACIONES GENÉRICAS EN CUANTO A QUE NO SE VIOLAN DERECHOS FUNDAMENTALES, E INCONGRUENTE CON LO EXPRESADO POR EL QUEJOSO EN SU DEMANDA DE AMPARO, EL ACTO RECLAMADO DEBE TENERSE POR PRESUNTIVAMENTE CIERTO (RETENCIÓN DE LA CORRESPONDENCIA EN UN CENTRO PENITENCIARIO).

Conforme al artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe con justificación en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio o la constitucionalidad del acto reclamado y acompañará copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. Así, la finalidad del informe justificado es que las partes interesadas puedan conocer las razones y fundamentos que sustentan los actos reclamados, así como la de fijar la litis constitucional. Ahora bien, cuando el interno en un centro penitenciario reclama en el juicio de amparo que la autoridad carcelaria viola sus derechos fundamentales porque le retiene su correspondencia, y ésta, al rendir su informe justificado, incongruente con lo expresado por el quejoso en su demanda, sostiene ambigua y genéricamente, que no es cierto el acto reclamado y que únicamente "se hace entrega de la correspondencia conforme a la normatividad que rige en el reclusorio", sin negar la existencia de la retención de correspondencia al quejoso, o manifestar si llegó alguna para éste y, en su caso, si ya se la entregó, o bien, acreditar la causa del retardo si hubiera alguna entrega pendiente en trámite, ello genera la presunción de certeza del acto reclamado, pues si bien, por regla general, la negativa del acto por inexistencia conduce al sobreseimiento en el juicio, en el caso, debe atenderse al acto reclamado y a que el citado informe justificado se rinda con la debida explicitéz.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión 205/2014. Vladimir Guzmán Ayala y otros. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Miguel García Treviño. Secretario: Arturo Ortigón Garza.

Esta tesis se publicó el viernes 20 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2008615**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XIX.1o.2 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO. CUANDO LA AUTORIDAD CARCELARIA NIEGA EN ÉSTE QUE HA RETENIDO LA ENTREGA DE LA CORRESPONDENCIA AL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD, NO DEBE IMPONERSE A ÉSTE LA CARGA DE LA PRUEBA PARA DESVIRTUAR LA NEGATIVA POR ENCONTRARSE EN UN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y DESEQUILIBRIO PROCESAL FRENTE A AQUÉLLA.

Cuando el quejoso que se encuentra en un centro penitenciario reclama en el juicio de amparo indirecto que la autoridad carcelaria le retiene la entrega de su correspondencia, y ésta, al rendir su informe justificado niega ese acto, no debe imponerse a aquél la carga de la prueba para que desvirtúe dicha negativa, dado que su condición de interno lo coloca en un estado de vulnerabilidad y desequilibrio procesal en relación con la posición que guardan las autoridades, pues conforme a los artículos 31 y 32 del Manual de Seguridad de los Centros Federales de Readaptación Social, corresponde a éstas, a través de la oficialía de partes, recibir la correspondencia y remitirla al área de seguridad y custodia para su revisión externa, tanto física como electrónicamente, su clasificación y separación por módulos y secciones para entregarla a los internos; por consiguiente, todo el mecanismo queda en poder de las autoridades penitenciarias, quienes son las únicas capaces de proporcionar la información detallada respecto del acto reclamado, esto es, si existe o no correspondencia retenida que no se hubiera entregado al interesado o si ya la recibió, y adjuntar la documentación que acredite lo manifestado en su informe respectivo. De esta manera, se lograría un equilibrio de acceso a la justicia constitucional a quienes por sus circunstancias particulares, en el caso, de personas privadas de su libertad, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y reclaman la violación de sus derechos humanos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Amparo en revisión 205/2014. 11 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Miguel García Treviño. Secretario: Arturo Ortega Garza.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de marzo de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2008829**Instancia:** Tribunales Colegiados de Circuito **Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** II.2o.P.14 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.**Tipo:** Aislada

CONSTANCIAS REMITIDAS CON EL INFORME JUSTIFICADO. NO PUEDE NEGARSE AL QUEJOSO IMPONERSE DE ÉSTAS, AUN CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) LAS HAYA ESTIMADO COMO RESERVADAS, SI PUEDE ELABORAR UNA VERSIÓN DE AQUÉLLAS PARA PONERSE A LA VISTA DE LAS PARTES, Y SIN VIOLAR EL SIGILO Y CONFIDENCIALIDAD DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA -DE DONDE DERIVÓ EL ACTO RECLAMADO-, DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN.

Si el juicio de amparo indirecto es un procedimiento de impugnación autónomo donde se reclaman actos de autoridad, es claro que en él, éstos están sometidos al análisis de su constitucionalidad en equilibrio y contradicción al derecho de los quejosos para debatir este aspecto en cuanto a lo que a éstos perjudique. Por tanto, la autoridad responsable no puede condicionar el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas del propio juicio constitucional, ni la actuación de la autoridad de amparo, para complementar o compensar sus actos. Ahora bien, tratándose de las constancias que son remitidas por el Ministerio Público (autoridad responsable) junto con su informe justificado, en asuntos relacionados con la secrecía o sigilo de la averiguación previa, es responsabilidad de ésta - y no de los Jueces de amparo- buscar los métodos que le permitan enviarlas sin violar los derechos de quienes acceden al juicio constitucional en contra de lo que individualmente les afecta; por ende, en estos casos, la integración de las constancias debiera hacerse de forma tal que, cumpliendo con la ley, se tenga contemplado que las actuaciones remitidas al juicio de amparo, no pueden estar ya sujetas al criterio de sigilo de la autoridad responsable, pues si obran en el juicio de amparo no deben ser ajenas ni ocultarse al quejoso; de ahí que, si el Ministerio Público estima que ciertas actuaciones de la averiguación previa -de donde derivó el acto reclamado- son consideradas como reservadas, para no violentar el secreto y confidencialidad que en aquéllas ha de imperar, debe adjuntar a su informe una versión que pueda ser consultable, y así el Juez de Distrito, estar en posibilidad de ponerlas a la vista de las partes, pues si bien no se trata de que a través del amparo se tenga acercamiento a cuestiones ajenas al quejoso, lo cierto es que no puede negársele el acceso a las constancias remitidas como justificación del acto reclamado, ya que sólo así se respetan su derecho y la posibilidad plena de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad de dicho acto; de lo contrario, se actualiza una violación a las reglas esenciales del procedimiento que amerita su reposición, en términos del artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 142/2014. 6 de noviembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: José Nieves Luna Castro. Secretario: Silvestre P. Jardón Orihuela.

Nota: La presente tesis aborda el mismo tema que la diversa I.1o.A.E.1 K (10a.), de título y subtítulo: "INFORMACIÓN RESERVADA. CUANDO DE LAS CONSTANCIAS QUE SE ACOMPAÑEN AL INFORME JUSTIFICADO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE OBSERVE QUE LA REMITIDA CON ESA CLASIFICACIÓN COMPRENDE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE DESCONOCE EL QUEJOSO, DEBE PERMITÍRSELE EL ACCESO A LA QUE SEA NECESARIA, A FIN DE QUE PUEDA HACER VALER LO QUE A SU DERECHO E INTERÉS CONVENGAN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo II, abril de 2014, página 1525, que fue objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 121/2014, resuelta el 26 de mayo de 2015 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la que derivó la tesis de jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), de título y subtítulo: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA."

Esta tesis se publicó el viernes 10 de abril de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2008930**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** I.3o.C.74 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO.

De los artículos 5o., fracción III y 115 de la Ley de Amparo, se advierten las partes en el juicio constitucional, entre ellas, el tercero interesado y los elementos que debe contener el auto admisorio de la demanda, entre ellos, la orden de correr traslado a éste, con la finalidad de que sea oído en el juicio y le sea respetado su derecho de audiencia. De ahí que, si el acto reclamado deviene de una controversia judicial y el quejoso señala a quién o quiénes considera parte tercero interesada, el Juez de amparo debe tenerlos con ese carácter y llamarlos a juicio, sin que para ello, deba esperar la llegada de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, ya que en su momento, conforme a éstas puede determinar, con argumentos jurídicos, si corresponde o no el carácter de tercero interesado o, en su caso, advertir la existencia de diversos. Así, dicha calidad es una cuestión que debe ser analizada por el Juez de Distrito desde el inicio del juicio, a fin de integrar debidamente la relación procesal y no postergarlo hasta tener a la vista las constancias del juicio de origen. Sin que pase inadvertido el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).", en el sentido de que sólo el demandado emplazado en el juicio de origen tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal, lo que implica que el tercero que aún no es emplazado al juicio de origen no ha resentido afectación alguna en su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender en el juicio de amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Queja 102/2014. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, División Fiduciaria, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso número F/169852, únicamente en representación del patrimonio "A" de dicho fideicomiso. 26 de junio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretaria: María Estela España García.

Nota: La tesis 2a./J. 67/2009 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, mayo de 2009, página 265.

Esta tesis se publicó el viernes 17 de abril de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2008968**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común**Tesis:** XXVII.3o.75 K (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

INFORME JUSTIFICADO. NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO.

El artículo 1o., fracción I, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia suscitada por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos. En relación con esto, su artículo 5o., fracción II, refiere que, con independencia de su naturaleza formal, es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omite el acto que de realizarse tendría esos mismos efectos. La creación, modificación o extinción de una situación jurídica en forma unilateral y obligatoria, depende del tipo de relaciones que sostengan los sujetos, particularmente, aquel a quien se le considera autoridad, frente a los gobernados; siendo éstas las de subordinación, supraordinación y coordinación, y conforme a ellas, sólo será autoridad responsable, para efectos del amparo, aquel ente que se ubique en una relación de supra a subordinación frente los particulares, pues sólo desde esa posición sus actos son imperativos, coercitivos y unilaterales, de manera que puede crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Por otro lado, de los artículos 115 a 118 de la propia ley, se deduce que el informe justificado es un documento que el ente señalado como responsable rinde en el juicio de amparo en cumplimiento de un mandato del Juez de control constitucional, y mediante él, se remiten constancias y se hacen manifestaciones relacionadas con la certeza del acto reclamado, su legalidad o constitucionalidad, su fundamento, y determinados datos en amparo en materia agraria. Así, dicho informe es un acto que se da en un proceso en el cual quien lo emite tiene el carácter de parte, sujeta a una relación de subordinación frente al Juez, y de coordinación frente a su contraparte, generalmente el quejoso. Y si bien su rendición se da en el marco de una norma, ésta no lo traduce en una facultad, sino en un "deber procesal" que, de incumplirse, por regla general, hace que se presuma cierto el acto reclamado e, incluso, que se sancione a la obligada, en términos del artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Consecuentemente, el informe justificado no es un acto que se verifique en una relación de supra a subordinación de su emisor frente a otros sujetos; luego, no es un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 391/2014. Rainer Gerhard Hummel. 26 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Edgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 42, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de

la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo.
Secretario: Juan Carlos Corona Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 24 de abril de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis**Registro digital:** 2009029**Instancia:** Tribunales Colegiados
de Circuito**Décima Época****Materia(s):** Común,
Administrativa**Tesis:** VII.1o.A.9 A (10a.)**Fuente:** Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación.**Tipo:** Aislada

ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. CONSECUENCIAS DE LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO O DE HACERLO SIN COMPLEMENTAR LA FALTA O INSUFICIENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUÉLLOS ADUCIDA EN LA DEMANDA DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

De acuerdo con el artículo 117, primero, cuarto y último párrafos, de la Ley de Amparo, las autoridades responsables deben rendir su informe con justificación a través de los medios previstos en la propia norma, en el cual expondrán, entre otros aspectos, las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener, en su caso, la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, mientras que respecto de los actos materialmente administrativos se establece una regla específica, consistente en que cuando en la demanda se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, la autoridad responsable deberá, en su correspondiente informe justificado, complementar en esos aspectos el acto reclamado; en caso de que realice esa complementación, deberá correrse traslado con el respectivo informe al quejoso, para que pueda ampliar su demanda en el plazo legalmente determinado, la que se limitará a cuestiones derivadas de la referida complementación, y con la cual se dará vista a las propias responsables, así como al tercero interesado y, en su caso, se emplazará a las diversas autoridades que en ampliación se señalen. Por su parte, el diverso numeral 124, último párrafo, de esa ley, igualmente contiene una regla especial relativa a la forma en que debe analizarse en la sentencia el tema jurídico relativo a la fundamentación y motivación en los asuntos del orden administrativo, atinente a que debe considerarse la que, en su caso, haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado para complementarlo, y si a pesar de esa complementación se concluye la falta o insuficiencia de dichos requisitos formales, entonces se estimará que el acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. De lo anterior se colige que esta última porción normativa complementa la regulación que sobre el tema en cuestión, esto es, la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, se introduce en el artículo 117, último párrafo, para los actos materialmente administrativos. En consecuencia, este último precepto, en relación con los actos materialmente administrativos respecto de los que se aduzca falta o insuficiente fundamentación y motivación, prevé dos hipótesis, a saber: 1. Que al rendir el informe con justificación la autoridad responsable complemente el acto reclamado en esos aspectos; y, 2. Que ésta omita rendir ese informe o que haciéndolo, no realice esa complementación. Así, respecto del primer supuesto, el mencionado artículo 124, último párrafo, indica que, al dictar la sentencia definitiva debe considerarse la complementación efectuada y que, en el supuesto de que, aun ante ese adicionamiento, el acto reclamado carezca de los requisitos mencionados, se considerará que contiene un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración, en tanto que, tocante a la segunda hipótesis, esto es, la consistente en que la autoridad responsable omita rendir su informe con justificación o lo haga, pero sin complementarlo en esos aspectos, la ley de la materia no señala consecuencia expresa alguna al pronunciar la sentencia relativa; por lo cual, en ese caso, la

sentencia deberá ajustarse a los requisitos que al efecto establece el diverso artículo 74 de la Ley de Amparo, conforme a la litis que se advierta del acto reclamado, los conceptos de violación planteados y el correspondiente informe de ley.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 258/2014. Gasolinería RM, S.A. de C.V. y otro. 11 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Eliel Enedino Fitta García. Secretaria: Ayeisa María Aguirre Contreras.

Esta tesis se publicó el viernes 08 de mayo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

